

Columnas y comentarios radiales sobre la bochornosa posdictadura

EL DESCALABRO DE NUESTRA POLÍTICA

Juan Pablo Cárdenas S.



El descalabro de nuestra política
© Juan Pablo Cárdenas Squella
Ediciones Radio Universidad de Chile
ediciones@u.uchile.cl
www.diario.uchile.cl

Coordinador Editorial : Felipe Reyes
Diagramación : Gloria Barros
Inscripción ISBN : 978-956-368-089-8
Primera Edición : Diciembre de 2016

Prohibida la reproducción total o parcial, sin autorización.
Impreso en
Santiago de Chile, noviembre de 2016

Prólogo

En la inexorable evolución tecnológica de las comunicaciones es relevante el auge adquirido hoy por los medios digitales, además de la enorme recuperación de la radio después del desplazamiento que le había ocasionado la televisión. Desde el momento en que se puede navegar en internet y acceder simultáneamente a cualquier emidora del mundo, no hay duda de que son éstos los medios que hoy consolidan mayor receptividad. Aunque todavía las publicaciones de papel mantengan gravitación en la población más adulta y entre los que gustan leer, palpar, coleccionar y hasta olerlos.

Muchas veces me piden que escriba libros y yo he pasado escabullándome de esta tarea como un periodista que hace columnas en internet y realiza comentarios radiales cotidianamente. Sin embargo, entiendo la necesidad que tienen muchos de ver reunidas en libros estas intervenciones mías, como las de otros colegas que hacen lo mismo. Por otro lado, siguen en pleno desarrollo las ferias de libros y las librerías y hasta hay surgido recursos del Estado para promover la lectura en papel.

Es curioso, pero cuando basta hacer solo un “clic” para ingresar a los medios de todo el mundo, la inercia nos concentra demasiado en lo propio, en lo que se produce y difunde en nuestros respectivos países. Felizmente tenemos hoy contadores

digitales para darnos cuenta de esta realidad y de la preferencia que muchos manifiestan por otras posibilidades del ciberespacio. Entre ellas, por esa profusa actividad de las redes sociales, donde las mentiras y la manipulación informativa suelen ser pavorosas.

De esta forma es que accedí ante dos próximas ferias de concurrir con un nuevo libro en que he seleccionado, esta vez, solo columnas de opinión y comentarios radiales sobre los temas más recurrentes de nuestra política. En la idea siempre de consignar el malestar general de nuestra población, denunciar los escándalos que han coludido y postrado a la política y a los grandes negocios, así como entregar algunas luces de lo que debiera hacerse o corregirse, antes que nuestra institucionalidad y convivencia nacional se hunda en la crisis y en el conflicto social. Escritos y muchas veces espontaneas alocuciones en que ejerzo mi derecho a expresar lo que pienso y siento. Es decir, lo que brota siempre de mis convicciones y lo que creo necesario expresar para colaborar al entendimiento de nuestra nación sobre aquellos acontecimientos y fenómenos que nos implican a todos.

Juicios y propuestas que expreso de forma crítica, independiente y hasta irreverente. Convencido a esta altura de mi vida que los periodistas no tenemos más remedio que desatarnos de los prejuicios y compromisos políticos y filosóficos a la hora de interpretar honestamente la actualidad, nuestra principal materia prima. Porque claramente no estamos, tampoco, llamados a oficiar de historiadores ni profetas. Ni menos de moralistas, como algunos piensan, a pesar de que la ética debe ser el alma siempre de nuestra actividad u oficio.

Tengo la convicción de que todo se nos está derrumbando en Chile. La economía, el ordenamiento institucional heredado de Pinochet, la credibilidad en los partidos y hasta de las iglesias. Incluso la confianza y esperanza en esa democracia tan prometida como traicionada. Cuando hasta el crimen se ha hecho cada vez

más extremo y sórdido en nuestro país y los jóvenes se han puesto desafiantes al extremo en relación a sus anteriores generaciones.

Expresión de todo un cambio en que hoy prosperan más las relaciones de hecho que los matrimonios; en que el aborto está a la vuelta de la esquina y el individualismo campea en nuestras relaciones sociales. Cuando nos hemos constituido más en consumidores que ciudadanos y el lucro, el cohecho, las evasiones tributarias y el enriquecimiento ilícito han pasado a ser considerados atributos de los más exitosos emprendedores y dirigentes políticos y sociales.

Sin embargo, a la edad que pinto y declaro, yo no escribiría ni hablaría más si creyera que ya no tenemos esperanza, ni confianza en que todo es posible de ser cambiado. Si no creyera que todavía hay muchos chilenos, por ejemplo, que quieren recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social. Si no fuera por esos millones de chilenos y chilenas, niños, jóvenes y viejos que se movilizan masiva y espontáneamente para luchar por una nueva Constitución, un sistema previsional justo y defender la integridad de nuestros ecosistemas y recursos fundamentales amenazados por la usura, los intereses transnacionales y la traición de esos dirigentes políticos otrora vanguardistas que terminarían arrodillados ante el “libre” mercado y el capitalismo más voraz e insensible a la suerte de todos los seres humanos y de nuestra naturaleza.

Si no creyera que del caos deba surgir la luz. Si le temiera a las convulsiones sociales que siempre anteceden a los verdaderos y más sólidos cambios.

Juan Pablo Cárdenas Squella

PRIMERA PARTE

Columnas de opinión publicadas
en diario.uchile.cl, [el clarín.cl](http://elclarin.cl) y la
revista Punto Final

La superioridad de Allende

La historia es una expresión constante de causas y consecuencias, por lo que cada etapa de la evolución del mundo se explica en la realidad anterior. Sin embargo, es incuestionable que hay situaciones que resultan de fenómenos fortuitos, entre éstos muchas veces por la irrupción de liderazgos que, para bien o para mal, le señalan un curso difícil de predecir al futuro. Para Albert Einstein, “la coincidencia es la forma en que Dios permanece anónimo” en la evolución del cosmos; así como para Williams Faulkner “el pasado nunca está muerto o enterrado”. La irrupción funesta de un Hitler o un Stalin no se deriva solamente de sus meras circunstancias. Del mismo modo que líderes del tamaño moral de Mandela superan con creces lo que podía ser predecible de épocas tales como la del *Apartheid* sudafricano.

El Golpe Militar de 1973, obviamente tiene sustrato en la profunda crisis política que vivía entonces nuestro país, como en el quiebre profundo de nuestra convivencia, a raíz de los cambios económicos, sociales y culturales demandados mayoritariamente por la población, así como por la resistencia y desconfianza que éstos les produjeron a los enemigos de la Unidad Popular. Sin duda que la ruptura institucional fue alimentada por el voluntarismo y los errores de los gobernantes, así como también por falta

de tolerancia de sus oponentes. Pero el brutal asalto a La Moneda, el magnicidio y los horrores que siguieron más bien se explican en el apoyo que los golpistas recibieron de los Estados Unidos, como en la formación criminal de los oficiales que conspiraron y se hicieron del poder. Lo sucedido hace 40 años es producto, también, de la débil o nula convicción democrática y republicana de la derecha y del gran empresariado chileno que, más que “cómplices pasivos”, fueron activos condescendientes del régimen de terrorismo de estado que se impuso en Chile por 17 años, y que todavía mantiene cifras de adhesión que nos sonrojan como nación ante el mundo libre. En una conferencia pronunciada poco más de una década, el propio historiador Gonzalo Vial reconoció que los valores de la democracia nunca fueron plenamente asumidos por la derecha chilena, a no ser que el voto popular la favoreciera o estuviera determinado por el cohecho.

En nuestra secuencia histórica de caudillos y cuartelazos militares, tan sólo los cuatro intentos electorales de Salvador Allende por llegar a La Moneda avalan su consecuencia democrática, su disposición a perder los comicios una y otra vez sin vacilar un instante de que su “vía chilena al socialismo” debía estar legitimada por la mayoría ciudadana. Tironeado o tentado muchas veces por quienes pensaban en el camino de las armas y la revolución social, Allende prefirió respetar la Constitución y las leyes vigentes y hasta llegó a aceptar, antes de asumir el Gobierno, que se le impusiera un arbitrario y ofensivo Estatuto de Garantías Constitucionales por quienes, desde antes de que se ciñera la banda presidencial, ya estaban juramentándose para derrocarlo.

En efecto, el Golpe de Estado posiblemente no hubiera prosperado sin la acción desestabilizadora y subversiva de las bandas militares de Patria y Libertad y del Partido Nacional. Como tampoco si la cúpula de la Democracia Cristiana no hubiera alineado a esta colectividad con la estrategia de los conspiradores. Qué

duda cabe que todo el tiempo en que Patricio Aylwin y otros voceros demócrata cristianos justificaron el alzamiento militar y permanecieron impertérritos ante la realidad de los campos de concentración, los detenidos desaparecidos, el exilio y la tortura los convierte en sujetos activos de lo sucedido. De la misma forma que los integrantes de la Corte Suprema y los jueces abyectos, que respaldaron entusiastamente el Golpe, ungieron al Tirano y desestimaron el clamor de justicia de miles de víctimas que buscaban afanosamente el paradero de sus familiares, que cesaran las ejecuciones sumarias y constataran la tortura sistemática.

Cómo no reconocer que la Dictadura hubiera tenido cualquier otro perfil si en último momento no se hubiera impuesto Pinochet en la jefatura de la Junta de Gobierno y si él mismo no hubiera discurrido reclutar a los oficiales más sanguinarios para institucionalizar la Dina y sus brigadas de la muerte. Tampoco hubiera sido todo como fue si los militares no hubieran contado con ese séquito de civiles que le dieron diseño y ejecución al modelo económico que el régimen de facto nos legó, cuanto a una Constitución espuria en su origen y contenido que la Pos Dictadura ha seguido administrando por más de 23 años con algunos mínimos retoques. De las situaciones más cínicas advertidas de este tiempo es la declaración de ex ministros, subsecretarios y otros colaboradores de confianza de Pinochet que dicen no haber advertido nunca el genocidio, que jamás percibieron las denuncias hechas en su mismo momento por las revistas, diarios y radios disidentes, cuyos periodistas tuvieron que someterse a los tribunales y jueces serviles que los procesaban y hostigaban.

A 40 años del Golpe Militar se desnuda la impostura de quienes, vociferando su calidad de demócratas, respaldaron la asonada más terrible de nuestra historia contra nuestro Estado de Derecho y la decisión soberana del pueblo. La hipocresía de aquellos políticos que se han quedado a años luz de distancia del ejem-

plo republicano de Allende, su coraje y fidelidad con un ideario consolidado en décadas de impecable trayectoria política y ética. Ideas, por lo demás, que hoy vuelven a prender en la voluntad de los jóvenes y trabajadores que claman justicia social y equidad a lo largo de todo el país. Luego de que los sucesores del Dictador se dejaran encantar por los disparates neoliberales, la política culpular, resignándose, además, al tutelaje militar.

La consecuencia y la lealtad de Allende son un ejemplo, también, para quienes padecieron entonces del “infantilismo revolucionario”, quienes llegaron incluso a acusar de burgués y socialdemócrata al extinto Mandatario. Un tapabocas para aquellos jacobinos de entonces y hoy devenidos en prósperos “emprendedores” y/o mediáticos columnistas acogidos, cual hijos pródigos, por El Mercurio y las entidades patronales. Un mentís contra de aquellos que ya estaban asilados en las embajadas antes que el cuerpo de Allende alcanzara a enfriarse, para después vivir el exilio dorado que favoreció a los más conspicuos y rabiosos dirigentes de la izquierda. Los mismos que enseguida llegaron oportunamente a tomarse los partidos y administrar la transición de consuno con los que antes habían vituperado. Para ponerse a medrar, finalmente, de los recursos fiscales y del sistema electoral binominal.

Y, como corolario, acabar pidiendo perdón por sus pecados de juventud y no por su traición, cobardía y oportunismo. En vez de pedir perdón por sus compañeros y camaradas que instaron a la confrontación, murieron por ellos, fueron humillados en su dignidad, cuanto segregados en estos últimos 24 años de nuevas iniquidades.

El bochornoso desempeño exterior de la clase política

Con toda seguridad, los papagayos internacionales que nos previnieron de un fraude electoral en los comicios legislativos venezolanos continúen advirtiéndonos del carácter totalitario del régimen de Nicolás Maduro, de las trampas del sistema electoral de este país y de la necesidad de que el gobierno legitimado por 20 elecciones ciudadanas en 18 años de revolución le ceda paso a los opositores que acaban de triunfar en estos comicios. Seguros, como estamos, de que no les va a satisfacer la holgada victoria obtenida, cuando lo que se proponen es la recuperación total del poder. Reacios como son todos los derechistas del continente a la democracia si ésta les limita sus privilegios, adictos como son a las dictaduras cívico militares.

En lo que a los chilenos nos atañe, no podemos soslayar la vergüenza que nos provoca la actitud de nuestros ex mandatarios que durante veintiséis años han administrado la posdictadura, verdaderamente encantados con la Constitución de Pinochet, con el sistema electoral binominal, por la institucionalización del cohecho, la influencia millonaria de la propaganda y muy cómodos, por cierto, con una participación ciudadana cada vez más

exigua. Como que en las últimas elecciones se alcanzara el 58 por ciento de ausentismo electoral, versus la multitudinaria concurrencia a las urnas de los venezolanos que también contemplan la voluntariedad del sufragio en su sistema político.

Como en 1973, la misma derecha que conspirara contra el régimen democráticamente constituido se ha propuesto, ahora, desestabilizar al gobierno de Venezuela sumando nuevamente a su cometido a demócrata cristianos y otros referentes que entonces celebraron el Golpe Militar, el magnicidio del presidente Allende y largos años de violaciones sistemáticas a los DDHH que todavía horrorizan a la humanidad. Aunque en esta oportunidad han sido capaces de agregar en esta grosera injerencia en los asuntos internos de un país vecino y hermano a aquellos socialistas reacomodados y corruptos, y que hoy se demuestran completamente genuflexos ante la política exterior de los Estados Unidos, la intervención de los gobiernos españoles en nuestro continente o sometidos al influjo cotidiano del diario madrileño El País. Periódico que el matutino La Tercera ofrece a sus suscriptores en Chile para darle algún valor agregado a su periodismo mediocre y servil, cuanto digitado por los intereses de las grandes empresas que financian la política y controlan las decisiones de nuestros parlamentarios y gobernantes.

De esta manera es que se explica que un Ricardo Lagos (el del MOP Gate) haya firmado una declaración con el derechista Martiano Rajoy y un revenido Felipe González, entre otros, para abogar por el reconocimiento de los resultados previstos por éstos en Venezuela, a pesar de que nuevamente ha quedado demostrado que en ese país existe una normativa y una infraestructura electoral que está entre las más inexpugnables del mundo. Como también otros ex jefes de estado y de gobierno latinoamericanos, recordados por sus tenebrosas violaciones de los derechos humanos y políticos de sus países (como el ex mandatario Pastrana

de Colombia) se apersonaban en estos comicios y vulneraban las disposiciones de este país, a fin de darle “acompañamiento” a los candidatos de la ultra derecha y alentar la conspiración de los sectores más ultras de la derecha venezolana. En este sentido, no podemos olvidar que fue el mismo Ricardo Lagos el primero en reconocer en América Latina al líder de aquella frustrada asonada golpista en contra de Hugo Chávez.

Con toda seguridad es que ahora estos mismos personajes van a alentar que en Venezuela se realice otro referéndum revocatorio para obligar a la renuncia de Nicolás Maduro, en el interés que tiene siempre Estados Unidos y otras potencias de acceder al petróleo, cuyas más grandes reservas mundiales se encuentran justamente en Venezuela. A ver si con el mismo rasero se atreven a sugerir, ahora, la renuncia del presidente francés Francois Hollande que en el mismo día enfrentó un desastre electoral para su gobierno socialista, donde el partido de la extrema derecha ganara abrumadoramente las elecciones. A ver si aquí mismo estos políticos tan “demócratas” como los que fueron a Caracas regresan a Chile y se proponen postular que la Presidenta Bachelet adelante su salida del Gobierno luego de las desastrosas cifras de apoyo popular expresadas por las encuestas o luego de la próxima contienda municipal. Si es que los chilenos vuelven a abstenerse tan masivamente o si el oficialismo baja ostensiblemente su apoyo ciudadano.

A ver si siquiera se ponen de acuerdo entre ellos para exigir que dejen sus cargos los políticos formalizados o condenados por fraude al Fisco y recepción ilícita de recursos desde las más poderosas empresas, además de quedar inhabilitados para ejercer en la administración pública, tal como se condena a otros grandes delincuentes comunes, impedidos de sufragar mientras estén encarcelados o, incluso, de por vida. Mientras en Venezuela, como consta, la población penal también pudo ejercer sus derechos cívicos en esta última contienda.

Vaya que sería saludable que nuestros políticos empapados por el entusiasmo electoral del pueblo venezolano le pierdan el miedo a la ciudadanía y se avengan a la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, tal como ya lo propician los triunfadores de estos últimos comicios en Venezuela. Abandonando sus continuas comedias al respecto, como el de esta última comisión destinada a velar por el proceso constituyente propiciado por el Ejecutivo, sin que nadie sepa, a ciencia cierta, a quiénes representa este grupo y qué facultades realmente tienen, más allá de farandulizar aún más una iniciativa que no tiene siquiera puerto durante la presente administración, según propio reconocimiento de la Primera Mandataria. Una instancia que se suma a la interminable lista de comisiones que verdaderamente se proponen esconder esa serie de dilaciones e incumplimientos políticos tan característicos del actual gobierno y de una clase política que predica en el mundo lo que vulnera dentro de su propio país.

A ver si alguien hace el cálculo de cuánto le costó al país financiar estas delegaciones parlamentarias a Venezuela para ir a descubrir la paja en los asuntos ajenos, mientras que aquí se esconde la basura debajo de las alfombras de nuestras instituciones e impunidades judiciales. Como la que acaba de consumarse entre el Fiscal Nacional saliente y uno de los políticos más emblemáticos de la dictadura, como del largo tiempo que le ha seguido, apenas condenado a una pena remitida por estafar reiteradamente al Fisco. Con la posibilidad, para colmo, de seguir ejerciendo totalmente sus derechos cívicos y obligado a devolver solo la mitad, y en cuotas, lo acaudalado espuriamente. Sentencia celebrada, por supuesto, desde La Moneda por el propio Ministro del Interior a objeto de que las sentencias que sigan sean iguales o más benevolentes con sus colegas del oficialismo.

La guerra nunca tiene rostro humano

Acabo de leer *La Guerra no tiene rostro de Mujer*, otro magnífico libro de Svetlana Alexiévich, la última Premio Nobel de Literatura. Un relato sobrecogedor de la experiencia de muchas jóvenes soviéticas que se enrolaron como combatientes en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la feroz resistencia a la invasión nazi en los territorios que hoy habitan especialmente rusos, ucranianos y otros. Una secuencia de relatos de las ya ancianas sobrevivientes que “por amor a la patria” dejaron sus hogares, estudios y ocupaciones para tomar las armas y, muchas veces, igualarse o superar la eficiencia militar de los hombres. No recuerdo un mejor registro del horror de la guerra y de los extremos que puede llevarnos el odio en la ocupación o defensa de los límites geográficos que separan a una humanidad que recién empieza a descubrir que todos somos parte de la misma especie, sujeto de los mismos derechos y obligaciones.

Y decimos “recién”, porque ya vemos cómo continúan aflorando los nacionalismos y las discriminaciones en nombre de la patria, cómo seguimos comprobando hasta en los países más civilizados (y supuestamente cultos) insensatas explosiones independentistas

contradiendo totalmente la profecía de muchos intelectuales y políticos que, después de las grandes conflagraciones, apostaron a un mundo más global e integrado, y en el cual se fueran borrando los límites señalados por los mapas. En efecto, los desacuerdos que tienen en peligro la comunidad europea y los conflictos vecinales que se alientan aquí mismo, en nuestra región, de verdad dificultan mucho que la bestia que habita en nuestra naturaleza humana logre ser dominada por la inteligencia.

Aunque a menudo el pensamiento vanguardista apela a la solidaridad mundial, a la justicia universal y a la hermandad de todos los pueblos del mundo, con frecuencia comprobamos que estos valores son contradichos en la práctica. Sobre todo cuando los “izquierdistas” alcanzan los gobiernos y descubren que el patrioterismo suele causarles muy buenos dividendos políticos, alentando el desprecio hacia las naciones extranjeras y aquellas minorías internas que también se reconocen como distintas y en el derecho a independizarse. Millonarios presupuestos y privilegios en favor de las Fuerzas Armadas, en una actitud que en nada se diferencia de lo que habitualmente hacen las derechas para garantizarse hegemonía.

Que duro resulta después de leer a Svetrana Alexiévich constatar el discurso de algunos gobernantes y parlamentarios nuestros interesados en recuperar prestigio en alentar en nuestra población un sentimiento retrógrado y, extemporáneo por lo tribal y medieval. Buscando, por ejemplo, que los chilenos se enorgullescan de la superioridad bélica y consientan en que nuestra socialista Michelle Bachelet se encarama en aviones de guerra y tanques a objeto de agraviar y amenazar a peruanos y bolivianos. Para advertirles que ni “un centímetro de territorio o mar” podrá ser recuperado por ellos luego de las ocupaciones que Chile conso-

lidó de aquellos territorios del norte, y que en los mapas de ayer pertenecían a quienes perdieron la Guerra del Pacífico. En la peor intransigencia a practicar una efectiva diplomacia que se demuestre capaz de una solución que nos lleve a ahorrarnos ingentes recursos que podrían quedar destinados al desarrollo y al progreso de nuestra naciones, consolidando una paz fructífera y duradera.

Bien le haría a los moradores de La Moneda y a algunos vociferantes parlamentarios leer este asombroso libro que, mediante testimonios tan reveladores, nos señala que la obligación de los progresistas de hoy es afanarse en que nunca más nuestros países caigan en la tentación de la guerra. Menos, todavía, para aminorar el descrédito de sus pobres logros como gobernantes y servir a los intereses de los grandes productores y traficantes de armas.

Bochorno nos causa, por esto, que las actuales autoridades no se hayan demarcado un centímetro, tampoco, de las políticas practicadas por la derecha a lo largo de nuestra historia y se encuentren tan empeñadas en asolar por la fuerza y el terror las justas demandas de los mapuches con quienes, hace mucho tiempo, debiéramos haber logrado una convivencia pacífica, como una integración en el justo respeto de su identidad cultural y derechos económico sociales. Vergüenza que también nos da su negativa a resolver los diferendos limítrofes con los países hermanos, después de que hasta un genocida como Pinochet se demostrara dispuesto a ello.

No hay duda que la guerra ya no debiera ser considerada como “la extensión de la política por otros medios”. Es la política la que se degenera y fracasa con el conflicto bélico; es la humanidad toda la que pierde con la victoria o la derrota de las guerras. Como tan bien se comprueba en las páginas de esta inmensa escritora. No en vano muchos países desalientan ahora el enrolamiento militar

y a nadie se lo obliga a una actividad tan repugnante y que va quedando en manos sólo de los mercenarios o desquiciados.

Más que guerras justas o injustas, debemos asumir que son todas repugnantes. La autora de este libro nos dice que la “guerra no tiene rostro de mujer” Sin embargo, lo que corresponde entender que también carece de rostro humano.

El subterfugio del juicio abreviado

Los tribunales superiores de justicia deben impedir que mediante el mecanismo de los “juicios abreviados” se puedan eludir las penas que le corresponden a quienes infringen gravemente la Ley. El ex senador de la UDI Jovino Novoa se ha convertido en un caso emblemático al respecto por la posibilidad que le ofreciera el fiscal nacional Sabás Chahuán de confesarse culpable de los múltiples delitos que se le imputaban a cambio de obtener una pena remitida. Esto es, salvar del presidio efectivo que se merecía por sus graves y reiterados delitos. De esta forma es que hace muy bien la agrupación Ciudadano Inteligente de recurrir a la Corte de Apelaciones para echar abajo un arreglo judicial que ha repugnado a la población y tanto ha acrecentado el descrédito de nuestras instituciones públicas. A todas luces resultó imprudente que, a horas de abandonar su cargo, el Fiscal Nacional se empeñara en dejar cerrado el caso que afectaba al ex parlamentario, en vez de delegarlo a su sucesor.

En el peor año vivido por Chile en materia de delitos tributarios, colusiones y abusos empresariales, así como como por aquella sucesión de denuncias de cohecho y soborno en la política, se hace preciso que nuestros jueces acometan acciones claras

destinadas a castigar estas reiteradas transgresiones. De la misma forma en que el Ejecutivo y el Parlamento debieran empeñarse en legislar para tipificar estos despropósitos y señalarles sanciones más estrictas.

Los escándalos que se suceden a diario tienen base en una legislación demasiado laxa en relación a los delitos de “cuello y corbata”. En normas que, en realidad, alientan a cometer los abusos contra los consumidores porque solo castigan con multas muy discretas las millonarias estafas perpetradas contra la población y el erario nacional. Por ello es que aparece inaudito que un gobierno como el de Ricardo Lagos Escobar haya suprimido la pena de cárcel efectiva para los grandes defraudadores, sabiendo que durante la Dictadura ya se habían dictado leyes intencionadamente blandas para los evasores tributarios, para quienes vulneraran sistemáticamente los derechos laborales, cuanto para quienes se coludieron largo tiempo para convenir precios y burlar los principios del mercado como de la libre competencia que tan celosamente defendían.

Hay que reconocer que el “juicio abreviado” es un recurso sugerido por los abogados defensores precisamente a los delincentes más ricos y poderosos, y que lo que más temen es a pagar sus delitos con reclusión carcelaria. Para nada es un mecanismo procesal que se le ofrezca a los transgresores comunes, a los pobres e indigentes que, por cierto, carecen de medios para contratar abogados defensores, así como de los recursos económicos para indemnizar a sus víctimas.

Esta flagrante desigualdad ante la Ley, entonces, es algo que los jueces decentes deben advertir a fin de que el juicio abreviado no siga practicándose como una triquiñuela que, en realidad, favorece la impunidad y atenta contra el debido proceso.

Toda la confianza social que había despertado la resuelta actitud de algunos fiscales se ha desmoronado por el epílogo de uno

de los casos más bullados. Esto es, mediante el juicio abreviado al ex senador de la UDI que, además de salvarlo de la cárcel, le permitiera sortear otras graves acusaciones; es decir, delitos que simplemente fueron desestimados por el Ministerio Público a fin de hacerle propicio este recurso. A partir de esto es que ya se les ha aplicado este subterfugio legal a los tenebrosos ejecutores de la estafa de La Polar, así como ya se propone para salvar, también, a los dueños y gerentes de la Papelera que por 10 años inflaron sus precios en desmedro de los millones de chilenos obligados a consumir sus productos. Hasta los propios políticos receptores de aquellos espurios recursos de Soquimich apuestan a que, de culminar luego estos procesos con juicios abreviados, podrían estar a tiempo de recuperar imagen en las encuestas y volver a quedar bien posicionados para las elecciones presidenciales y parlamentarias próximas. Confiando, como siempre, en que el tiempo nuble la conciencia ciudadana sus aberrantes acciones.

A todas luces, los magistrados de la República harían muy bien en reabrir los juicios interrumpidos por estos “arreglos” abreviados, de manera que se imponga la justicia por sobre estos consabidos resquicios legales. A objeto de que la empresa, la política y otras actividades se sacudan de tantos vicios que exacerban el descontento social y afectan nuestra alicaída imagen internacional. En este sentido, hasta es preferible que estos procesos que tanto escandalizan al país se prolonguen a que se les dé un carpetazo judicial como el que acometió el último Fiscal Nacional. Confiado, seguramente, en las recompensas de la política y de los más poderosos empresarios.

La clase política de tumbo en tumbo

Es muy difícil precisar el origen de la corrupción política en nuestro país. En el pasado, prácticamente ningún gobierno escapó a este fenómeno, exceptuando la administración de Salvador Allende a quien la Dictadura nunca pudo acreditarle algún delito o falta grave en este sentido, pese a todos los esfuerzos por desprestigiar su paso por La Moneda. Intento en que contó, incluso, con la dócil actitud de los Tribunales.

Durante los 17 años de Pinochet se consumaron horrendas acciones en contra de los bienes del Estado y el erario nacional. Cada privatización de las empresas públicas representó un acto de expoliación a la “propiedad de todos”, como una puerta franca al enriquecimiento ilícito de ciertos personajes que, de conspiradores y golpistas, empezaron a ser reconocidos como prestigiosos empresarios. El gobierno de Aylwin, entre otras cosas, no quiso que se transparentaran estos procesos irregulares y se llevara a la Justicia a los defraudadores del Fisco a fin de recuperar las empresas mal habidas por los mismos nombres y apellidos que hasta hoy se asocian a este tipo de escándalos. Por el contrario, la impunidad fue tan absoluta que rápidamente estos personajes entraron en connivencia con las nuevas autoridades, logrando a su favor

nuevas “privatizaciones” y asumiéndose, sin mayores remilgos, como financistas electorales.

Durante toda la posdictadura lo que hemos observado es la sacralización de todo lo obrado irregularmente por el Régimen Militar, así como el sorprendente viraje político de algunos connotados jacobinos del pasado que, en el paso por algún cargo público, echaron sus bases para derivar hacia la actividad privada, el lucrativo tráfico de influencias y la incorporación a los directorios de las grandes empresas, de la Banca y las transnacionales empoderadas de toda nuestro territorio. Al mismo tiempo que se asentaban en el sistema educacional, la administración de la salud y de la previsión y en aquellas áreas que resulta más rápido consolidar riqueza, por la posibilidad de asaltar los recursos fiscales y los bolsillos de los trabajadores.

Todo un proceso en que rápidamente hay no pocos que abandonaron sus ideales socialistas para rendirse a la moda neoliberal, incorporarse de lleno a la farándula televisiva, destacarse como protagonistas de las páginas sociales de El Mercurio y hasta convertirse en los columnistas y opinólogos más dilectos de la llamada “gran prensa” que, de su complacencia con los crímenes de la Dictadura, se ha erigido ahora en la celadora de la institucionalidad heredada, el sistema electoral acotado, cuanto del modelo económico y social. Mientras que a la prensa democrática, independiente y, por lo mismo, incómoda se le armaban operaciones desde el propio Ministerio del Interior para sofocarla.

En esta suerte de impunidades y connivencias es que se desdibujaron los límites entre derechistas e izquierdistas, oficialistas y opositores, en beneficio de la consolidación de una “clase política” que ha administrado con desparpajo la repartija de cargos, las asignaciones de negocios desde el poder y la reproducción de los mismos sujetos en la escena parlamentaria, en los municipios y la administración de las reparticiones públicas. Más de un cuarto de

siglo administrando una transición a la Democracia que, ciertamente, no ha sido, las cúpulas políticas se han asegurado ingentes recursos para postularse y reelegirse en cada proceso electoral, dilapidando recursos que están muy por encima de lo que se gasta en los países más ricos. En la evidencia, además, de que estos recursos no salían de sus sueldos y dietas, ni de los aportes del exterior, ni del bolsillo de los codiciosos empresarios criollos, sino de la evasión tributaria, como ahora finalmente se devela. Como, por cierto, también, del peaje que durante todos estos años se le ha cobrado a las empresas extranjeras para operar en Chile a sus anchas, obteniendo las mayores utilidades del mundo y agotando nuestras ricas reservas.

Políticos que proclaman sus objetivos de equidad, pero han llegado a hacerse prácticamente propietarios de sus cargos públicos, gracias al cohecho y la desigualdad en la contienda electoral, en el fomento y amparo de operaciones fraudulentas como la del Consorcio Penta y la que, ahora, involucra al hijo y la nuera de la propia Jefa de Estado. Para vergüenza, por supuesto, de toda nuestra institucionalidad, aumentando el descrédito de la misma y, si no hay mal que por bien no venga, dar fundamento a la causa de quienes nos sentimos indignados, pero debemos pasar a la acción para desalojar a todos los inescrupulosos de la política. Confiando en que, por fin, aquellos sectores segregados por el sistema institucional renuncien a servirle de comparsa a la clase política en los nuevos eventos electorales o se dispongan a ser cooptados por ésta. Como sucedió el año pasado con tantos líderes y movimientos que renunciaron a la posibilidad de imponer un cambio desde las calles y no al abrigo de una institucionalidad viciada transversalmente y hasta sus entrañas.

Una izquierda que marque diferencia

Después de que los partidos y los supuestos representantes del pueblo terminara postrados ante el gran empresariado, rendidos al cohecho y soborno, se hará propicio que las organizaciones vanguardistas sean muy cautelosas a la hora de escoger a sus líderes y candidatos y efectivamente idóneos, como transparentes en financiar sus actividades. Para que los escándalos conocidos marquen un antes y un después en nuestro país es necesario que las organizaciones que buscan una genuina consolidación democrática, al mismo tiempo que recuperar el servicio público en la política, sean capaces de demostrar probidad y consecuencia, además de encarnar los valores de justicia social que se proponen.

Con la deserción ideológica de las diversas expresiones del socialismo, así como de quienes se proclamaban social cristianos, los valores de la izquierda deberán probarse sobre todo en la diáfana trayectoria de sus líderes. Así sea que las leyes de la institucionalidad heredada de la Dictadura y sacralizadas por sus sucesores en La Moneda y el Parlamento permitan recaudar apoyos anónimos de las empresas, además de realizar otras triquiñuelas, lo cierto es que no se necesitaban más de dos dedos frente para entender que toda contribución de la clase empresarial a sus postulaciones constituye un mecanismo del sector patronal para garantizarse

gobernantes y legisladores fidelizados a sus intereses, así como renuentes a las reformas institucionales y económico sociales.

En la perversa relación de la política y los negocios es donde se puede entender a cabalidad que el orden institucional haya resultado casi intacto en 25 años de posdictadura, así como que se hayan promulgado leyes -como la de Pesca- redactadas prácticamente con el puño y letra de los lobistas y los intereses de quienes repartieron dinero efectivo a los integrantes de las comisiones del Congreso Nacional encargadas de legislar. Así como que en tantos años, también, las contribuciones electorales de la gran minería hayan salvado de pagar un royalty justo a las empresas enseñoreadas en los yacimientos, como en la explotación de otros recursos naturales no renovables y estratégicos.

Inaudito nos resulta que candidatos de vociferante discurso en favor de los cambios y de las “buenas prácticas” llegaran al extremo de solicitar y procurarse recursos de empresas como Soquimich y Penta, de tan espurio origen por tratarse de entidades arrebatadas por Pinochet al Estado a objeto de regalárselas a uno de sus yernos, cuanto a otros amigos y secuaces. Ciertamente que la invocada “legalidad” de ciertas solicitudes y donaciones no impide que éstas estuvieran completamente reñidas con la ética.

En este sentido, todo el mundo político y social, que desde la marginalidad del sistema decidió competir con sus propios candidatos en 2011, a lo que realmente contribuyó fue a legitimar un sistema minoritario y excluyente, como a develar los impropios apetitos de sus caudillos. Quienes, para colmo, terminaron aceptando las reglas del juego del duopolio político empoderado en nuestras instituciones públicas. Incautas pretensiones que los llevaron a golpear las puertas de los mismos financistas de aquellos para obtener inútilmente cupos en el sistema político.

De esta forma es que en el futuro lo consecuente y realista sería converger en una expresión electoral única para arrebatarle

algún espacio en el Poder Legislativo al nuevo sistema electoral que, como se sabe, más que proporcional se comportará como un binominal corregido, aunque ofrezca algo más de competitividad que el anterior. Asimismo, en el descrédito generalizado de los partidos y pactos actuales, ciertamente aparece más plausible alcanzar la propia Moneda con un líder intachable y confiable que ciertamente se proponga emprender la causa democrática hasta aquí traicionada. En el propósito explícito y sincero de echar al inodoro el sistema político económico y social actual.

La política sobre un polvorín

En la crisis política previa al 11 de septiembre del 73 muchos descartaban que los militares pudieran proponerse un Golpe de Estado. A pesar de todos los cuartelazos históricos, existía en el propio Allende y la dirigencia política la idea de que nuestro sistema institucional era sólido y que los uniformados no violarían su compromiso republicano. Respecto de los conspiradores, sabemos que se trató de personas que, en general, no estaban en el primer círculo de la política y que pertenecieron a grupos sediciosos marginales. Luego se asumió que la idea de la sublevación castrense se gestó en Estados Unidos y en buena parte hizo uso de los recursos que este país destinó para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular. El asalto a La Moneda, la muerte del Presidente y todo el horror que se consumó tomó por sorpresa al conjunto de la clase política, aunque inmediatamente en la Oposición importantes figuras políticas aplaudieron el “pronunciamiento militar”, por largo tiempo justificaron la acción de los golpistas y hasta se incorporaron entusiastamente a las tareas gubernamentales. Incluso hubo algunos incautos que pensaron que los uniformados se retirarían muy pronto a sus cuarteles para entregarle el poder a quienes habían sido adversarios o enemigos del depuesto mandatario.

Lo que vino, sin embargo, fueron 17 años de férrea dictadura y otros 25 años en que el país ha quedado bajo la tuición de un orde-

namiento institucional definido por el Régimen Militar, un sistema electoral que acota la representación política en el Congreso y con una soberanía popular muy precaria. En que, por lo demás, han quedado resguardados los lineamientos económicos neoliberales, restringido los derechos sociales, al mismo tiempo que enseñoreadas las cúpulas empresariales, como la concentración informativa.

Largos años marcados por la represión, el miedo y niveles escandalosos de impunidad que llevaron a los gobiernos de la Concertación a hacer “justicia en la medida de lo posible” y hasta a organizar una operación de salvataje a un Pinochet retenido en Europa a fin de ser juzgado por sus delitos de lesa humanidad. Un rescate a sabiendas, naturalmente, de que éste jamás sería condenado a su retorno, ni siquiera por la forma en que se enriqueció en el poder.

Con el pretexto de que en cualquier momento los uniformados podrían animarse a interrumpir la Transición, lo cierto es que ésta quedó inconclusa y hasta se llegó a sacralizar el ordenamiento jurídico y el sistema económico heredado. Conscientes de su debilidad, es que los nuevos gobernantes consintieron en clausurar la prensa independiente y entrar en grosera connivencia con los sectores empresariales enriquecidos ilícitamente en el despojo de los bienes fiscales. Para devenir paulatinamente en un encantamiento, incluso, con las ideas y realizaciones de la Dictadura.

Con la “política de los consensos” se fueron esfumando los perfiles ideológicos entre la centroizquierda gobernante y la centroderecha opositora. A tal grado, por cierto, que los cuatro años de Sebastián Piñera en La Moneda ofrecieron realizaciones más progresistas que la de sus antecesores, así como que respecto del gobierno de Ricardo Lagos muchos han concluido de que fue el más derechista de todos los de la posdictadura.

Pero con el paso de los años, la ciudadanía, los estudiantes y los grupos más contestatarios han venido perdiendo el temor y empoderándose en las exigencias por una nueva Carta Fun-

damental, una Reforma Educacional y otra serie de demandas que hoy se vocean en las calles y las organizaciones sociales. Exigencias que al hacerlas suyas un nuevo referente como el de la Nueva Mayoría, les permitió a los partidos de la Concertación, más el Partido Comunista, volver a La Moneda en la promesa de su realización. A contrapelo, por supuesto, de muchos dirigentes que dentro de esta coalición no consentían verdaderamente con los cambios y solo asumieron el discurso transformador para derrotar electoralmente a una derecha escindida y desprovista de propuestas. Con todo, más de un 58 por ciento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales prefirió abstenerse o anular su voto por la falta de credibilidad de las cúpulas partidarias, la apatía social o el desencanto respecto de un régimen democrático a años luz de ser representativo; ni menos, todavía, participativo.

De esta forma es que hoy finalmente arribamos a un panorama desolador para el quehacer democrático pendiente y la realización de aquellas reformas económico sociales tan urgentes en un país marcado por las profundas desigualdades. En un diagnóstico compartido por todos los sectores, se asume el descrédito general respecto de los grandes referentes políticos y sociales y el deterioro del liderazgo de la propia Jefa de Estado, su capital más importante. Es dramático comprobar en las últimas encuestas que más de un 65 por ciento de los chilenos piensa que al conjunto de la clase política lo que más le interesa es su conveniencia personal. Comprobándose en menos de un año de gobierno la desesperanza que existe respecto del propósito de una nueva Carta Fundamental, una Asamblea Constituyente, la ansiada reforma laboral y las transformaciones en los sistemas de salud y previsión, entre otros objetivos. Una frustración que también se manifiesta ante los discretos resultados de la Reforma Tributaria y, ahora, con la errática actitud gubernamental respecto de los proyectos educacionales.

La reelección de Michelle Bachelet entrañaba el compromiso de un cambio profundo que ahora es desafiado con arrogancia por las grandes patronales, la poderosa prensa opositora, pero también por la dispersión de su base política. Desacuerdos que ya no le aseguran plenamente al Ejecutivo contar con los votos en el Parlamento para implementar sus iniciativas, lo que indefectiblemente llevará a la población a radicalizar sus demandas, desahuciar la última posibilidad de un cambio dentro de la institucionalidad heredada, cuanto a buscar derroteros políticos por fuera del orden vigente. Cuando se sabe, además, que la institucionalidad actual es ilegítima en su origen y contenido, según lo reconocieron en el pasado los propios actores actuales en el Gobierno y el Parlamento.

Es cosa de observar la cantidad de conflictos sociales a lo largo de todo el país. Las huelgas, bloqueos de caminos y una violencia en escalada que se confunde con la delincuencia común, el empoderamiento de las redes de los narcotraficantes y las inquietantes formas de corrupción policial. Que se traduce también en los bombazos, asaltos a la banca y el comercio y, como recién en Talcahuano, en la destrucción de una oficina pública.

Una situación, sin duda, que está desbaratando nuestra convivencia, que terminará por aislar a las cúpulas políticas y que pudiera conducirnos a una arriesgada e incierta salida. De la que nadie puede asegurar un buen resultado, una insurrección popular legítima al momento que se extinga la enorme paciencia que ha demostrado el pueblo en estas últimas décadas. Cuando lleguemos a grados de tensión y confrontación que nos expongan a una nueva asonada militar que, al igual que en 1973, muchos estiman todavía como improbable. A pesar de que el pinochetismo sigue tan vivo en las expresiones políticas de la derecha, las liturgias castrenses y en el corazón de los sectores patronales marcados por la codicia y el desprecio a los derechos de los trabajadores.

ANÁLISIS POLÍTICO

Todo podría ser distinto

Hay quienes dicen que en la política es inevitable que existan altas dosis de corrupción e irresponsabilidad. Que si hasta en las instituciones religiosas podemos apreciar tantos despropósitos, el servicio público también es un desempeño humano y, por lo mismo, susceptible de errores y horrores. Se asume que los empresarios, con menos razón todavía, podrían estar tan exigidos por la ética, cuando lo que justamente estimula su quehacer es el afán de lucro. Esto es, el propósito de obtener las mayores ganancias posibles del trabajo y productividad de sus trabajadores. Y, por cierto, del consumo de una población ojalá cada vez más ávida de bienes y servicios.

Ciertamente que no puede haber oficio en que la “condición humana” no se manifieste en sus voracidades e irrespeto por los derechos de los demás. Somos, claro, parte de una selva en que irremediablemente los más grandes van a persistir en “comerse a los más débiles”, pero también es cierto que los seres humanos pueden sobreponerse al determinismo genético, así como sublimar sus bajos instintos en el servicio de la justicia y la paz impensables dentro de la jungla salvaje. Tal parece que somos la única especie capaz de liberarse de las ataduras y vicios propios de su naturaleza gracias, precisamente, a nuestra inteligencia, condición espiritual y, para algunos, destino trascendente.

Y en este sentido es que la política, el sacerdocio, la educación y hasta el periodismo son considerados verdaderos apostolados al servicio del progreso de la humanidad, de la convivencia armónica entre los pueblos y la posibilidad de transformar la historia. Gracias a estas actividades o, más bien, a sus líderes dilectos es que las sociedades han ido reconociéndonos a todos como iguales en dignidad y derechos. Lo que en concreto ha logrado avances tan significativos como la abolición de la esclavitud, la progresiva redención de los pobres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y, hoy, hasta de la dignidad de los animales y del propio planeta que habitamos.

De esta forma es que la acción política y el cometido de estas otras actividades deben exigir –aunque cueste– la probidad de quienes las ejercen, emprenderse sin afán de lucro y estar sometidas siempre al rigor de las regulaciones. Al respeto de normas y supervisiones más estrictas que las que rigen para el desempeño de otras profesiones u oficios. De allí es que en los mejores momentos de la historia los más destacan siempre son los héroes, un calificativo que puede parecernos demasiado rimbombante, pero que nos señala nada más que la condición de aquellos seres “imprescindibles” dispuestos a dar sus vidas en pos de un ideal, una misión liberadora, un descubrimiento, hasta de un solo acto que pudiera ser valorado por el presente o el porvenir. De allí que hasta ha habido, incluso, hasta empresarios y militares héroes cuando han cumplido por una misión loable más que por aspirar al poder o la riqueza.

No en vano las iglesias en un momento establecieron los votos de pobreza y de castidad para sus pastores y predicadores, aunque aquello hoy aparezca una exageración que condujo a muchos de estos misioneros a vulnerarlos en trágico desmedro de los más desvalidos. Y hasta consolidar la vida suntuosa y pecaminosa de pontífices, obispos y cardenales que, por cierto, estaban llamados a ser los mejores y más santos.

De allí, también, que el “más hermoso de los oficios” (al decir de García Márquez) aparece tan devenido en la concentración mediática y la falta de diversidad informativa. Cuando los medios de comunicación con controlados por intereses distintos a su misión deontológica de servir al entendimiento humano, rindiéndose también al afán de lucro y poder fáctico. Como, al mismo tiempo, se degeneran los procesos de enseñanza y aprendizaje en la obtención de utilidades económicas, la discriminación de los estudiantes, como en la posibilidad de que los hijos de los más ricos tengan un acceso privilegiado al conocimiento.

Por lo mismo es que en las remuneraciones escandalosas, la propaganda electoral millonaria, en los privilegios irritantes que se conceden sus actores que la política se desbarata, se corrompe inexorablemente y termina sirviendo a los opulentos y a los más poderosos que la financian.

Con certeza podemos asegurar que la posdictadura es muy responsable del actual descrédito de la política, de los partidos, de las instituciones que cobijan a la denominada “clase política”. De aquellos que, después de los desacuerdos originales, terminaron coludiéndose y mimetizándose en sus dietas abusivas, en sus fueros vergonzosos y en sus preocupaciones más banales... como la de andar limosneándole a los empresarios y vender ilusiones a los pobres y marginados. Cuando los ministros, parlamentarios y alcaldes empezaron a envanecerse y sobrevalorarse para usurparle la soberanía al pueblo. Situación que hoy, por lo demás, los lleva a oponerse a que con democracia podamos construir más democracia, como es lo que correspondería hacer en un régimen republicano. Cuando empezaron a sentirse parte de una verdadera fronda, clase o casta, cuyos miembros parecen ungidos para perpetuarse en los cargos y medrar hasta su decrepitud en los distintos palacios de la política. Circulando incesantemente de la Moneda, al Congreso; del Parlamento a las embajadas o a los

directorios de las más poderosas empresas del país. O, por último, para emigrar a aquel mundillo de las instituciones internacionales que sirven a los modelos neoliberales sacralizados en el mundo hasta por los que ayer se proclamaban izquierdistas o revolucionarios. Para obtener ingresos, ahora, en moneda dura, viáticos y otra suerte de privilegios.

Solo entonces es cuando la política, como en Chile, puede descender abruptamente a los últimos escalones del prestigio ciudadano y quedar muy por debajo de la consideración social que favorece a los uniformados, cuanto a los empresarios más abusivos y explotadores. Luego, incluso, de los horrores y desfalcos cometidos por ellos al abrigo de la última dictadura cívico militar y el régimen más opresivo de toda nuestra historia.

Quisiéramos saber cuántos “servidores públicos” estarían dispuestos a continuar en sus cargos si sus sueldos fueran reducidos a un tercio o a la mitad de lo que actualmente reciben, lo que todavía sería mucho más que el salario mínimo y el ingreso *per cápita* real de los trabajadores chilenos. ¿Cuántos lograrían ser elegidos de no contar con la propaganda engañosa, superficial y dispensada de sus campañas electorales? ¿Cuántos podrían perder sus curules si los ciudadanos tuviéramos el derecho de removerlos por incumplir lo prometido o por asociación ilícita?

Sólo si nuestros gobernantes fueran forzados a vivir una vida digna, pero sobria, podríamos esperar de ellos que se sensibilizaran realmente con la realidad de un país injusto y en que los delitos y crímenes que nos acosan a todos son verdaderamente alentados por la desigualdad, el bochornoso ejemplo de los que mandan, por las impunidades que favorecen a los poderosos, por la lenidad de los jueces, por una prensa abyecta, farandulera y cada día más declinada en la ideología uniformada de los grandes medios.

Revolucionarios y reformistas

Proclamarse “revolucionario” hasta hace poco tiempo se constituyó en un severo riesgo en Chile, así como antes parecía un verdadero insulto ser tratado de “reformista”. Sin embargo, ambas categorías son muy antiguas y se remontan prácticamente a los inicios de la política. Otra cosa, por supuesto, es ser un “reaccionario”, condición que siempre ha significado un demérito, un verdadero estigma. Hablar de “rebeldía” o “conservadurismo” ha servido muchas veces de eufemismo cuando los otros términos han caído en desuso por el temor, la prudencia o el oportunismo.

Hoy vuelve con bríos el deseo de ser considerado un revolucionario y otra vez se reconoce este espíritu en los grandes líderes y transformadores de la Historia. Sin ir más lejos, nuestros libertadores latinoamericanos y chilenos fueron, sin duda, auténticos revolucionarios, esto es luchadores dispuestos a cambiar su realidad de forma profunda y radical. Hay quienes creen, equivocadamente, que el propio Pinochet podría ser considerado un revolucionario en razón del enorme cambio que impuso en Chile. Pero ello no se compadece en nada con la otra condición de un revolucionario, cuanto es propiciar una realidad inédita y conforme a los nuevos desafíos de la historia. Preferimos, por lo mismo, considerar a ex dictador como un déspota reaccionario que se impuso regresarnos

al pasado y asumir el objetivo de servir a los poderosos, pisotear la soberanía popular y agudizar las injusticias sociales.

Otros líderes o caudillos de nuestra historia, si bien abogaron por los cambios y hasta los impusieron, fueron solo reformistas, es decir, personas atemperadas, con claros sesgos de conservadurismo y que siempre temieron que las transformaciones pudieran afectar el orden constituido, la legalidad consolidada y la llamada paz social. Aunque estuvieran imbuidos de un sentido de justicia, sus propias propuestas y proclamas prefirieron abogar por la “chilenización del cobre”, en vez de la “nacionalización”; acuñando también ese exitoso eslogan publicitario de la “revolución en libertad” para distinguirse justamente de los más audaces. Con demasiada frecuencia, sin embargo, los reformistas terminaron confluyendo y pactando con los reaccionarios o derechistas antes que apoyar los cambios más pronunciados.

Ser revolucionario no siempre significa ser partidario de la violencia o de las vías más radicales para imprimir los cambios. El Mahatma Ghandi, Martin Luther King y tantos otros líderes espirituales y políticos prefirieron los caminos de la resistencia pacífica y hasta se inmolaron en beneficio de sus causas liberadoras. Nelson Mandela es, por muchos, considerado el referente revolucionario más importante del siglo XX después de que, después de tantos años de cárcel, finalmente consiguiera la independencia de Sudáfrica y se convirtiera en presidente de esa República. En nuestro país, Clotario Blest es, sin duda, un excelente ejemplo de un revolucionario en el radicalismo de sus convicciones, pero en el pacifismo de sus métodos de lucha. Todo ello si se reconoce que hasta para los filósofos más cristianos la rebelión popular o, incluso, el tiranidismo pueden justificarse dependiendo de las circunstancias. Incluso desde el púlpito, o sin moverse de El Vaticano ha habido pontífices revolucionarios, moderados o francamente retardatarios.

Prefiero que sean las ideas de un “hombre nuevo” o de un

“mundo nuevo” las que encarnen el espíritu revolucionario, así como la moral intransigente de los luchadores sociales. Como así, también, es justo darle el signo de revolucionario a testimonios de vida y consecuencia como el de Salvador Allende, el de ese luchador penquista Sebastián Acevedo, como el de tantos combatientes que cayeron por los ideales de la redención popular.

Justo reconocer, asimismo, a los revolucionarios en la ciencia, la cultura y el mero pensamiento filosófico. Así es como debemos reconocer como una actitud revolucionaria a los que se esfuerzan por atraer a los reformistas, liberarlos de sus posturas timoratas y hacerlos distinguir entre el “trigo y la cizaña” que crecen y suelen confundirse con cada circunstancia histórica. Todo lo cual también nos lleva a reconocer literatura revolucionaria, reformista y retardataria. Así como al periodismo liberador respecto del que sirve a los intereses establecidos. Como también hay canciones revolucionarias y hasta amores revolucionarios, como ese de Benedetti que nos hizo reconocer que en las calles “somos mucho más que dos”.

Decálogo mínimo para los consumidores

Dejemos claras las cosas. Yo no he llamado por nuestra emisora a apedrear los supermercados. Lo que dije, simplemente, es que en otros lugares de la Tierra perfectamente podría ocurrir aquello ante tamaño fraude a los consumidores del país. No oficio de líder político o social para convocar al pueblo: soy tan solo un periodista político.

Sin embargo, es claro que soy partidario de que la gente se defienda y manifieste su indignación. En ello estoy plenamente de acuerdo con el ministro de Economía, quien reaccionara tan airadamente ante este nuevo escándalo de colusión. Aunque es necesario esperar la resolución de la Justicia, no soy tampoco de los que abrigan ilusiones respecto del buen desempeño de nuestros tribunales, como tampoco creo que sea posible que una sentencia judicial llegue a multar a los supermercados con cifras que alcanzarían los 160 millones de dólares, como se ha sugerido. Ya vemos cómo la Corte de Apelaciones ratifica el juicio abreviado para salvar de la cárcel a Jovino Novoa, al día siguiente de que el nuevo Presidente de la Corte Suprema prometiera perseguir los delitos políticos. Tal como en el pasado, mediante el recurso de la “delación compensada”, una cadena de farmacias pagara una cifra absurda por largos años de abusos y colusiones.

Las poderosas empresas del “*retail*” (así se hacen llamar) tienen ingentes recursos para defenderse e incluso seguir cometiendo otro tipo de colusiones para salir indemnes o castigados con multas muy por debajo de lo obtenido ilícitamente al fijar concertadamente los precios de los pollos. En este sentido, es justa la sospecha de la población en cuanto a la posibilidad de que los supermercados se hayan coludido, también, para fijar los precios de otra gran cantidad de los productos.

Sí somos partidarios de que se reestablezcan las penas de cárcel para estos grandes delincuentes empresariales y me encantaría que un Estado como el nuestro no vacilara en intervenir las empresas y expropiarlas cuando cometan tan graves delitos, así como sucede en Estados Unidos y otros grandes referentes de mundo capitalista. La violencia no ha sido nunca un recurso personal que haya utilizado en promover mis ideas. Por ahora creo en la fuerza de las palabras y el ejercicio del periodismo libre, aunque ideológicamente piense que la insurrección y la desobediencia civil muchas veces se hacen legítimas y necesarias.

Por ahora, lo que pienso es que los consumidores chilenos deben sacar lecciones de todo lo acontecido; de éstas y otras tantas colusiones y actos deplorables de parte del empresariado que vocifera en favor del mercado y la libre competencia, a la vez que conspira y se colude para violar las propias normas y valores que dicen defender.

Debemos sacar todos lecciones que acompañemos con legítimas iniciativas. Algunas de las cuales propongo a continuación:

1.- En la manera que nos sea posible, ojalá dejemos de concurrir tan asiduamente a los supermercados. Hagamos un esfuerzo por ir a las ferias libres, comprarles directamente a los productores para, así, castigar y hacerles el vacío a los especuladores.

2.- En lo posible, dejemos de consumir la carne de pollo. Privémonos un tiempo, por ejemplo, de esos sabrosos sándwiches

de ave y prefiramos otros productos proteicos. Tratemos de experimentar, incluso, con productos naturales y contribuyamos con esto a que cese o disminuya esa horrenda matanza que supone el consumo tan elevado de carne de ave y otras especies animales que se someten a la degollina humana.

3.- Convirtámonos todos en observadores acuciosos de mercado. Tratemos de descubrir todas las demás colusiones, las de tantos otros productos; las de los fármacos y tantos otros, sin duda. Comparemos precios, anotemos y denunciemos antes las autoridades y el SERNAC todo lo que nos parezca irregular. Usemos las redes sociales y acudamos a los medios de comunicación dignos e independientes para destapar la olla de todas las corrupciones existentes en nuestro país.

4.- Sindiquemos con el dedo a los empresarios, políticos y jueces responsables de todo lo que ocurre y se reitera. Asumamos, por ejemplo, que fue el gobierno de Ricardo Lagos Escobar el que les suprimió las penas de presidio a los delincuentes de la industria y del comercio. Y les abrió la inmensa posibilidad de coludirse y estafar a los consumidores arriesgándose nada más que a multas por sus despropósitos. Que en cifras, reiteramos, están muy por debajo de los montos apropiados irregularmente.

5.- Procuremos organizaciones de hecho y de derecho. Organicémonos en los barrios, en las comunas para vigilar a los comerciantes y observar cuánto cobran por sus productos. Difundamos la labor de aquellos que no especulan y trabajan por obtener justos beneficios.

6.- Interpelemos a las policías, a los municipios y a los partidos políticos para que se respeten los derechos del pueblo y de los consumidores. Para que se persiga también a los delincuentes de cuello y corbata, como lo son estos forajidos dueños de las grandes hipertiendas. Advirtamos, también, a nuestros hermanos latinoamericanos respecto de sus inversiones en el extranjero de

estos malos empresarios destinadas también a defraudarlos y dejar mal puesto el nombre de todos los chilenos.

7.- Miremos atentamente, además, lo que sucede con los empleados y dependientes de los supermercados. Conversemos con ellos, con quienes son los que más saben, en definitiva, de los delitos que se cometen a diario al interior de estas enormes dependencias. Donde también es habitual que se nos ofrezcan productos en descomposición, que no cumplen con las normas sanitarias. Donde se violan flagrantemente las normas laborales, se explota a los menores de edad, se paga por bajo el salario mínimo y se incumplen las jornadas de trabajo.

8.- Asumamos que todos los abusos deben ser de interés ciudadano y de la política. Que es justo movilizarse y rebelarse frente a las leyes injustas, denunciar la legalidad heredada de la Dictadura y proponer con fuerza que sea una Asamblea Constituyente la que asuma la tarea de definir una nueva Constitución. Una instancia, por cierto, compuesta por genuinos representantes del pueblo, elegidos democráticamente y no a dedo por el Gobierno y los parlamentarios.

9.- Propongámonos, a la vez, ser menos consumistas, dejar de comprar los suntuarios y baratijas promovidas por la publicidad. Adquiramos lo que nos es realmente fundamental y placentero. Es decir, vivamos mejor, con menos y con objetos de buena calidad... y hasta tratemos de bajar esos kilos de exceso que ya tenemos como población, debido al consumo irracional y sin ponderación. En la práctica de un sedentarismo criminal para la nuestra buena salud y

10.- Empoderémonos como consumidores. Entendamos el enorme poder que podemos adquirir como tales. Porque los Paulman, Ibáñez y otros viven a expensas de lo que todos nosotros compramos. Son otros los empresarios que ganan con la manufactura industrial y las exportaciones. Estos, solamente se

enriquecen con cada compra nuestra, con el sobreprecio que le marcan a los productos que comercializan y con los múltiples abusos que cometen.

Cualquier supermercado no sería nada si a diario no nos atraen a sus seductores templos y podríamos obligarlos a cambiar o a quebrar con nuestra simple renuencia a visitarlos, o con nuestra programada decisión de consumir menos y de mejor calidad. Si es que nos proponemos ser ciudadanos más educados, conscientes de nuestra responsabilidad social y vigías activos para denunciar a los que violan las mínimas normas de convivencia o las famosas reglas del mercado y de la libre competencia vulneradas constantemente por los mismos que las defienden.

Fracaso neoliberal y falta de rumbo de la izquierda

Aunque habitualmente se habla de la “caída de los muros” en alusión a la desintegración de la Unión Soviética, al término de la Alemania comunista, al fracaso del socialismo real o los problemas de insolvencia de algunos regímenes vanguardistas, lo cierto es que de tales acontecimientos no puede derivarse el triunfo efectivo de las ideas neoliberales o del capitalismo a ultranza. Mucho menos, todavía, la consolidación de regímenes políticos más democráticos, en que el desarrollo se haya traducido en mejores índices de justicia social y participación ciudadana.

El “caso chileno”, o la llamada contrarrevolución neoliberal impulsada por la Dictadura, ciertamente fue exitosa en cuanto a cifras macroeconómicas, al índice de crecimiento de la economía o el ingreso per cápita. Sin embargo debemos asumir que todo este proceso de más de tres décadas ha resultado un verdadero espejismo, y que tal pretendido “desarrollo” se explica, fundamentalmente, en el excelente y sostenido precio internacional del cobre, cuanto el enorme incremento de la riqueza de los chilenos más pudientes, mientras los salarios en realidad se comprimían en su poder adquisitivo, así como se vulneraban los derechos laborales reconocidos en el mundo civilizado.

Lo cierto, es que los niveles de desigualdad social siguieron pronunciándose desde el término de la Dictadura y las “sacrosantas leyes del mercado” ya se ve cómo han sido desbaratadas por la corrupción de los más poderosos empresarios, las malas prácticas de las grandes empresas y la descomposición de toda esa clase política abyecta a los poderosos inversionistas privados o extranjeros. La proclamada “libre competencia” ha devenido en la concentración empresarial y la consolidación de fuertes oligopolios, lo que le ha permitido a las pocas empresas de cada rubro realizar todo tipo de colusiones para convenir los precios de sus productos y asaltar sin compasión los bolsillos de los consumidores e nuestro país. Pocas veces se han descubierto más evasiones o elusiones tributarias como las del último tiempo; sobre todo después de algunas leyes conseguidas por el gran empresariado para suprimir las penas de cárcel que antes se consideraban para sus infractores.

Ideológicamente, podríamos asegurar que la inmensa mayoría de los chilenos prefiere hoy al Estado por sobre el mercado o la “iniciativa privada”, cuando observa los abusos de las compañías de servicio en los cobros por sus suministros de electricidad, gas, agua y otros productos esenciales. ¡Qué duda cabe, además, que la inmensa mayoría de los trabajadores quisiera volver a los sistemas solidarios de previsión para dejar de ser asaltados por las administradoras de fondos de pensiones! De la misma forma en que la población demanda más recursos para la educación pública, versus la que persigue el lucro. Como quisiera, además, que se dotara mejor a los hospitales para evitarse los groseros cobros de las isapres y clínicas privadas que, en su voracidad, atraer ingentes recursos fiscales por los servicios que prestan en aquellas urgencias médicas que no son oportunamente atendidas por el sistema público.

En este sentido, acabamos de comprobar cómo una vez más los estudiantes que postulan a las universidades, al momento de inscribirse, prefieren a los planteles tradicionales frente a las se-

ductoras ofertas de aquellas entidades privadas que –más allá del imponente cascarón de sus instalaciones- no logran alcanzar el nivel de las otras en cuanto a calidad de enseñanza.

Con todo lo que se diga, en América Latina, la Revolución Cubana hereda logros económicos, sociales y culturales muy por encima de los demás países del Caribe, como del conjunto de nuestra Región. Así como los aportes del propio chavismo, del régimen ecuatoriano, del boliviano, brasilero y argentino se constituyen en un legado que reconocerán y agradecerán, tarde o temprano, sus poblaciones. Aunque, estos pueblos se encuentren atiestas de la reiteración en el poder de los mismos líderes o caudillos que, en el caso de la izquierda, suelen ser tan renuentes a ser reemplazados. Pero ya vemos que también en Chile, toda la posdictadura se ha caracterizado por la consolidación de una acotada clase política que también repite rostros en los gobiernos, parlamentos y municipios.

Tuvo que sobrevenir la caída internacional del precio del cobre, como el descubrimiento de la corrupción a todo nivel para que los chilenos se dieran cuenta del monumental engaño de las políticas neoliberales. Para que empezaran a mirar de nuevo al Estado para la consecución de sus justas aspiraciones. Para que se acrecentara el mismo sentimiento de indignación que hoy remece a toda una Europa que también se sacude de los mismos espejismos y falsos profetas de la política. Porque, si bien el “estado de bienestar” alcanzado en sus países realmente se hizo generalizado a todos sus habitantes, en la práctica se trató siempre de regímenes colonialistas que explotaron al Tercer Mundo, se apropiaban de sus riquezas y asolaron a sus poblaciones a fin de cimentar su desarrollo. Encontrando en otros continentes “mano de obra barata” y materias primas a precio vil.

Abrigamos la certeza que el triunfo de opciones derechistas en los comicios de Argentina, Venezuela y otros serán de muy corto

aliento, porque ya se sabe que valores, como el del crecimiento con equidad o la democracia participativa, no están en el registro genético de sus dirigentes, partidos o entidades patronales. Como tampoco valoran la cooperación entre las naciones o la defensa de los derechos humanos de todos. Sin embargo, lo malo está en que las izquierdas se han hecho muy propicias, también, a declinarse en la corrupción y la perpetuación de sus mismos rostros, además de persistir en actitudes hegemónicas y mesiánicas. Más allá de las convicciones que proclaman en favor de la igualdad y solidaridad.

Por otro lado, en un planeta al que la comunidad científica augura un colapso climático mundial, es indudable que los valores del *laissez faire* (del dejar hacer y pasar) ya no son compatibles con la vida y la subsistencia de nuestra Casa Común. Y que, desde la ciencia, la ética y el sentido común, el capitalismo salvaje ya no podrá perpetuarse en nuestra economía y objetivos de un auténtico progreso. De allí que sea tan patética la existencia de aquellos izquierdistas que todavía son cooptados por la derecha y los poderes fácticos, después de su compromiso de antaño con las experiencias revolucionarias del continente o su participación en el mismo gobierno de la Unidad Popular.

Del mismo modo que se hacen penosas la falta de unidad y criterio de aquellas expresiones ideológicamente correctas, pero que carecen de rumbo certero o eficiencia política debido, sobre todo, a sus crónicas prácticas de sectarismo y atomización.

El orden de los factores sí altera el producto

La voz de varios expertos, pero sobre el todo el sentido común, indica que una profunda reforma educacional debe partir desde los primeros niveles de la instrucción pública y no desde las universidades. Es más que sabido que la desigualdad social es uno de los objetivos que se proponen los cambios y que es desde la educación parvularia donde se marcan las diferencias entre los niños, cuando se sabe que la capacidad de aprender del ser humano es a edad temprana donde mejor puede consolidarse. Millones de niños en nuestro país ya quedan mutilados en sus capacidades intelectuales cuando están obligados a quedarse en sus casas o, a lo sumo, acceder a simples “guarderías” infantiles, mientras sus padres trabajan. Se sabe de la enorme ventaja de aquellos establecimientos bien dotados con profesores y recursos, versus los que simplemente se hacen cargo de atender a los niños sin entregarles mayores incentivos intelectuales y conductuales. Algo que tiene por resultado que ya desde la niñez se establezcan severas brechas entre los niños de hogares pobres o los de buen nivel económico social.

También se sabe que posteriormente las diferencias de la educación primaria y secundaria expresada en establecimientos públicos, subvencionados o particulares pasan a establecer asime-

trías muy difícilmente remontables por los estudiantes de hogares más pobres o precarios, como eufemísticamente se les suele calificar. Es una comprobación empírica la ventaja que demuestran los egresados de los colegios pagados a la hora de ingresar a la educación superior y los tropiezos que presentan aquellos estudiantes pobres que logran ingresar a las universidades por sus buenas calificaciones escolares, pero con déficit de formación. Entre los cuales la deserción, lamentablemente es más frecuente.

En la idea de reforzar la educación pública, la gratuidad ya conseguida para casi la mitad de los estudiantes universitarios más pobres, e auspiciosa en el objetivo de avanzar a la gratuidad universal. Sin embargo, se trata de ingentes recursos que se destinarán a ello mientras el Estado aún no se hace cargo de proveer de más recursos a los jardines, escuelas y liceos fiscales. De tal manera que los que se vieron obligados a emigrar a los establecimientos subvencionados o particulares retornen a la educación fiscal que, como en el pasado, o como ocurre en otros países, asuman que lo público es mejor garantía de excelencia académica, pluralismo ideológico y amplitud cultural. Resulta necesario insistir en lo que ocurre en aquellos países europeos considerados emblemáticos o ejemplos a seguir, donde se tolera la existencia de establecimientos privados por razones religiosas, culturales o étnicas, pero a sabiendas por todos que los colegios o universidades gratuitas del Estado son, incluso, de mejor calidad. Lo mismo que sucede, por supuesto, en relación a la salud y otros derechos garantizados para todos de forma óptima e igualitaria. Porque lo más convincente en estos países de mucho más raigambre y práctica democrática que el nuestro es la comprobación que todos los niños son iguales en dignidad y derechos, aunque después la vida los diferencie según sus vocaciones, talentos o esfuerzo individual.

Dos años consumidos en la gratuidad de la educación superior tiene en suspenso los recursos adicionales y las iniciativas que

debe comprometer el Estado en favor de la educación parvularia, primaria y secundaria. En la desmunicipalización, por ejemplo, de los establecimientos escolares, de tal manera que tampoco persistan las diferencias que de hecho se imponen entre las comunas ricas y pobres en éste y otros aspectos de la vida nacional. Es evidente que, mediante becas, impedimentos efectivos al afán lucro o préstamos con verdadero aval el Estado se podrían haber corregido sin mayores traumas o controversias las inequidades existentes en los estratos superiores del sistema educacional. Pero se prefirió partir al revés y ahora nos cabe a todos la duda respecto de la posibilidad que tenga el actual gobierno (que ya ha cumplido la mitad de su gestión) de hacerse cargo de concentrar mayores esfuerzos y recursos en los niños de más corta edad, cuando hay especialistas que estiman que invertir en los menores resulta cinco o seis veces más eficaz que hacerlo en favor de los universitarios.

Para colmo, todos sabemos ya que nuestra mayor recaudación fiscal estará mermada por el bajo precio internacional del cobre, lo que tendrá consecuencias aciagas en los niveles de empleo e ingreso familiar. Fenómeno que amenaza, por supuesto, con pronunciar las diferencias económicas y sociales del país. Por otro lado, es indudable que hay políticos muy poco dispuestos, ahora, a una nueva reforma tributaria que se hace indispensable para darle consecución al conjunto de reformas educacionales. Entre ellas, el estatuto docente, mecanismo decisivo en la posibilidad de avanzar realmente a aquella calidad de la enseñanza que hay que sustentar en materia educacional, como en la posibilidad de alcanzar un país más solidario y justo que el que hoy tenemos y cuyas desigualdades siguen reiterándose.

Entre otras razones, por alterar el orden de los factores que en este caso sí atentan contra el producto educacional tan ambicionado y prometido.

Piñera y Lagos en la puerta giratoria

Las elecciones periódicas, limpias y bien informadas deben ser siempre el mecanismo democrático para la elección de nuestras autoridades. Sin embargo, al elegir a nuestros representantes no estamos dándole un cheque en blanco para que éstas dispongan lo que quieran e incluso contradigan con sus actos lo que prometieron como candidatos.

De allí que las democracias serias contemplen el plebiscito para que los ciudadanos se manifiesten con más regularidad y tomen definiciones respecto de temas más relevantes que no tendrían por qué quedar sometidas a las decisiones de los legisladores, a los vaivenes de la política y a las órdenes de partido. En nuestro país, como sabemos, las propias autoridades son las más renuentes a reforzar el ejercicio más constante de la soberanía popular, al grado de mostrarse contrarias, incluso, a la idea de una Asamblea Constituyente que defina nuestra Carta Fundamental. En Suiza y otras naciones europeas, por el contrario, la consulta ciudadana es constante y no es vista con recelo por los gobiernos y parlamentos. En otros países, asimismo, es el régimen parlamentario el que puede ponerles fin a los gobiernos que caen en el descrédito, especialmente cuando la corrupción se hace tan desembozada.

Actualmente, enfrentamos el absurdo que parlamentarios que fueran elegidos gracias a la transgresión de la Ley Electoral (incluso confesos de haber recibido sobornos de algunas empresas a la hora de legislar) no solo se mantengan en sus cargos, sino sean los encargados de aprobar la agenda de probidad impulsada por el Ejecutivo, después de los graves escándalos que han afectado la credibilidad de la política y sus instituciones. Se da el absurdo, incluso, que dos expresidentes, cuyos gobiernos fueron tan responsables de la enorme corrupción y desencanto ciudadano, sean ahora los primeros aspirantes a reelegirse. Emulando la misma conducta de una Michelle Bachelet que apenas con dos años en La Moneda se lamenta de no haber permanecido en Naciones Unidas y en la última encuesta apenas alcance un discreto 20 por ciento de aprobación popular.

Una forma de evitar que los índices de abstención ciudadana superen con creces el número de los que sufragar sería aprobar con urgencia mecanismos que permitan remover de sus cargos a los que delinquen o incumplan flagrantemente sus promesas electorales, al tiempo de darle al pueblo la posibilidad de definir reformas mediante plebiscitos. Sobre todo en la evidencia de tantas iniciativas que se traban en el Parlamento mediante la presión que ejercen los poderes fácticos o las conveniencias de los partidos que cada vez menos tienen en cuenta la opinión de los chilenos a la hora de tomar posiciones.

En la pretendida solvencia de nuestra institucionalidad, es inaudito que permanezcan en sus funciones personas imputadas por la Justicia, cuanto que la legislación le permita a la Jefa de Estado retener en su ámbito de acción a personas deleznable o que, en su desmedidas atribuciones, pueda resistirse tanto tiempo a cumplir solicitudes formales y hasta unánimes planteadas por el Poder Legislativo, como ocurriera recién con la solicitud de la Cámara de Diputados para que removiera al administrador

de La Moneda. Quien, en definitiva, ha debido hacer abandono de su cargo por la presión que ejerciera el ministro del Interior, al advertir que la propia continuidad de la coalición oficialista pudiera depender de que la Presidenta no se encaprichara en retener a su colaborador.

Cuando se discute la idea que desde el Estado no solo se financien los procesos electorales, sino que los partidos puedan también recibir recursos para su administración y proselitismo parece inverosímil que no se definan primero las responsabilidades y los límites de quienes ejercen en la política, así como las disposiciones que signifiquen una genuina supervisión de las funciones públicas. Y hasta la misma Presidencia de la República pueda quedar sujeta a la voluntad popular, sobre todo cuando es en quienes ocupan esta máxima función donde recae la principal responsabilidad de una crisis política e institucional tan profunda como la que nos afecta.

Ciertamente que al hacerse voluntario el sufragio popular debió al menos quedar establecido que para las designaciones de quienes ocupen tan altas tareas debiera hacerse propicia la participación de al menos la mitad de los inscritos en los registros electorales. Aunque lo más conveniente sería que en un país como en nuestro el voto volviera a ser obligatorio, tal cual nos son tan impositivas otras disposiciones de nuestra cotidianidad. En estos últimos años ha quedado de manifiesto que quienes legislaron en favor de esta “voluntariedad” lo que persiguieron realmente fue que las altas funciones públicas quedaran acotadas a un número cada vez más reducido de chilenos o simplemente a una clase política, como la que se ufanan de formar parte. En su probado desprecio por la democracia, ciertamente, como a ser interpelados por la opinión pública. Actitud que en el pasado los llevara a bombardear La Moneda, como después a darle continuidad por más de veintiséis años a la Constitución impuesta por el Dictador.

Seguros, como siguen, que el dinero, la información manipulada y el apoyo de los grandes multimillonarios son factores más que suficientes para “legitimarse” en el uso y abuso de sus cargos públicos, para rotarse en el poder y perpetuar sus privilegios. De allí que todavía sean muy pocas las voces que nos advierten de la inminencia de una masiva abstención electoral en los próximos comicios municipales. Y dos personajes, insistimos, que fueron incapaces en darle continuidad a sus propios referentes en La Moneda, ahora tengan la pretensión de reincidir como candidatos gracias a la puerta giratoria que los favorece.

El ensueño piramidal

Los comentarios más lúcidos que he escuchado sobre esta nueva estafa piramidal que ha afectado a unas cinco mil personas es la facilidad con que tantos se dejan tentar por una inversión que puede producirle tan absurdas utilidades. Esto es, dividendos de un 10 por ciento mensual a los incautos que le confiaron sus ahorros a una empresa que obviamente, como se ha demostrado, se proponía defraudarlos. Es difícil encontrar en cualquier lugar de la tierra una inversión que pueda ser duplicada tan solo en un año, pero aquí ya vemos que nuevamente fue posible una estafa de esta naturaleza, si consideramos que ya teníamos el antecedente de *La Cutufa*, aquel “emprendimiento” que tentó bajo la Dictadura a tantos militares y civiles. Un negociado concebido, por lo demás, por algunos siniestros uniformados vinculados a los aparatos represivos de régimen de facto.

A alguien escuché que esto se hace posible en Chile gracias a la ignorancia o a la desinformación de mucha gente respecto de cómo operan los negocios, de las prevenciones que se deben adoptar antes de entregarle sus recursos a cualquiera, como estar al tanto de aquella institucionalidad que existe en nuestro país en materia de superintendencias y otros organismos fiscales que debieran velar por la corrección de todas estas operaciones. En

efecto, nuestro sistema educacional no le entrega a nuestros estudiantes los conocimientos mínimos que deben tener al respecto, cuando la economía cumple un papel tan decisivo en todas nuestras decisiones. Difícilmente un egresado de la enseñanza media sabe cómo extender un cheque, cómo operar con las tarjetas de crédito y, mucho menos, saber distinguir en el “mercado” a los operadores confiables y a los inescrupulosos.

Por otro lado, la codicia y el afán de enriquecerse en poco tiempo parece ser una de las grandes aspiraciones del común de los chilenos a la luz, claro, del pésimo ejemplo de aquellos empresarios o comerciantes transformados en multimillonarios en tan poco tiempo, personas comunes y corrientes (insolventes, incluso) que hoy amasan grandes fortunas gracias a la especulación, los favores del poder, el soborno a las autoridades y la burla sistemática de las normativas de nuestro pretendido estado de derecho. A que tengamos como referentes la impunidad que favorece a los Ponce Lerou, a los Paulman, a los mandamases de Penta y hasta a los dirigentes deportivos convertidos en ricachones, como a otros que tenían tan poco o nada, o “andaban con una mano por delante y otra por detrás”, como se dice, y que, con un par de “movidas”, se instalaron en poco tiempo en las listas de multimillonarios de Forbes y llegaron a poner sus asentaderas en el sillón de O’Higgins.

Cuando ya no es el trabajo el que se considera el motor del crecimiento y del progreso, en un gran bien y objetivo social; cuando lo que impera es el pillaje, la posibilidad de hacerse rico burlando el salario justo de sus trabajadores, sus derechos laborales, así como las obligaciones fiscales.

La cantidad de escándalos que hoy se ventilan en la Justicia es el mejor indicio de la corrupción de nuestros valores y del estado de inseguridad en que ahora vivimos, debido a la voracidad alimentada como ideal y que lleva a tantos jóvenes a delinquir

tal como lo hacen los chilenos de cuello y corbata. Cuando se imponen los antivales que han llevado a los políticos a “servirse del poder” y de las instituciones del Estado. Cuando hasta en las propias universidades ya no tenemos facultades de economía sino de “negocios”; cuando el periodismo rinde sus contenidos a los intereses de los poderosos sostenedores de los medios de comunicación, y hasta los referentes religiosos incurren en los repugnantes delitos por todos conocidos.

En este cuadro es que lamentamos lo que le ha ocurrido a esas cinco mil personas defraudadas por este nuevo ensueño piramidal, que confiaron en enriquecerse mediante la especulación y abrigaron la idea de dejar de trabajar y, por supuesto, liberarse de un salario injusto, sin perspectiva alguna de cumplir el sueño de la casa propia, educar bien a sus hijos, enfrentar alguna grave enfermedad y condenados, además, a jubilarse con una pensión paupérrima. Entendemos, plenamente, lo que les pasó a estos atribulados compatriotas, acicateados por el influjo del dinero fácil y la ineptitud de nuestras autoridades, policías y otras que siempre debieran estar atentas a estos “negocios” que pululan sin control y supervisión, engañando a tanta gente.

Me impresiona, por lo mismo, la voz de algunos abogados (destacados penalistas, incluso) que aseguran que este trio de especuladores ya formalizados a lo más van a sufrir la detención preventiva, que no van a llegar a ser condenados ejemplarmente; así como un fiscal se lamenta de lo difícil que podrá resultar recuperar los dineros mal habidos y devolvérselos a las víctimas... Amparados, por cierto, por las propias leyes de la República que favorecen la especulación financiera y han eximido de penas afflictivas a los que se coluden para estafar a los consumidores. Seguros de discurrir y apelar a todas las atenuantes que las leyes contemplan para exculpar o condenar a penas ridículas a este tipo de delincuentes... Delincuentes “que ya la hicieron” y que en cosa de

unos pocos meses o años podrán disfrutar de sus recursos a buen resguardo en el extranjero, por más que se les incauten sus autos de lujo y algunas propiedades en Chile.

Todo dentro de un país que en poco tiempo se olvida de quienes se han enriquecido fraudulentamente y que muy luego llegan a las cúpulas de la Sofofa, de la Sociedad de Fomento Fabril y hasta se dan el lujo de promover fundaciones y universidades (muy lucrativas, también) para lavar su pasado. Quienes, de simples rateros, pasan a ser considerados emprendedores y hasta intelectuales. Cuando nuestra propia historia le rinde tributos y levanta estatuas a asesinos tan acreditados como un Arturo Alessandri Palma, así como en los regimientos se sigue venerando a Pinochet, a Toribio Merino y otros tenebrosos personajes. Mientras la posdemocracia, por lo demás, mantiene en el entrañamiento y en las cárceles a quienes debieran estar reconocidos como héroes. Cuando el propio embajador de la UDI en Buenos Aires, el socialista Viera Gallo, pareciera no tener más propósito en su misión diplomática que extraditar a Chile a uno de los presuntos ejecutores de Jaime Guzmán Errázuriz, el mayor instigador civil del Golpe Militar de 1973 y del horror que siguió al bombardeo de nuestra sede gubernamental. Cuando en la Araucanía se persigue a los que quieren recuperar sus tierras expropiadas fraudulentamente por algunos empresarios y monopolios forestales al abrigo de los gobiernos de turno. Maleantes que poco a poco van asentándose como víctimas, cuyos victimarios serían los modestos comuneros, criminalizados en cinco siglos de exclusión y despojo.

Cuando los Mahmud Aleui, en La Moneda, y los voceros de las papeleras en el Congreso Nacional amenazan aplicar todo el “peso de la Ley” a la heroica resistencia de los mapuches, mientras interlocutan y condescienden con los cuatreros de la zona, con aquellos consabidos “corredores de cercos”, que en 1973 salieron con los militares a darle cacería a los líderes sindicales, a los cam-

pesinos y a quienes se opusieran a reconocer las propiedades y los privilegios que les entregó la Dictadura.

En un país de valores intrínsecamente perversos, cómo extrañarse, entonces, del fraude que ahora afecta a cinco mil incautos, cuando poco nada se hace para castigar todavía a los millones de defraudados por las papeleras, los supermercados, las farmacias. Cuando los políticos sobornados siguen en plenas funciones, y hasta continúan escribiendo columnas en algunos medios de comunicación. Cuando ahora hasta la máxima autoridad decreta que solo debe condenarse la “ilegalidad” y no la inmoralidad... Cuando la demandada reforma laboral, ya se ve, empieza a modificarse antes de ser despachada por el Congreso, gracias al intenso lobby de los grupos patronales que, hasta hace dos meses, parecían arrinconados por sus escándalos, y ya se ve que vuelven a alzar sus voces como a legislar a través de sus parlamentarios más abyectos. Cuando ya se les han suprimido las medidas cautelares a los más severos delincuentes económicos y que con bombos y platillos les aplicara la mal llamada justicia. En un país en que el propio Fiscal Nacional desacredita a sus fiscales subalternos y ya promete ese gran “borrón y cuenta nueva”, tan propio de nuestra historia y de sus más bochornosos capítulos. Impunidad que favorecerá tarde o temprano, téngalo por seguro, a estos tres forajidos que el tiempo incluso podría llegar a reconocer como “emprendedores” e integrar a las más renombradas familias del país.

Cuba, Bolivia y Chile

Muy generalizada fue, ciertamente, la satisfacción mundial por la visita de Barack Obama a Cuba y el progresivo restablecimiento de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre ambos países. Entre ese David más de cinco décadas acosado por el poderoso Goliat. Más todavía celebramos el reconocimiento explícito que hizo el presidente estadounidense del fracaso de su país en la aplicación de ese largo bloqueo y otras formas de agresión imperial. Así como su reconocimiento, además, a los éxitos innegables de la Revolución Cubana, a la dignidad de su nación y al valioso y solidario aporte que prestara a las luchas de liberación de todos los pueblos oprimidos.

Hoy debemos celebrar un artículo de Fidel Castro que será recordado como un magistral testimonio de dignidad, donde descarta toda suerte de mendicidad de su país hacia los Estados Unidos y en que nos deja muy claro que es la gran potencia la que está en deuda con Cuba por tantos años de agravios, traducidos, por ejemplo, a en la ocupación ilegal e ilegítima de Guantánamo. Incluidos aquellos los actos de terrorismo ejercidos por Estados Unidos para derribar aviones con cientos de pasajeros, abortar las siembras de su agricultura, expropiar e impedir sus exportaciones y acometer otros despropósitos. Al tiempo, por supuesto, que

Obama se obliga a reconocer que Cuba no era una nación que promoviera el terrorismo y terminara retirándola de su arbitraria lista de naciones acusadas tan injustamente. No hay duda que alcanzarían sumas millonarias los recursos que Cuba podría demandar ante los tribunales internacionales como indemnización por la guerra inclemente y sucia de los Estados Unidos, pero muy probablemente ello nunca se materialice, dada la impunidad que siempre favorece a los más poderosos.

Pero lo más relevante del texto de Fidel Castro es la reivindicación que hace de los logros de la Revolución. Del estándar educacional y cultural alcanzado por los cubanos; de los evidentes logros, incluso, de una economía que solo producía azúcar y que era concebida por los Estados Unidos como su gran prostíbulo... Porque, con bloqueo y todo, Cuba logró alimentar a su población, producir lo que no tenía, desarrollar una industria farmacéutica admirada por el mundo, consolidar un turismo decente y sustentable. Así como lograr un desarrollo deportivo ejemplar en relación al número de sus habitantes.

Imponente y maciza es también la advertencia de Fidel Castro en cuanto a que el pueblo cubano defenderá sus logros, sus niveles de igualdad e independencia, por lo que es hora que todos los latinoamericanos celebremos la dignidad de la Revolución Cubana y la forma en que un país pequeño y pobre se paró frente al imperio más poderoso de la historia, lo derrotó militarmente en Bahía Cochinos, como política y moralmente, además, en el mundo de las organizaciones internacionales: Que haya impedido con su arrojo que los Estados Unidos hiciera todo lo que se proponía en su llamado "patio trasero", aunque ciertamente debemos consentir en que muchos políticos de la Región fueron verdaderamente domesticados por el Departamento de Estado y por las políticas neoliberales que patrocina la nación imperial. Que hayan puesto a su servicio,

como sabemos que ha ocurrido, nuestra supuesta Transición a la Democracia. Tan bien expresado todo en el comportamiento de nuestra Cancillería y la forma en que ésta ha emulado a Estados Unidos en sus relaciones exteriores.

En la opinión que expresaré a continuación, estoy cierto que estoy en franca minoría y muy a contrapelo con el patriotismo de la gran mayoría de los chilenos, un fervor que llega la insensatez, pero que, desgraciadamente, es desgraciadamente alentado y bien manipulado por nuestras autoridades, cuanto por la clase política en general.

Pertenezco a ese disminuido pero resuelto grupo de chilenos que se asume latinoamericanista y está consciente de que pertenecemos al Tercer Mundo. De integrar esa minoría que, por sobre fronteras limítrofes, reconoce espacios físicos y naturales dispuestos para el disfrute de todos. Que aspira con nuestros libertadores, hoy convertidos en venerables estatuas, a que nuestra Región se constituya en un vasto territorio de hermanos alejados de los conflictos bélicos, orientados a compartir nuestras prodigiosas reservas naturales, dispuestos a suprimir los onerosos, absurdos y criminales ejércitos y armas de destrucción masiva, provistas por los países más ricos de la Tierra y sus más siniestros traficantes.

Soy de los que debe lamentar una vez más que nuestro Gobierno y su Cancillería carezcan de grandeza, vocación latinoamericanista y reaccionen tan mal y torpemente frente a las demandas de nuestros vecinos. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, es de los mejor evaluados por las encuestas, pero en realidad estoy seguro que su desempeño es el más opaco de todos los miembros del Gabinete de Michelle Bachelet. Sabemos que el chovinismo y patriotismo van de la mano con la ignorancia y es pasto nutritivo para los políticos demagogos como nuestro Canciller y esa serie de empolvados bien nutridos por sus altos y

seguros sueldos, viáticos y misiones en el exterior que administran nuestra chata y refractaria política exterior.

Personajes que, en estos últimos años, se han sacudido de todo su pasado izquierdista y hasta revolucionario, cuando eran atendidos generosamente en Varadero, Acapulco y otras ciudades balnearios por la solidaridad cubana, mexicana y hasta por la de las más modestas naciones de nuestra Región. Que fueran acogidos, además, como dioses guerreros por los países europeos, después de refugiarse en sus embajadas. Los cuales, con el tiempo, corrieran a ponerse al servicio de Los Estados Unidos, cuando este país decidió suspenderle la asistencia al Pinochet y se dispuso a definir con estos personajes (que intuyó oportunistas y corruptos) una “salida negociada”, para sacralizar la Constitución y la institucionalidad heredada de la Dictadura y que hoy nos tiene con una enorme tarea incumplida y en riesgo de que sus pocos logros se desbaraten.

El sentido común dice que si Bolivia nos vuelve a requerir (esta vez por el uso de las aguas del Silala) alguna razón debe tener, como que ya la Corte Internacional de la Haya acogiera casi unánimemente su demanda por una salida soberana a ese mar que le arrebatamos en una guerra fratricida. Por algo, algunos políticos, muy pocos, ciertamente, han salido a reconocer que en el pasado nuestro país se avino a una solución con Bolivia sobre este río, pero que fuera desestimada por nuestros respectivos gobiernos.

Vaya qué lamentable parece que nuestra Cancillería y Gobierno siempre expliquen las demandas bolivianas en la necesidad de Evo Morales de soslayar sus problemas internos. ¡Cuánto quisiera gozar Michelle Bachelet del apoyo ciudadano otorgado a Morales pese a perder un plebiscito! Ya se quisiera nuestra Mandataria tener aquellas cifras de crecimiento que manifiesta sostenidamente la economía boliviana. ¡Cómo se quisiera la señora Bachelet, tener

una institucionalidad surgida de una Asamblea Constituyente y de una Carta Fundamental celebrada en el mundo entero por su perfiles tan genuinamente democráticos! Capaz, entre otras cosas, de combatir todo asomo de corrupción y obligar a sus políticos a una probidad que aquí, en Brasil y otras naciones se manifiesta tan escandalosamente.

¡Qué lamentable es que nuestra Presidenta haya carecido de toda voluntad de liderazgo internacional, haya renunciado a convocar a nuestros vecinos a un diálogo generoso y fructífero sin hipotecar soberanía, pero sí para compartirla con nuestros vecinos y hermanos: hijos todos de una geografía común, como de un destino fraterno como lo quisieron O'Higgins, San Martín, Bolívar y Sucre, nuestros padres fundadores y libertadores! Que se haya rendido a los Heraldo Muñoz, los Insulza y otros que medran con los conflictos fronterizos y los litigios internacionales. Tal cual lo hacen los generales y almirantes, ávidos de más armas y granjerías que, como lo hemos señalado tantas veces, les han servido para acribillar a sus compatriotas, bombardear La Moneda y nuestras instituciones, más que para hacer frente a una amenaza exterior.

A tu demanda, otra contrademanda es a lo único que atinan nuestro Canciller y su jefa, renunciando a toda grandeza, sin discurrir una salida más inteligente y sagaz; a la deriva solo de lo que haga Evo Morales que, ciertamente cosecha más y más apoyos en el mundo. Mientras que nuestro proceso político empieza a desilusionar, se desprestigia en una corrupción política y empresarial que trasciende, ya, nuestras fronteras. Y nos deja en la evidencia de vivir en una economía precaria, sin soberanía alguna respecto de nuestros recursos fundamentales; que se arrodilla frente a la inversión extranjera y ahora remata su litio después de haberlo hecho con el salitre y el cobre.

Que se descubre ante el mundo en la fragilidad de su pretendida democracia, en que el cohecho a los parlamentarios explica sus

leyes más importantes en la minería, en la pesca y otros rubros. Y en que el fantasma histórico de la impunidad es proclamada nuevamente (y hasta por el propio Fiscal Nacional) como una solución que contenga la ola de indignación nacional con la política y cada uno de sus pretendidos “representantes” del pueblo.

¿No será que a Chile le hace más falta, ahora, un conflicto fronterizo o una guerra para soslayar su crisis y tan alta decepción popular?

Patricio Aylwin: mito y realidad

La historia y los pueblos suelen ser siempre muy benevolentes en su memoria. Acostumbran a rendirle tributo a políticos y gobernantes que muy probablemente en otros tiempos y lugares habrían sido juzgados y condenados por la Justicia Internacional y la conciencia de las naciones. Como podría haber sucedido con un Napoleón, los emperadores romanos y hasta con los sanguinarios conquistadores españoles, cuyos nombres todavía se le otorgan en toda América Latina a calles, avenidas y recintos públicos. Sin ir más lejos, una benevolencia tan absurda como la que favorece a un Diego Portales o un Arturo Alessandri Palma que cometieron crímenes y fechorías por los que debieran haber quedado impugnados para siempre por los chilenos.

Ni el propio Patricio Aylwin habría concebido hace treinta o cuarenta años que iba a merecer tantos elogios y homenajes al momento de su muerte, como los que hoy se le tributaron en los más poderosos medios de comunicación por el conjunto de la llamada clase política, por intelectuales, incluso, y ciertamente, por miles o millones de chilenos que salieron tan incautos a las calles.

Se destacan, por ejemplo, su sentido republicano y vocación democrática, cuando obran tantos documentos y testimonios en cuanto fue uno de los políticos que más contribuyó al quiebre

institucional de 1973 y al Golpe Militar de Pinochet, asonada que justificó y defendió ante el mundo cuando caían acribillados cientos o miles de compatriotas, cuando era bombardeado el Palacio Presidencial, se inauguraban los campos de Concentración y se sometía a la tortura y al exilio a cientos de miles de chilenos. Que aplaudió, y acaso brindó también, por ese “pronunciamiento militar”, al rendirle homenaje a los uniformados por su desinteresado sacrificio.

Se celebra, asimismo, que su gobierno fuera el primero de una larga y compleja transición a una democracia que en realidad vino, curiosamente, a sacralizar la Constitución de Pinochet que él mismo antes había fustigado cuando diera el tardío paso de integrarse a la disidencia. Cuando se iniciaran estos 26 años de posdictadura y el sistema electoral binominal se opusiera, hasta ahora, a la posibilidad de los ciudadanos de ejercer su soberanía. Mientras se aniquilaba programadamente desde La Moneda a la prensa que había combatido a Tirano, mientras se les condonaban las deudas y los crímenes a los medios de comunicación abyectos a la Dictadura. Mientras se le restaba el objetivo de “justicia” a la Comisión de verdad y Reconciliación creada por él para evidenciar los crímenes cometidos por el Régimen Militar y proclamara esa aberrante “justicia en la medida de lo posible” que todo hombre de derecho sabe que es un despropósito, una ficción o una verdadera excusa para garantizarle al Tirano, más adelante, su repatriación al país y su fallecimiento impune.

No es casual o signo de generosidad o grandeza que la prensa de derecha y la Televisión agoten sus páginas e imágenes en destacar la vida y obra de este “ilustre estadista”, como algunos llegan a calificarlo. Siempre recuerdo una conversación con un connotado empresario y ministro de Pinochet que me confesara lo agradecidos que él y otros colegas suyos estaban respecto del primer gobierno de la Concertación, después de temer que, al menos, le

serían confiscadas sus propiedades mal habidas, como sometidos varios de ellos a los Tribunales. Cuando ni uno solo de éstos, ni siquiera Ponce Lerou, fuera expropiado o conducido a los Tribunales por los horrores que consintieron de la mano de los militares.

Es efectivo que el gobierno de Aylwin empezó a disminuir el número de los pobres o, más bien, de los indigentes en nuestro país. Sin embargo, solo se puede considerar como un fracaso esa promesa de aquel “crecimiento con equidad”, cuando después de tantos años la brecha entre lo que perciben los más ricos y los más pobres incluso se ha pronunciado, como lo indican las cifras y los economistas. Los propios obispos y muchos analistas internacionales.

Muy dudosa es también su condición de social cristiano y político de unidad, ante el testimonio de un Bernardo Leighton (que salvara de un cobarde atentado en Roma) y que a su regreso a Chile decidiera cubrir con una teimplástica el rostro de Patricio Aylwin en su galería de fotos. Cuestión que yo mismo observé en su departamento del barrio de Ñuñoa. Con lo cual le imputaba a su camarada Aylwin haber alentado y defendido el Golpe Militar.

Falangistas y militantes de su partido recuerdan en Aylwin ser el autor de la estrategia del “camino propio” para oponerse internamente a la candidatura presidencial de Radomiro Tomic, quien planteara la necesidad de consolidar la unidad política y social del pueblo. Aunque el homicidio de Eduardo Frei Montalva le sirviera para proclamarse como candidato presidencial de una fórmula integrada por socialistas y un conjunto de partidos allendistas y marxistas. Todo ello, mediante un proceso electoral espurio al interior de la Democracia Cristiana bautizado como el “Carmengate” y que apartó definitivamente a su camarada Gabriel Valdés de la posibilidad de convertirse en el abanderado de esa amplia Concertación de partidos, que después fuera desgranándose poco a poco, hasta el arribo de los comunistas a la Nueva Mayoría.

Sin duda hay que reconocer en Aylwin su gran sentido de oportunidad. Estamos ciertos que desde la Presidencia de la Democracia Cristiana en 1973 interpretó certeramente a las bases de su partido que, como él, empezaron a preferir una asonada militar que un régimen más radical o revolucionario. Así como que en 1990 borraría con el codo todos sus litigios con la ex Unidad Popular y se ofreciera como el presidente de unidad que tendría que hacerse cargo de un gobierno con Pinochet como comandante en jefe y senador vitalicio. Para administrar un gobierno bajo los arreglos y negociaciones de sus ministros Edgardo Boeninger y Enrique Correa con generales, dirigentes empresariales y otros, como mediante la desactivación programada de las organizaciones sociales y de los DDHH. Además del asesinato de los medios de comunicación que pudieran ser hostiles a los arreglos cupulares consumados.

Si hay que rendirle homenaje a las pericias de la política como a la ubicuidad de ciertos personajes me sumo en reconocer a Patricio Aylwin como uno de los príncipes de estas prácticas tan acendradas en la historia universal. Pero, ciertamente, prefiero reconocerle el título de estadista a los que manifiestan de por vida una misma forma de pensar y actuar: son consecuentes e intransigentes y se hacen indispensables en interpretar el clamor contenido de los pueblos y de los pobres que siguen esperando ser redimidos. Aunque muchas veces estas víctimas tropiezan con su propia ignorancia, la influencia nefasta del dinero en la política.

No hay duda que en materia de pensamiento, en la Democracia Cristiana muchos fueron mejor que él como señeros conductores. Por otro lado qué distancia existe entre Aylwin y la consecuencia de un Salvador Allende, la obstinación de un Nelson Mandela y el sacrificio, como el arrojo, de nuestros libertadores y genuinos padres de la Patria.

Que descansen en paz Patricio Aylwin con todos sus claroscuros. No me acomoda eso de que todos los muertos son buenos

ni que la historia es certera en proclamar a sus héroes. Tampoco pienso que lo sucedido después de la Dictadura es lo mejor que pudo pasar y que Patricio Aylwin administró una transición también en la medida de lo posible. Seguimos pensando que todo habría sido mejor si hubieran llegado a La Moneda nuestros verdaderos líderes, quienes se propusieran asistirse por el pueblo altivo y movilizado; quienes hubieran aprovechado la derrota y el desprestigio profundo de las Fuerzas Armadas, como su tan probada cobardía.

Si hubieran ingresado a La Moneda quienes hubieran sabido valerse y legitimarse, además, en el apoyo y la asistencia de un mundo que acompañó la lucha contra el Tirano y esperaba una solución democrática certera y estable. Porque ahora ya es tarde y ya vemos lo desnaturalizada que está la política de mano de los que llegaron a la Moneda y se acomodaron en el Congreso Nacional. Quienes tienen que construir mitos como el de Aylwin para poder sostenerse en el poder.

¿A quiénes sirven los encapuchados?

La lamentable muerte de un funcionario municipal el 21 de mayo en Valparaíso nos obliga nuevamente a preguntarnos a quiénes y a qué sirven los encapuchados que siempre irrumpen en las jornadas de movilización social, sin que las policías demuestren alguna eficacia en detenerlos y ponerlos ante la justicia. Con el tiempo que pasa, cada día crece más la sospecha de que estos grupos son administrados por alguien desde las sombras del poder; de otra forma no podríamos explicarnos su impunidad, cuando a vista de las cámaras de la televisión y de una gran cantidad de testigos acometen la violencia que le observáramos, recién, con su irrupción en una farmacia, la destrucción de todo a su paso y el lanzamiento de bombas incendiarias que acabaron con un edificio patrimonial del Puerto pero, mucho más grave aún, con la vida de un modesto auxiliar de aseo.

Por cierto que esta banda tuvo largo tiempo para realizar su programado delito sin que los carabineros llegaran a tiempo al lugar. Con esto se repite el mismo libreto de siempre en la Capital o donde quiera se organicen legítimas marchas y actos de protesta que se proponen ser masivos y pacíficos. Imposible no recordar con lo sucedido cuando bajo la Dictadura aparecían siempre aquellos forajidos que al término de las protestas de desprendían de

sus pasamontañas e ingresaban tranquila y voluntariamente a los carros policiales que los aguardaban y daban protección. Como tantas veces pudimos comprobarlo y denunciarlo, entonces.

Para la gente que no ve más allá de sus narices y de los informativos de la Televisión, es evidente que la acción de estos encapuchados se asocia a los que se convocan para marchar y protestar. En este caso a los estudiantes decepcionados por la fallida reforma educacional, como a las organizaciones sindicales decepcionadas por la Reforma Laboral. A esta altura de situaciones que tanto se repiten resulta imposible creerse las explicaciones posteriores de las autoridades y de la superioridad de Carabineros de Chile; así como sería absurdo e injusto que asumiéramos que son los jueces los que desisten de imputar a las decenas de manifestantes que son detenidos y que, luego, deben ser puestos en libertad por “falta de méritos”, según la jerga judicial.

Todos sabemos que prácticamente todas las ciudades registran todo lo que pasa en sus calles. Todos sabemos de los presupuestos, equipos y armas “disuasivas” con que cuentan las distintas policías para enfrentar el crimen; así como a muchos nos constan los recursos y atribuciones que tiene nuestro Estado para infiltrar movimientos, pesquisar correos electrónicos y teléfonos, como intervenir en las redes sociales que pudieran prevenir estos delitos y dar con el paradero de estos violentistas, cuya actitud sirve invariablemente para desacreditar el derecho de pueblo a manifestarse. Desde hace mucho tiempo, las organizaciones políticas y sociales más rebeldes se han deslindado de la acción de estos encapuchados y demandado la drástica acción de las autoridades, de los servicios de inteligencia y de las propias fuerzas policiales para desactivar estas bandas.

De existir espontáneamente grupos extremistas que se propongan estas audaces y violentas acciones en el quehacer político, la verdad es que estaríamos ante una situación extremadamente

grave si consideramos que siempre cuentan con tal alto despliegue de desfachatez e impunidad. Posiblemente, ya habríamos lamentado crímenes mayores y hasta magnicidios, en nombre o alimentados por el enorme malestar social que existe respecto de las cúpulas gobernantes y las castas empresariales. Así como de la corrupción generalizada que tiene atónita a nuestra población.

Otra vez, lo que tenemos después de este deleznable crimen es la verborrea de ministros, subsecretarios y políticos de toda especie para prometer “todo el peso de la ley” para querellarse en contra de los presuntos culpables de estas acciones. Es el caso del propio ministro del Interior y del vocero de Gobierno que ya deben tener memorizadas sus rutinarias reacciones ante la prensa cuando suceden estos lamentables acontecimientos. No deja de ser curioso, por lo mismo, que nunca después del vandalismo hayamos visto que alguna autoridad política, policial o judicial renuncie a consecuencia de su ineptitud. Que los funcionarios de la Agencia Nacional de inteligencia, la ANI, continúen impertérritos en sus puestos y que nuestros propios gobernantes no destituyan a quienes tienen por misión garantizar el orden público y, con ello, el legítimo derecho ciudadano a manifestar públicamente su descontento.

Muy por el contrario, aquí en Chile ya se ha hecho habitual que ante movilizaciones incluso autorizadas, antes que los propios manifestantes se congreguen en el lugar, concurren los carros lanza aguas y gases tóxicos y una multitud de uniformados concurren en actitud de guerra contra la población civil. Así como ya se han hecho corrientes los arbitrarios seguimientos, detenciones y amedrentamientos previos de líderes sociales a objeto de encrisparlos y afectar la protesta que se proponen. En este caso, constan las detenciones efectuadas por los policías para retrasar la concurrencia de manifestantes e, incluso, de los periodistas. Como el procedimiento que afectó, ahora, a nuestra propia reportera

Natalia Figueroa. Sin embargo, por lo que vimos, los encapuchados llegaron nuevamente sin contratiempos a cumplir su faena incendiaria y criminal.

No deja de llamarnos la atención la rápida y, por lo mismo, sospechosa reacción de diversos políticos ante lo acontecido el sábado pasado en Valparaíso para demandar la aprobación en el Parlamento de la Ley que le daría a las policías mayores atribuciones de las que ya tienen, cuanto para legalizar esta detención por sospecha que estos ejercen, con o sin ley, en las poblaciones más pobres y marginadas, en la Araucanía y previo a las manifestaciones estudiantiles.

Es incómodo hacer comparaciones, pero en todo esto hay diferencias muy notables entre lo que acontece en nuestro país y lo que demuestran las democracias del mundo. Cuando en países europeos y, por cierto, latinoamericanos, las fuerzas policiales salen a las calles para resguardar a los manifestantes y no para provocarlos, como aquí siempre sucede. O con las renunciaciones y despidos que habitualmente de los guardianes del orden que demuestran tanta incapacidad.

Sabemos que bajo las dependencias de La Moneda actúan operadores políticos capaces de acometer toda suerte de despropósitos como los acometidos por “La Oficina”, esto es aquella siniestra organización político delictiva que durante el gobierno de Patricio Aylwin cometió severos crímenes para neutralizar a grupos de la ultra izquierda. Así como sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas y de las policías existen elementos maleados por los procedimientos de la Dictadura. Sujetos, todos, en los que no habría que descartar acciones delictuales para abortar los derechos políticos y sociales de la población chilena. Más todavía cuando la confianza de los ciudadanos en sus supuestos representantes se ha precarizado tanto y el afán por aferrarse al poder sigue manifestándose con tanta contumacia. Como para explicarse que

partidos y tantos dirigentes políticos hayan recurrido al financiamiento de empresarios tan repugnantes como un Julio Ponce Lerou, y otros multimillonarios como él que burlan cotidianamente las leyes y son los principales culpables de que Chile tenga la mayor inequidad social de nuestra Región y acaso de todo el mundo. Impunes, por cierto, respecto de sus tropelías empresariales, pero también de haberse coludido con los militares y policías para cometer los episodios más luctuosos de la represión pinochetista.

¿No sería bueno preguntarnos a qué y a quiénes sirven los encapuchados para descubrir desde dónde emergen y actúan sin que por tantos años y décadas se los detecte y neutralice?

¿Cuántos crímenes más tienen que cometer en Chile contra su propio pueblo las fuerzas reaccionarias para que descubramos su vocación criminal? Su inlaudicable voluntad de oponerse al advenimiento de la democracia, esto es a la soberanía popular al precio que sea. Manipulando con sus millonarios recursos a los grandes medios informativos, infiltrando a las organizaciones ciudadanas y sometiendo a los políticos incautos que son seducidos con sus sobornos, a objeto de que gobiernen para ellos y su irrefrenable voracidad.

Una corrupción ideológica

En medio de la secuencia de escándalos existe otra corrupción que no tiene que ver con dineros tan directamente, aunque también implica enriquecimientos ilícitos y operaciones fraudulentas. Nos referimos a la degradación ideológica que está afectando a dirigentes políticos que en pasado repudiaron el afán de lucro en la educación como en otros ámbitos, y hoy empiezan a consentir con la posibilidad que existan universidades privadas que asuman esta actividad como un rentable negocio para sus dueños y sostenedores.

En la vorágine de privatizaciones impulsadas por Pinochet, expresamente la Dictadura prohibió el lucro de las universidades, aunque en la práctica esta obligación fuera flagrantemente vulnerada por la creación de un gran número de universidades que lucraron e implementaron múltiples y millonarias operaciones de compraventa, cuanto emprendimientos mobiliarios *ad hoc* para hacer dinero. Impartiendo, por cierto, una educación la mayor de las veces de mala calidad y abusiva para con sus estudiantes y atribulados padres y apoderados que debían financiarla, como todos sabemos.

Los movimientos estudiantiles de la última década lograron crear conciencia nacional en cuanto a que no es lícito lucrar

con un derecho que debe estar garantizado para todos en su solvencia y gratuidad. Tal cual ocurre en una buena parte de los países más democráticos del mundo y que han sido señeros en la idea de que la educación es la que mejor abre las puertas del crecimiento, la justicia social y la igualdad de derechos políticos, económicos y culturales.

De esta forma es que la proclamada Reforma Educacional, entre sus directrices principales, concibió el deber del Estado en garantizar para todos los habitantes del país este derecho humano, así como la necesidad de prohibir y sancionar a los establecimientos universitarios que lucrarán, sobre todo si éstos recibían subsidios y recursos fiscales.

Podríamos decir que hasta en la Derecha encontramos receptividad a las demandas estudiantiles en favor de la gratuidad y calidad de la enseñanza, así como pudimos comprobar el rubor de algunos de sus miembros respecto del descaro con que actuaron algunos sostenedores de universidades al violar las disposiciones legadas por esa Dictadura que nunca, por lo demás, han dejado de admirar.

Escándalos y negociados en sus procesos de acreditación, titulaciones irregulares, transferencias al extranjero de la propiedad de importantes universidades, proliferación de carreras insolventes y sueldos millonarios se demostraron como prácticas habituales en las universidades con afán de lucro que surgían como hongos y lograba contaminar, incluso, a otras importantes entidades fiscales y particulares de excelencia académica. Se conocieron los horribles crímenes cometidos por dueños y administradores de estos centros cuando la educación se consolidaba como uno de los negocios más rentables del país.

Por lo mismo que no fueron pocos los casos de ministros, subsecretarios y otros altos funcionarios que desde el Ministerio de Educación empezaron a emigrar para las universidades y co-

legios privados. Tal cual economistas y otros altos funcionarios públicos tomaban sitio, después de su paso por la administración pública en la banca privada y en los directorios de las empresas favorecidas por su gestión.

Parecía que las movilizaciones y discursos de los jóvenes universitarios y secundarios lograban asentar en la población la idea de que el derecho a la educación nunca más volvería a ser objeto de lucro, aunque ciertamente nuestro país le diera espacio a establecimientos particulares que acreditaran su vocación educacional, además de una adecuada y honesta administración.

Tal idea logró desarrollar también la necesidad de que tampoco Chile permitiera el lucro en la salud y en la administración de los fondos previsionales de los trabajadores chilenos. Más, todavía, ante los abusivos cobros de las isapres y sus utilidades descomunales; tal cual ocurre, también, con las AFPs y las jubilaciones de hambre que ofrece nuestro sistema previsional a quienes se retiran después de una larga vida de trabajo. Tiempo en que sus remuneraciones son asaltadas mensualmente por sus altísimas y obligadas cotizaciones.

No es extraño, por esto, que el Gobierno haya postergado otra vez el ingreso al Parlamento de la prometida Reforma a la Educación Superior, advirtiendo ahora la ausencia de acuerdos entre los partidos integrantes de la Nueva Mayoría. Después de años de dilaciones, se estimaba que antes del 21 de Mayo y el Mensaje Presidencial esta iniciativa iba a quedar definida por el oficialismo; sin embargo lo que han surgido en los últimos días son las voces de quienes insinúan la posibilidad de que una nueva Ley permita la existencia de universidades que lucren, aunque a condición, claro, de que éstas no reciban contribuciones algunas del Fisco.

Algo, sin duda, que pudiera aparecer razonable en un país que quiere garantizar las libertades y los libres emprendimientos, pero que en los hechos solo podría contribuir a que estos centros de

“formación” reiteren sus prácticas movidas por el lucro y terminen ofreciendo títulos y grados insolventes, mediante mallas curriculares mediocres, como con docentes de precaria calidad. Referentes que renuncien, como ya lo comprobamos, a la investigación científica y al desarrollo de la extensión universitaria, a fin de no distraer recursos que puedan repartir entre sus sostenedores. Que oculten sus gruesas ganancias en el auto arriendo de propiedades personales y en la práctica de otros archiconocidos vicios.

Seguramente que éste es un tema que debe producir incordios entre los partidos de la Nueva Mayoría, cuando un buen número de sus dirigentes ha “invertido” en establecimientos propios, así como en las isapres y en fondos de pensiones que, por supuesto, apoyan mediante sobornos a financiar sus gastos electorales. Tal como lo hacen los más deleznable empresas del país favorecidas con la religiosa mantención del modelo económico y social heredado también de la Dictadura.

Celebramos, entonces, la rápida reacción del mundo estudiantil, como de muchos rectores y académicos que acechan el peligro de quienes quieren aprovechar el caos en que vive la política en Chile para sacralizar el lucro y seguir atentando contra uno de los derechos humanos más fundamentales. Como siempre, debe ser su más airada o radical protesta la que inhiba los aviesos propósitos de quienes, además, de su codicia, saben que la educación, de por sí, es revolucionaria y abre las puertas a la sociedad igualitaria. Algo que tanto temen las cúpulas políticas y empresariales que manejan los destinos de un país que dista demasiado todavía de ser demócrata y republicano.

FFAA: presunción de culpabilidad

En un verdadero despropósito se nos convierte el llamado del Comandante en Jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, a que respetemos la presunción de inocencia respecto de aquellos militares acusados de enriquecimiento ilícito, como de haber asaltado en beneficio propio los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre que le ha dado a los militares millonadas de dólares para comprar armas por encima de sus recursos regulares ya desmedidos.

Presunción de inocencia para su antecesor Juan Miguel Fuentealba a quien se le calcula una fortuna personal que supera los dos mil millones de pesos. Presunción de inocencia para los uniformados involucrados en el Milico Gate, quienes se farrearon millones de dólares en un casino de juegos, diversos viajes, viáticos ilícitos, pago de coimas y demases, varios de los cuales están detenidos y formalizados. Presunción de inocencia para él mismo general Oviedo, después de que solicitara pasaportes diplomáticos para sus hijos mayores de edad y uno de ellos se afanara un pago de tres mil dólares de parte de la Embajada de Chile en Estados Unidos, cuando su padre se desempeñaba en esta legación. Presunción de inocencia para los que dispusieron un gasto por encima de los 3 millones de dólares solo en bebidas

alcohólicas durante la Comandancia en Jefe del mismo Fuente Alba, en cuya negra gestión a cargo del Ejército de Chile “jamás vencido”, como dicen.

Presunción de inocencia para los que vendieron armas clandestinas, para los que se favorecieron personalmente con coimas pagadas desde Europa para las diferentes adquisiciones de armas dispuestas por las tres ramas de nuestras FFAA. Presunción de inocencia para Pinochet y sus secuaces en el fracasado proyecto “Rayo” que le significó repartirse unos dos millones de dólares con el director de Famae y al jefe de Finanzas de esta institución del Ejército. Presunción de inocencia para el fallecido ex comandante de la Fach Ramón Vega, involucrado en los escandalosos ilícitos de la compra de esos aviones Mirage Elkan en Europa.

Acaso, también, presunción de inocencia para los involucrados en el Caso Fragatas cuando se adquirieron irregularmente cuatro naves holandeses... o con la compra de los tanques Leopard, operaciones todas bajo los ritos de la corrupción que se desatara con los recursos de esta Ley Secreta y las millonarias sumas gastadas discrecionalmente por el Ejército y las otras instituciones castrenses. Presunción de inocencia, finalmente, para las millonarias adquisiciones, hasta con facturas y boletas falsas, de los suministros cotidianos para los cuarteles, casinos militares y las propias residencias de los mandamases uniformados.

¡Vaya que hay que ser caradura, general Oviedo, para solicitar-nos presunción de inocencia ante tantas evidencias!

Ojalá los militares hubieran alguna vez haber practicado la presunción de inocencia para sus miles y miles de víctimas detenidas, torturadas, confinadas, ejecutadas o exiliadas por la bota militar, por el ejercicio de la fuerza bruta, la utilización de las armas que le han conferidos los chilenos para su protección. Cuando se sabe que, en su historial de golpes de estado y traiciones a la Patria, han causado muchos más compatriotas muertos y heridos

que todos los extranjeros con los cuales combatieron en sus dos guerras fratricidas contra Perú y Bolivia. Valientes soldados que asaltaron La Moneda, bombardearon poblaciones como la de la Legua, organizaron campos de concentración en contra de chilenos que culpaban sin más de terroristas y por quienes no tuvieron, ciertamente, ni la más mínima presunción de inocencia.

Presunción de culpabilidad es la que debemos tener los chilenos respecto de tantos forajidos uniformados que todavía siguen activos en nuestras fuerzas armadas. Respecto de tantos homicidas impunes que, desde Pinochet para abajo, se han demostrado también como ladrones, además de tener una manifiesta inclinación por el desmedido consumo de alcohol, si juzgamos las cifras que ha entregado el portal de compras públicas.

Presunción cierta de culpabilidad respecto de todas las cúpulas militares encargadas de administrar los ya voluminosos presupuestos castrenses a los cuales se han agregado y se seguirán agregando los recursos millonarios de la Ley Reservada del Cobre, cuya derogación no está, curiosamente, en los planes de la Presidenta Bachelet, según declarara públicamente su ministro de Hacienda.

Presunción de culpabilidad que debemos imputar también a los gobiernos y, en particular a los ministros de Defensa de toda la Posdictadura. A cada uno de los secretarios civiles de Defensa tan encantados con el mundo castrense y sus lisonjas a su paso por este ministerio. Tan complacidos por su buena y afectuosa relación con los militares, a los cuales siguieron sirviendo, incluso, después de dejar sus cargos.

Realmente, se haría necesario abrir también una nueva arista en las investigaciones sobre los aportes irregulares a los partidos y campañas electorales. A objeto de descubrir, ¿por qué no?, posibles contribuciones de los propios uniformados a los candidatos. Mediante, por ejemplo, ese consabido “CVA” (o “cómo voy ahí”)

en cada operación fraudulenta de los militares consentida por los distintos gobiernos que nunca se han atrevido, en más de 26 años, a poner a los militares bajo su línea de mando y supervisión. Falta de coraje que los hace responsables, y hasta cómplices, de todos los escándalos castrenses que empiezan a destaparse o que fueron sepultados expresamente por la política y los gobiernos de la Concertación como sucedió con los negocios del hijo de Pinochet, quien también heredara la impunidad de su padre.

Impunidad que ahora también la hereda su madre por el uso y mal uso de los millonarios recursos otorgados y extendidos estos años también para Cema Chile, institución presidida por Lucía Hiriart y que cuenta con centenares de propiedades conferidas por el Dictador a su cónyuge. Las cuales el ministro de Bienes Nacionales está empeñado en recuperar para el Estado... ¡A ver si lo dejan!

Viva Chile, mierda!

A nuestra Facultad de Economía y Negocios se le ha abierto una oportunidad magnífica para investigar la vida y obra del general Juan Miguel Fuente Alba, como un modelo de individuo que, realmente, ha sabido administrar bien sus ingresos y multiplicarlos a una cifra sideral sin mácula alguna, regido solamente por la disciplina, el orden y las inversiones audaces.

Cuando en el tope de su carrera militar, en los cuatro últimos años de trabajo, el ex comandante el Jefe llegó recién a ganar un sueldo de unos 3 o 4 millones de pesos mensuales, la verdad es que el General debiera convertirse en un sólido ejemplo para todos los chilenos y los emprendedores del Planeta para aprender a hacer bien las cosas y acumular una fortuna familiar de, al menos, dos mil millones de pesos. Junto con darse, siempre, toda suerte de satisfacciones, comprando y habitando en propiedades amplias, seguras y confortables, además de conducir esa variedad de vehículos de lujo, en la pasión que le despiertan los automóviles, según le confesara a sus amigos.

El general Fuente Alba se nos constituye, así, en un eximio exponente de lo que podría ser el “sueño chileno”. Podría constituirse en el ejemplo a ser imitado, al menos, por sus camaradas de armas que, ganando sueldos más bien discretos (aunque me-

jores que los de la mayoría de los trabajadores,) tienen un tiempo fantástico para dedicarse a discurrir e implementar proyectos inmobiliarios y negocios realmente muy lucrativos o rentables, además de distraerse de las pesadas rutinas castrenses y zafarse de estrés propio de la guerra, cultivando, por ejemplo, el hobby del automovilismo, el velerismo o del turismo aventura.

Estamos ciertos que cuando se cumple, a lo sumo, con una jornada diaria de ocho horas de trabajo el tiempo alcanza realmente para emprender y realizar inversiones rentables, o para concebir oportunidades de negocios en los distintos, bien climatizados y tan dotados casinos militares. Cuando se cuenta con un hospital institucional que les asegura a ellos, como a su familias ser atendido gratis y sin mayores sobresaltos; cuando se tiene un sistema previsional de lujo; se accede a poblaciones militares seguras y con una buena servidumbre (conforme se escala en grados y charreteras) ; cuando se cuenta, además, con tribunales (cuyos jueces son también militares y de menos rango que los coroneles o generales para salvar exculpados de cualquier incorrección o fechoría), claro que es posible ahorrar dinero e invertirlo adecuadamente en financieras informales como la Cutufa y tantas otras organizadas para que los uniformados puedan recibir dividendos por encima de los que ofrecen los bancos comunes y corrientes del país

Es indiscutible que con destinaciones a provincias y al exterior siempre muy apetecidas también es posible sumar ahorros y descubrir más oportunidades de negocios, todavía. Aunque ninguna ventaja puede ser comparable a la oportunidad de trabajar para los servicios de abastecimiento de los regimientos o cuarteles , o entrar al circuito de los que deciden la compra y la venta regular o clandestina de armamentos y todo tipo de pertrechos en operaciones, por lo demás, muy bien protegidas por el secreto de estado. Sobre todo cuando se cuenta con los recursos del 10 por ciento de todas las ventas de Codelco, cualquiera sea el pecio del

cobre a nivel internacional. Mediante una Ley que se ha mantenido como “secreta” durante los 26 años de la posdictadura. Y cuyo texto, ahora sabemos, define cómo repartirse el botín entre las instituciones castrenses lo arrebatado año a año a los recursos provenientes del sacrificado trabajo de los mineros. Todo, por supuesto, con la anuencia de los seis gobiernos que siguieron al del Capitán General. Abyectos, como los conocimos, a la Constitución y a todo el legado dictatorial.

En el trabajo militar está asegurado, asimismo, otros beneficios muy simples, como lo son su vestuario y los zapatos siempre muy bien lustrados por sus ordenanzas. Como en las becas, además, y los establecimientos especiales para los estudios de sus hijos y nietos, las pensiones para sus viudas y hasta sus herederas solteras, como otros beneficios que para la mayoría de los chilenos no existen, por supuesto.

Ni qué hablar que algunos militares pudieron ver incrementadas su cultura y sus pinacotecas con los cuadros robados, por ejemplo, de las casas allanadas durante la Dictadura, aunque no consta que el general Fuente Alba haya tomado parte de estos oscuros afanes, como lo ha asegurado el ex ministro de Defensa Francisco Vidal, quien debe haber decidido junto a la Presidenta Bachelet el último ascenso de Fuente Alba a Comandante en Jefe de la Institución. Un cargo que le dio acceso a los suculentos recursos destinados a gastos reservados, fondos que, nos suponemos, el general Fuente Alba manejó con entera probidad, como corresponde a un militar de honor que viste el uniforme del “Ejército Jamás Vencido”, y que, por lo mismo, nunca o fuera supervisado por el Contralor General de la República ni por otro funcionario civil del Estado que pudiera atrevérselo... Aunque debemos dejar constancia que respecto de su antecesor Augusto Pinochet Ugarte sí se sabe que ocurrió a estos fondos para su beneficio propio, el de su cónyuge Lucía, sus hijos y, acaso, su di-

lecto Julio Ponce Lerou, entre los múltiples yernos que acumuló el Tirano en su dilatada trayectoria militar y política.

Con todo, las cifras no calzan, como me dice un amigo rico que tengo y que ha sido un gran ingeniero y emprendedor. Aunque nunca llegara a ser tan acaudalado como el general Fuente Alba. Cura fortuna es la que se solo se le calcula solo en Chile, pero que podría verse acrecentada con otros depósitos en el extranjero, en los paraísos fiscales que los militares descubren muy bien cuando se desempeñan de adictos en nuestras embajadas, durante sus estancias en Panamá y en esa suerte de viajes y ejercicios militares conjuntos con los Estados Unidos que –dicho sea de paso- siempre les otorgan excelentes viáticos y estadías de lujo. Después de jugar a la guerra con los barcos, aviones y tanques que después nos venden y pagan suculentas comisiones para quienes las deciden en Chile.

Vaya qué importante sería que los tribunales de Justicia llegaran a esclarecernos si el general es o se hace el probo, el sagaz o el inocente como ahora se declara después de cinco días de sepulcral silencio. Tiempo que debe haber aprovechado -me imagino- para hacer unas cuantas movidas financieras más y para tener todo en perfecto orden al momento de ser investigado.

Insisto: para las escuelas de economía podría ser el general Fuentealba un verdadero conejillo de indias, pero con la nariz bien larga, para darle más crédito todavía a nuestro exitoso modelo económico social, para comprobar que cualquiera en Chile puede llegar a ser millonario como él, trabajando abnegadamente toda una vida, sirviendo al país y a su institución. Que no hay necesidad de hacer colusiones, atentar contra nuestros frágiles ecosistemas, ni evadir impuestos para hacerse poderoso. Que solo hay que trabajar, conformarse con lo que se gana y ahorrar peso a peso para amasar una fortuna como la del ex comandante en Jefe. Que tampoco hay que afiliarse en sindicatos, ni militar en partido político alguno para hacerse exitoso y llevar una vida placentera.

¡Viva Chile, mierda!

El INBA y los pendejos de la política

Como exalumno del Internado Nacional Barros Arana me duele comprobar los actos de “vandalismo” que ha sufrido este establecimiento educacional, cuya sede constituye un valioso patrimonio y cuyo nivel educacional alcanzara los mejores rendimientos de la educación pública. Duele comprobar los niveles de violencia que se manifestaron a propósito de la toma del plantel por sus estudiantes y por el acceso de elementos sin duda extraños al plantel, y que materializaron estos agravios que rápidamente las autoridades han calculado en unos 500 millones de pesos.

Un indignado Intendente de Santiago inmediatamente reaccionó para sacarle provecho político a esta desgraciada situación presentando querellas criminales contra los que resulten responsables de estos actos y en el objetivo, además, de que sus padres o apoderados de estos agresores sean condenados a pagar por los destrozos. Educado en uno de los establecimientos más exclusivos de Santiago, Claudio Orrego Larraín parece demasiado perturbado por lo ocurrido en el INBA, pero estoy seguro que no lo mueven los sentimientos que nos ocasiona esta situación a quienes estudiamos allí y dormíamos todas las noches en nuestro querido Internado.

Lo cierto es que bien podrían las autoridades educacionales convocarnos a los miles de egresados del Internado a concurrir

con la recuperación de nuestro colegio, cuestión que haríamos con gusto si esto pudiera interponerse a la voluntad del Intendente de hacer pagar a los jóvenes y a sus padres por un atentado que, sin duda, debemos imputarle también al sistema educacional, a toda la clase política responsable de postergar abusivamente las reformas prometidas, así como tan culpable, también, de enfrentar con violencia policial y criminal las justas demandas de los estudiantes y de la inmensa mayoría del país.

Creo conveniente contarle a mis auditores que cuando yo era alumno del INBA, en la década de los 60, sucedió un terrible incendio del plantel que arrasó en menos de una hora con un pabellón entero de salas de clases, laboratorios y dormitorios, dejando prácticamente a la intemperie a muchos inbanos. Creo necesario contarles algo que no se divulgó entonces y que ahora sería bueno que supieran el Intendente Orrego y la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, que dispusieran o consintieran con el desalojo del establecimiento tomado:

El responsable de aquel siniestro que ocasionara millonarias pérdidas había sido un joven interno a quien sus padres de provincia habían enviado a estudiar a la Capital y que, por la lejanía de su casa, debía permanecer todos los fines de semana en el Colegio, mientras sus compañeros salían sábados y domingos. Un niño que, naturalmente, fue acumulando resentimiento contra su encierro, por su desarraigo y por la soledad a que había sido expuesto a los 12 o 13 años de edad... Entre paréntesis, les cuento que se trataba de un niño superdotado, que brillaba por su oratoria, por sus avanzados conocimientos filosóficos, por sus agudos análisis. Cuestión que podríamos comprobar a la hora de crepúsculo diario cuando concurría a los patios y dormitorios de los internos mayores para conversar y maravillarnos por su talento.

Sin embargo, este mismo niño había urdido pacientemente el incendio del Barros Arana, en largos meses que fue introduciendo

papeles y elementos combustibles en los pasillos del Pabellón, allí donde las tablas de los corredores se habían aflojado por el paso del tiempo. Y claro, vino el día aquel en que todos los internos estábamos almorzando en los comedores del establecimiento cuando el incendio se desató y, en menos de una hora, repito, todo terminó en escombros. En negros y malolientes escombros.

Ya nada pudieron hacer las múltiples compañías de bomberos y la espontánea acción de los profesores, inspectores y estudiantes para enfrentar las llamas. Un tercio de la comunidad inbana perdía sus salas de clases, sus pupitres y camas, pero rápidamente el Colegio encontró sitio para todos los damnificados en los demás dormitorios, gimnasios e instalaciones de este enorme plantel.

Y, claro, la investigación policial que vino en pocos días con signo que se había tratado de un incendio intencional, así como en pocas horas el joven autor del siniestro fue identificado y resultó confesó de su acción. Sin embargo, estimados auditores, tanto el Rector, como el cuerpo de profesores y el poderoso centro de alumnos del Internado coincidieron en no emprender ninguna acción criminal contra el autor del incendio ni, menos, contra su modesta familia del sur. Se asumió que lo obrado por este joven era de responsabilidad de todos los maestros y familiares que no fueron capaces de visualizar y atender las frustraciones que tenía un estudiante especialmente sensible. Así como se asumió que sería el colmo estigmatizar a un menor con una acusación y castigo que le penarían de por vida.

El propio gobierno de la época, como el mismo Poder Judicial (que podría haber actuado de hecho frente a un delito de acción pública) consintieron en esta posición adoptada por el Plantel y en la necesidad de salvar –más allá de los millonario daños- la honra de un niño que seguramente los Orrego o los furibundos de hoy no habrían dudado el lapidar y condenar de por vida.

¡Vaya qué ejemplo nos dio, entonces, nuestro querido Inter-

nado con esta actitud! ¡Vaya qué grandes y sabios nos parecieron nuestros maestros de entonces; vaya qué solidarios nos sentimos con nuestro compañero todos los alumnos que habíamos sido perjudicados por un despropósito que hoy llevaría, por cierto, el apelativo de vandálico, sin que todos los genuinos responsables se hicieran la debida y mínima inculpación y autocrítica! Partiendo por quienes deben velar por la educación pública y la dignidad humana y los derechos, especialmente de los más niños.

No sé si el Intendente Orrego es supernumerario, también, del Opus Dei, pero sé que se trata de un católico observante, así como del hijo de un notable demócrata cristiano que conocí y que ocupaba un alto cargo de gobierno cuando esto sucedió en el Internado. De quien me atrevería a asegurar que supo que el autor de este incendio había sido un joven estudiante y de quien creo estar seguro haber compartido el silencio oficial que se impuso para salvar la honra de un menor de edad.

Todo el peso de la ley nos promete el Orrego de hoy para castigar a los agresores de esta casa de Estudios, de nuestro querido Internado... Expresiones que son replicadas en La Moneda, por supuesto, por la propia Presidenta en el ánimo de todas las autoridades actuales por criminalizar el movimiento estudiantil, alentar la más que vandálica acción de la policía uniformada, cada vez que irrumpe violentamente en los hogares de los mapuches, en un colegio o establecimiento ocupado. Cada vez que las arremete en las calles para perseguir a quienes se movilizan, en evidente complicidad, ¡qué duda cabe! con los encapuchados e infiltrados en estas acciones de justa protesta y justo derecho ciudadano.

Autoridades fuertemente imbuidas del carácter autoritario que les legara quien les traspasó el poder político y a cuya Constitución y leyes rinden pleitesía por más de veintiséis años de posdictadura. Pendejos y pendejas que nos gobiernan y medran en los pasillos de nuestra instituciones públicas y que jamás tendrían la

grandeza que manifestaron las autoridades de entonces y que he tratado de representar en este episodio y ejemplo que les relato.

Políticos abyectos y serviles que rasgan vestiduras por el patrimonio público afectado en esta lamentable acción contra de nuestro Internado. Por esos 500 millones que habrá que gastar para recuperar el patrimonio afectado de este establecimiento educacional, pero que nada dicen, ni acción judicial alguna emprenden, para castigar a los que todos los días agreden nuestro patrimonio natural, nuestra reservas estratégicas, así como asaltan en multimillonarias sumas al erario nacional. Que evaden impuestos, lucran abusivamente y se coluden para asaltar los bolsillos de los consumidores nacionales.

¡Vaya que contraste más profundo entre los políticos de ayer y los de hoy!

La descomposición política y moral de los partidos

La desnaturalización de la política chilena corre aparejada con la descomposición de nuestros partidos. Después de la Dictadura, dichas colectividades dejaron de ser referentes ideológicos o programáticos, pasando a constituirse solo en herramientas para encarar las competencias electorales, o en instancias manejadas por sus cúpulas para satisfacer sus apetitos personales o grupales. Incluso la UDI del extinto Jaime Guzmán Errázuriz devino en una expresión que, luego de representar fielmente la obra pinochetista, devino en una institución manejada por operadores corruptos, varios de ellos ahora formalizados por los tribunales.

Asimismo, poco o nada queda en la Democracia Cristiana, como en los socialistas, de aquellos sólidos idearios legados por sus fundadores y líderes. Así como sería muy difícil concebir en los comunistas que siguieran tan aferrados a las concepciones que iluminaron el llamado “socialismo real”, sistema que cayera estrepitosamente con el derrumbe de la Unión Soviética. Más allá de algunos discursos, es difícil descubrir en el Partido Radical (el más viejo de todos) que algo quede allí de lo que postulaban los gobiernos que ofreció este partido a Chile; a no ser ese “laicismo” que profesan en general sus militantes, cuanto cierta disposición a defender e identificarse con los valores de la educación pública.

En el ejercicio de releer a Salvador Allende, a un Frei Montalva y otros, lo cierto es que resulta colosal el contraste con lo que hoy

profesan sus descendientes políticos. Como enorme es la distancia que se puede descubrir, también, en lo defendido por muchos de los actuales protagonistas de la política tan solo dos o tres décadas atrás. Es decir, cuando el régimen neoliberal era abiertamente repudiado por quienes después arribaran a La Moneda para sacralizarlo, o cuando la Constitución de 1980 era tachada de ilegítima tanto en su origen como contenido. Una sentencia que hoy aparece como subversiva y contraria al llamado “estado de derecho”, con el que hacen gárgaras los actuales protagonistas de la política y juran respetar estrictamente todos los que llegan a un cargo estatal.

Al respecto, siempre se alude a la tesis con que Ricardo Lagos Escobar obtuviera el título de abogado, un texto en que fustigara la concentración económica en Chile a la cual curiosamente su gobierno contribuyera tan notablemente, después. Así como en la década de los 60 y 70, los partidarios de Radomiro Tomic se negaban a ser reconocidos como de centro y se asumían como “voluntarios de la revolución”, mientras que hoy un importante senador DC reconoce que, de seguir en alianza su partido con la “izquierda”, ello podría llevar a militantes de su partido a preferir un candidato de la derecha en los próximos comicios presidenciales. En la actualidad, hasta hay socialistas y falangistas que se sonrojan con su compromiso anterior con la Reforma Agraria, como con la nacionalización o chilenización del cobre y de nuestras reservas naturales. Hoy definidas como “*comodities*”, según las extranjeras expresiones incorporadas al lenguaje político.

Antes era muy difícil, cuanto no imposible, pensar que un “cristiano de izquierda” pudiera llegar a militar en el Opus Dei, o que un jacobino marxista leninista de antaño (incluso habiendo sido encarcelado o exiliado por la Dictadura) hoy llegara a desempeñarse como miembro del directorio, asesor y lobista de los bancos más poderosos o del Consejo Minero. Es así como vemos en plena comprobación el llamado “síndrome de Estocolmo”, que lleva a las víctimas a terminar identificándose con sus victimarios.

La escritora Mónica Echeverría acaba de publicar un libro en que describe certeramente este “reciclaje” político de quienes sostuvieron ayer las más radicales posiciones y que hoy es tan frecuente encontrarlos en las páginas sociales de El Mercurio.

El espectáculo, entonces, de los partidos políticos es patético. Las directivas nutren de derecha a izquierda sus presupuestos con donaciones de las grandes empresas y con recursos también llegados desde el extranjero que transgreden gravemente la Ley Electoral. Entrar a militar en estas colectividades es alistarse para obtener un cargo público, en ningún caso, ya, para profesar una idea o proponerse servir desinteresadamente al país, a su crecimiento, como a objetivos tan básicos como el de la “igualdad de oportunidades” para todos los habitantes de nuestro territorio.

La idea, ahora, es servirse personalmente de la militancia partidista y del consecuente cargo que se le sea asignado por quienes parten y reparten la torta política. Ello explica que la ex esposa de un diputado y dirigente socialista se haya dado maña para alcanzar una de las pensiones más millonarias al momento de jubilarse; que varios dirigentes y candidatos hayan recibido sistemáticos aportes de un empresario pinochetista tan deleznable como el propio yerno del Dictador, en el compromiso expreso o tácito –qué duda cabe- de no intervenir jamás sus cotos de caza o arrebatarse lo que obtuvo fraudulentamente.

Con seguridad, ahora es imposible marcar un nítido límite que separe a izquierdistas de derechistas, a cristianos de izquierda y católicos ultra conservadores. A marxistas y hedonistas; a neoliberales y socialistas renovados. De verdad, el escenario político parece estar totalmente dominado por los mismos actores del pragmatismo o, más bien, del oportunismo. Al extremo que, hasta en materia internacional, se han ido quedando aislados los que proclaman las ideas de la solidaridad entre los pueblos o abogan por el latinoamericanismo. Un agudo observador extranjero que quiere publicar unas crónicas referidas a nuestro país nos

confidenciaba que ya no era posible, tampoco, distinguir entre los barrios, automóviles y las propias costumbres cotidianas entre los que se consideran de la Nueva Mayoría o de los partidos de la Oposición. Así como a ratos cuesta distinguir también entre las cúpulas de delincuentes de cuello y corbata y las que siguen merdando indefinidamente en ciertos cargos sindicales y gremiales.

Vivimos una realidad, como dice el tango, convertida en una “porquería”, pero que todavía ofrece a la genuina izquierda o al progresismo la posibilidad de irrumpir en serio en la política, construir acuerdos e impedir que los mismos de siempre sigan compartiendo o alternándose en el mero disfrute del poder. No hay duda que las viejas ideas de la justicia social, de participación ciudadana, que patrocinaban la recuperación de nuestros recursos estratégicos, una previsión y la salud igualitaria, como la misma gratuidad de la educación, son pendientes que podrían levantar alternativa política y movilización popular. Sobre todo cuando todavía no se logra imponer verdad y reparación respecto de los derechos humanos vulnerados por la Dictadura y ahora, con características similares de represión, por esta larga Posdictadura. Cuando la suerte del propio Planeta y de la vida está condicionada a la obligación de impedir la extrema riqueza, redistribuir los bienes como erradicar las formas criminales de intervención en la naturaleza y nuestros frágiles ecosistemas. Arriesgándonos a todos a un gran colapso, como lo viene advirtiendo la comunidad científica internacional.

Gran oportunidad existe, entonces, para una política que se refunde en los valores de la ética y la solidaridad, cuando el mundo y la Región nos convocan, además, a la integración y hermandad entre nuestros pueblos, a desarmar los ejércitos fratricidas y disponer de más recursos en favor de los pobres y discriminados. Objetivo que solo podrá ser atendido con una verdadera revolución en la producción y el consumo. En la paz y el respeto a los derechos políticos, sociales y culturales de todos. Llevando a cabo una verdadera revolución de nuestras conciencias y costumbres.

Convergencia política hacia la derecha

Pese a todos los traspies del oficialismo, como al severo descrédito que afecta a la Jefa de Estado, la derecha no logra sacarle provecho a esta situación y capitalizar apoyo ciudadano, ciertamente afectada también por los escándalos de corrupción, como por las reyertas entre sus partidos, movimientos y caudillos. Así como están las cosas, lo más probable es que las próximas elecciones municipales no nos ofrezcan mayores novedades respecto del amplio desprecio popular que afecta transversalmente a la política, aunque es posible que algunos liderazgos emergentes puedan manifestarse con la votación que logren algunos candidatos independientes o de izquierda deslindados completamente de los dos grandes referentes electorales o del llamado duopolio político.

Por más que La Moneda y la minoría parlamentaria se fustiguen o interpeleen mutuamente, lo cierto que cuesta distinguir a esta altura qué diferencias de fondo podrían existir entre estos dos conglomerados, cuando son tan solo cuestiones de matices, por ejemplo, los que los separan de lo que ya parece convenido como reforma educacional, o de lo que finalmente resultara de la propia Reforma Laboral. La misma renuncia de la Nueva Mayoría a consolidar en este período presidencial una nueva Constitución, al mismo tiem-

po que desistir de cambios importantes en materia previsional, nos indica que se viene produciendo una confluencia ideológica hacia las posiciones de la derecha. Fenómeno que ha ido dejando prácticamente sin discurso propio a las expresiones reaccionarias, sin posibilidad de levantar un programa político que marque diferencias efectivas con los que están morando todavía en La Moneda.

Podríamos decir que en materia de derechos humanos, incluso, hoy da la impresión que el tema irrita también al oficialismo, cuando se comprueba el desdén de La Moneda hacia las demandas de los ex presos políticos, o se exonera de sus cargos públicos a aquellos abogados que mantienen un mayor grado de compromiso con el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la Dictadura y la obligación ética de reparar a las víctimas. Tal como ocurrió recientemente con un profesional del Ministerio del Interior, por más que se haya querido ocultar este hecho.

En el ámbito de los grandes negocios, se afirma que la peor decisión de muchos empresarios fue apoyar la última candidatura de Sebastián Piñera, uno de sus pares, cuando de verdad nunca éstos habían estado mejor que con los gobiernos de la Concertación, muy especialmente con el de Ricardo Lagos Escobar. Período en que se sacralizara, con algunos retoques, la Constitución pinochetista de 1980, y la administración económica de su gobierno consolidara plenamente sus perfiles neoliberales, acentuara la concentración económica, sin propiciar iniciativa alguna para recuperar los derechos sindicales conculcados.

Sin embargo, curiosamente hoy son de nuevo los dos ex presidentes los que quieren auto imponerse como abanderados presidenciales, pese a los fuertes detractores que tienen en la Nueva Mayoría y algunos partidos de la derecha. Pero, a todas luces, quienes se les oponen no es a causa necesariamente de sus planteamientos sino simplemente porque sus postulaciones amagan las ambiciones personales de no pocos políticos que buscan también convertirse en candidatos.

En efecto, muy difícil resulta qué ideas de Lagos o Piñera pudieran ser muy distintas a las de los otros precandidatos, pero peor aún, ¿cuáles podrían ser las diferencias reales entre uno y otro ex presidente, cuando tampoco se pudieron descubrir éstas en sus respectivas administraciones?

Esta convergencia a la derecha es lo que explica, asimismo, que derechistas y socialdemócratas europeos hayan ido mimetizándose y que en España, por ejemplo, ya nadie pueda diferenciar lo que representó un Felipe González en el pasado, de lo que después ha venido haciendo un Mariano Rajoy, después. Por lo mismo es que en este caso y otros (como en Grecia) irrumpieran alternativas exitosas y promisorias. Cuestión que también en Chile pudiera ocurrir si en el vanguardismo criollo se impusiera algún día la unidad, se superase la infiltración, como el insensato caudillismo que los caracteriza.

Algo similar es lo que acontece en Estados Unidos, donde tanto se han desperfilado ideológicamente demócratas y republicanos. Al grado de confluir unos y otros en la misma política exterior, una idéntica estrategia económica y hasta en las políticas migratorias, por lo que en un momento ya daba lo mismo quien accediera a la Casa Blanca. Sin embargo, debemos consignar que Barack Obama despertó grandes esperanzas de cambio porque, además de sus rasgos raciales y origen, planteó una apuesta electoral transformadora que luego cayera desgraciadamente en el vacío. Estamos ciertos que los parlamentarios noruegos que le conferieron el Premio Nobel de la Paz deben estar muy arrepentidos por el galardón que le asignaran al Presidente de los Estados Unidos, después de convertir a su gobierno en uno de los que más ha intervenido militarmente en otras naciones, provocando guerras que han ocasionado cientos de miles de víctimas entre las poblaciones civiles que ha mandado bombardear. En un cometido imperialista que ni los republicanos se habrían atrevido a llevar a

cabo, con campos de concentración y de tortura incluidos. Como quedara demostrado en la base cubana de Guantánamo.

La próxima contienda presidencial estadounidense tiene la novedad de que los sectores derechistas fueron capaces de configurar un monstruo como Donald Trump a la extrema derecha, a fin de diferenciarse realmente de la continuidad que representa Hillary Clinton. Una posición ultrista y fanática que ha logrado interpretar muy bien a la mayoría republicana y aún no se descarta que pudiera seducir, además, a la mayoría de los electores de este país. Pero la posibilidad de una especie de Donald Trump aquí, todavía no se visualiza como posible en la derecha chilena, aunque a muchos de éstos también les fascine la figura de este multimillonario y arrogante candidato republicano. Expresiones como la UDI y Renovación Nacional han pagado un duro costo por no haberse deslindado a tiempo de Pinochet y del régimen dictatorial y ciertamente todavía no podrían animarse a reivindicar abiertamente la figura del Tirano. Aunque sí le hagan todos los días honor a su legado, y poco a poco hayan atraído al oficialismo, incluso, a este reconocimiento.

Las figuras díscolas de la derecha chilena no están ciertamente por ofrecer una alternativa ideológica a la de Piñera o las cúpulas partidistas del sector. Como tampoco la ofrecen aquellos pre candidatos presidenciales de la democracia cristiana, del PPD, del PS o del Partido Radical respecto de lo obrado por los gobiernos de la Concertación, cuando finalmente la gestión de Michelle Bachelet frustró la esperanza que también se tuvo en ella, al igual que en Estados Unidos por un Obama. Aunque en este caso no por su color, sino por su condición de mujer, y por un discurso que hacía un guiño electoral al progresismo y a la izquierda, y que se haya completamente desbaratado. Así como embadurnado, como se sabe, por los escándalos y abusos de poder.

Ante los abusos y escándalos, nueva constitución

Un explosivo aumento del 14.7 por ciento en el crecimiento de las solicitudes de seguros de cesantía es realmente muy expresivo de lo que está sucediendo en Chile en relación al empleo y respecto de aquella sensación de inestabilidad laboral que afecta a los trabajadores asalariados. De acuerdo al reciente informe de la Superintendencia de Pensiones, fueron cursadas 15 780 solicitudes de seguros de empleo más que en 2015, las que se concentran principalmente en personas desvinculadas del agro, la pesca y ganadería, además de la construcción. Muchos de los nuevos desempleados se habrían desempeñado, además, en el comercio y las actividades inmobiliarias en general.

En este crecimiento del desempleo podría explicarse el “tirón de orejas” que le ha hecho recientemente el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a los empresarios, instándolos a lloriquear menos y ponerse a crear más fuentes de trabajo. Un cometido difícil de lograr cuando otras evaluaciones económicas nos indican una baja ostensible de las ventas del comercio, además de ratificarnos las altas cifras del endeudamiento familiar en Chile, cuando el 23 por ciento de los hogares, según las últimas cifras,

gastan todos los meses más que sus ingresos. Especialmente en los sectores más pobres del país.

Una situación que probablemente no es visualizada por la clase política, mucho más interesada en la farándula electoral estimulada especialmente la televisión; esto es en los dimes y diretes de esa profusa cantidad de candidatos presidenciales y los cálculos que hacen los distintos partidos acerca de los próximos resultados electorales. Si bien es cierto que la actitud de los ciudadanos es desgraciadamente muy sensible al márquetin electoral, no cabe duda que el malestar de la población, así como los nubarrones que vienen envolviendo a nuestra economía, pueden ser muy determinantes a la hora de concurrir a las urnas, o abstenerse de hacerlo. Justamente, como manifestación de descontento y repudio transversal a los referentes políticos.

Sería hora que la clase gobernante se preocupara en serio de desarrollar nuevos medios de producción y fuentes de trabajo. En vista, justamente, que el gran empresariado no está dispuesto a hacer más en este sentido y hasta prefiere emigrar sus inversiones al extranjero a fin de maximizar utilidades e inhibir las reformas económicas y sociales crecientemente exigidas por nuestra población. Como se comprueba en la calles, harta ya de espera.

Ya se sabe que los grandes detentores de la riqueza prefieren obtener dividendos en los paraísos fiscales y en la especulación financiera, más que en el emprendimiento real en labores productivas. Su “patria”, ciertamente, es la que les ofrece mejores dividendos, en el menor tiempo posible y pagando los salarios más bajos o simplemente miserables. A vista y paciencia de gobernantes y legisladores que, como se sabe, se aseguran remuneraciones por encima de las que muchas naciones ricas disponen para sus autoridades.

Aunque somos un país con abundantes recursos naturales y financieros, la subsidiariedad del estado consagrada en la Cons-

titución pinochetista todavía vigente, le impide a los gobiernos a emprender por cuenta del estado, como sucedía antes, entregándole el monopolio de los negocios a las empresas privadas y extranjeras enseñoreadas en todo nuestro territorio. De allí que muchos piensen que la primera y principal de las reformas debió ser el reemplazo en la actual Carta Magna que, como hemos podido comprobar, consagra el modelo neoliberal, la interdicción del Estado, la concentración de la riqueza y la supresión de los derechos laborales y sindicales. Además de tolerar otros despropósitos como la apropiación indebida de las cotizaciones previsionales de parte de las AFPs, los abusos constantes de las isapres y el afán de lucro en actividades como la educación, objetivo que para las efectivas democracias constituye un derecho y no una oportunidad de negocio para los especuladores.

Ante la desaceleración económica, la pérdida de empleo y el deteriorado poder adquisitivo de sueldos y pensiones, además de las malas prácticas, evasiones y colusiones del gran empresariado, es que la política debiera emprender un cambio constitucional que le recupere al Fisco su poder de iniciativa y la posibilidad, francamente, de reeditar aquel tiempo en que las principales empresas del país eran fomentadas al abrigo del Estado, hasta que la Dictadura las expropió y repartió entre sus más inescrupulosos partidarios y cómplices.

El ultra capitalismo que todavía domina nuestras decisiones económicas (e impide una justa distribución del ingreso) verdaderamente contrasta con la situación de otros países donde los medios de producción en gran parte son de propiedad fiscal, como ha quedado recientemente acreditado por el caso de Francia, donde las empresas en más de un 50 por ciento pertenecen a Estado. Especialmente si son estratégicas, como el transporte público y los suministros eléctricos. Tal cual las principales universidades, por ejemplo.

Todos sabemos que son millonarias las reservas económicas del país empozadas en la banca extranjera y que, si fueran repatriadas, podrían volcarse a nuestra producción, diversificación industrial cuanto a procurar empleos mejor remunerados. Tal como entendemos que, si nuestros gobernantes asumieran un mínimo de coraje y justicia, enormes recursos destinados hoy a las Fuerzas Armadas y a la insensata carrera armamentista podrían incrementar significativamente la inversión, así como financiar íntegramente la educación y la salud.

Expropiarle a los Fondos de Pensiones todo lo mal habido o, en subsidio, restringirles severamente sus abusivas utilidades actuales, desde luego nos dotarían, también, de recursos más que suficientes para mejorar el estándar de vida de los trabajadores y pensionados. Así como para sostener líneas crediticias que fomenten el emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas que son, como se sabe, las que más procuran trabajo en nuestro país.

Claro; todo esto pasa por hacer limpieza en la actividad política sometida por el cohecho de las grandes empresas, lo que tanto ha impedido la libre determinación de nuestros sucesivos gobiernos y bancadas parlamentarias. Maniatados e interdictos luego de ser sobornados por los poderosos empresarios, como por las multinacionales que se han apropiado de nuestros recursos mineros, pesqueros y forestales, entre otros. Entidades que, para colmo, venían practicando el fraude tributario de la mano de los candidatos, partidos, jueces y hasta superintendentes de la administración pública. Amparados todavía por una blanda legislación que facilita la práctica de los juicios abreviados, soslaya las penas carcelarias para los poderosos y se conforma con multar a los delincuentes de cuello y corbata con cifras muy por debajo de lo robado al bolsillo de todos los consumidores, como a las arcas fiscales.

La crisis económica que nos amenaza ojalá no siga sirviendo de excusa para continuar constriñendo el salario, postergando las reformas laborales y renunciando a los compromisos asumidos respecto de la educación gratuita y de calidad para todos. Que no sirva, tampoco, de justificación a esos poderosos medios de comunicación que tanto se hacen cómplices de la desigualdad social en nuestro país. Por el contrario, ante cifras como las que comentamos, los chilenos y nuestras organizaciones debemos tomar conciencia de la necesidad de remecer todo el andamiaje institucional vigente, partiendo por reemplazar la Constitución, como disponiéndose a impedir la impunidad que algunos propician después de tantos años que han conculcado los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Distraídos, por supuesto, por la política cupular y su voraz corrupción.

La voltereta de Ricardo Lagos

Resulta sorprendente comprobar el fluido acceso que tienen los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera a los más poderosos medios de comunicación. Cualquier cosa que digan o hagan los cautiva e inmediatamente los induce a catapultarlos como aspirantes a La Moneda. La situación más insólita se ha producido recién, cuando Lagos ha salido a decir que estamos viendo la peor crisis política e institucional, advertencia que hasta hace algún tiempo lo escandalizaba y lo llevaba a proclamar que vivíamos en un verdadero “estado de derecho” donde las “instituciones realmente funcionan”.

Somos muchos los que hace tiempo sostenemos la existencia de esta profunda crisis, pero basta que lo diga él para que, incluso sus adversarios, salgan a celebrarlo y hasta reconocerle condiciones de estadista, solamente por aseverar lo que ya es obvio en nuestro país. Pocos se dan cuenta, sin embargo, que este giro en 180 grados de Ricardo Lagos está marcado por el más ramplón oportunismo; que lo que dice ahora no tiene más intención que sintonizar con lo que piensa hace tiempo la amplia mayoría del país. Aunque a lo dicho por él debemos atribuirse, esta vez, una condena tajante al actual gobierno de Michelle Bachelet.

Por algo es que estas declaraciones han caído tan mal en La Moneda, justamente cuando la Presidenta se encuentra otra vez en el extranjero. Ciertamente, no puede ser nada grato para los moradores de nuestro Palacio Presidencial que se les enrostre esta profunda crisis que, sin duda, sindicada como responsables principales a quienes nos gobiernan o ejercen como legisladores y cancheros de la Constitución y las leyes heredadas de la Dictadura. Las que en su hora, como jefes de estado, tanto Lagos como Piñera verdaderamente sacralizaron.

En una manifestación impresionante de las prácticas cupulares que caracterizan nuestra política, como de la avidez de tantos personajes por aferrarse al poder y a sus granjerías, inmediatamente salieron algunos a proclamar a Lagos como el candidato Presidencial del oficialismo y, por consecuencia, a Piñera como el de la Derecha. Hubo uno entusiasta político que incluso señaló que ya todo quedaba consumado después de esta voltereta laguista: el ex Presidente, dijo, ya tiene el apoyo del PPD y ahora recibe el de la Democracia Cristiana, por lo que ahora solo le quedaría imponerse a la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, para ser proclamado definitivamente por la Nueva Mayoría.

Fue tanto el entusiasmo que provocó esta sentencia de Lagos que muchos se olvidaron de la promesa de elecciones primarias, o de considerar la opinión de los otros partidos del oficialismo que, al menos en lo que toca a comunistas, la idea de que Lagos vuelva a La Moneda es visto con mucho desagrado por varios de sus máximos dirigentes. Ni siquiera los resultados de las últimas encuestas (en que Lagos aparece por debajo de la senadora Allende y de otros políticos) fueron considerados por estos entusiastas aduladores que, sin duda, buscan ubicarse oportunamente al lado de Lagos por si le resultara proclamarse candidato o, después, reelegirse.

Tampoco se ha tenido en cuenta en este delirio las potentes objeciones que se le han hecho en estos meses a su anterior

gobierno. El de haber sido el autor de despenalizar con cárcel a los empresarios que se coluden para asaltar el bolsillo de los consumidores: El haberle puesto su rúbrica, solo con algunos mínimos retoques, a la Constitución de 1980. El haber consentido con operaciones escandalosas y fraudulentas como las del Caso MOP Gate, por el que ya terminaron condenados algunos de sus más cercanos colaboradores. Por el hecho de haber implementado el desastroso Transantiago y la pesadilla que todavía significa a millones de chilenos su diario y oneroso transporte. El haber dejado un país más desigual que antes, es decir, en que creciera la brecha entre el ingreso de ricos y pobres. Por ser el autor del crédito con aval del Estado, que significara un agravio inconmensurable a los padres y apoderados, como un lucrativo negocio para los bancos. El haber sido, también, el primer presidente latinoamericano en aprobar un golpe de estado frustrado en Venezuela y otros despropósitos que no tendríamos espacio en consignar aquí.

¡Realmente es increíble lo frágil que puede ser la memoria de algunos ávidos políticos y operadores, cuanto de algunos periodistas y medios de prensa! Sin embargo, es para alegrarse con esta saludable decantación de los hechos; que el país pueda comprobar que cuando Lagos habla no es que esté preocupado del interés nacional, sino calculando la posibilidad de repetirse el plato presidencial. Como en la certeza de que a su edad todavía es posible volver a gobernar, cuando en Perú, por ejemplo, acaba de asumir un mandatario todavía más añoso que él.

Me gusta que Lagos transparente sus ganas de cruzarse nuevamente la banda presidencial, así sea ninguneando al gobierno de Michelle Bachelet, a quien todavía le restarían dos años de ejercicio, aunque el mismo Lagos piense que con tal crisis institucional y política es difícil que nuestra convivencia no se quiebre antes de un año y medio...

¿Es que acaso Lagos está abogando también porque la actual Mandataria renuncie y le despeje el camino a La Moneda antes de lo previsto por la Constitución que nos rige? ¿Tanta es su ansiedad? Y ¿es tanta la falta de lealtad de los partidos y dirigentes de la Nueva Mayoría que estarían dispuestos a adelantar el proceso electoral y mediático de retorno a Lagos a La Moneda? Insólito, ¿no? Aunque ya sabemos que no hay ya nada que pueda sorprendernos tanto en nuestro país.

Como tampoco puede ser tan extraño que desde la propia derecha se vea con simpatía este intento de Lagos por reposicionarse. Cómo quisieran los grandes empresarios y políticos de derecha que el escenario electoral de acotara a sus dos más directos expresidentes: al que hizo el mejor gobierno de la derecha (según señalara el ex senador socialista Carlos Altamirano) y al candidato empresario, cuya retahíla de escándalos hasta podría superar a los del propio Lagos. Cuando destacadas figuras de su gobierno están ahora formalizados por la justicia por delitos de cohecho, fraude fiscal y otros. Cuando él mismo se hiciera espacio en su carrera por convertirse en un multimillonario, mediante sus propios atentados a la probidad y las impunidades que se agenció en los tribunales.

¡Qué bueno que todo decante y se evidencie! Tal vez con ello los autodenominados partidos y movimientos de izquierda se den cuenta que tienen una oportunidad histórica de construir una alternativa política que represente el inmenso malestar social que manifiestan los chilenos de todo el país. Una alternativa que realmente se proponga hacer justicia social, acometer la reforma del estado neoliberal, redistribuir el presupuesto nacional cuanto el ingreso de los trabajadores. Imponer equidad entre los pensionados, asegurar realmente educación pública de calidad, frenar el desmedido gasto militar e imponer la probidad y decencia entre los gobernantes y legisladores. Para terminar, también, con los

abusos de las isapres y la impunidad de los delincuentes de “cuello y corbata” tan protegidos por los gobiernos de Lagos y Piñera, como por la actual administración. Así como esclarecer definitivamente los crímenes de la Dictadura ocultados sistemáticamente por la posdictadura y abrir los archivos del horror sufrido por los torturados y presos políticos.

En la idea, además, de volver a hermanarnos con nuestros países vecinos. Recuperar las empresas privatizadas a precio vil por Pinochet y sus herederos en La Moneda. Ponerle término a ese terrible cerrojo impuesto por el descarado axioma de la subsidiariedad del Estado: un dislate consagrado constitucionalmente y que le prohíbe al Fisco intervenir en la economía, tener iniciativa en el emprendimiento y afanarse por recuperar los derechos laborales y sindicales conculcados por la Dictadura y estos 26 años de fraudulento ejercicio ciudadano. Donde los que se abstienen de votar son amplia mayoría y, en realidad, carecemos de un sufragio universal “libre e informado”. Menos, todavía, la diversidad informativa que debe manifestarse en las democracias serias.

La triste degradación de la Democracia Cristiana

Ya se sabe que el Partido Demócrata Cristiano nunca podrá sacudirse de su postura oficial frente al Golpe Militar de 1973, de la precaria justificación que hicieron sus principales dirigentes respecto de la asonada golpista, como de su pasividad frente a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los militares. Entrevistas y declaraciones de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei Montalva hasta varios meses después de aquel fatídico 11 de septiembre demostraron su complicidad con el movimiento sedicioso y la forma en que justificaron el “pronunciamiento castrense” frente a un mundo realmente atónito por todo lo que sucedía en Chile.

A la propia Internacional Demócrata Cristiana, al pontífice romano y a otros importantes referentes de la época les costó mucho entender la postura de los falangistas chilenos. Más todavía, cuando importantes figuras de esta colectividad habían repudiado el Golpe desde un primer instante, y dirigentes de la talla de un Bernardo Leighton, Radomiro Tomic y otros prefirieron el exilio voluntario que permanecer en Chile con los partidos políticos disueltos y con los medios de comunicación intervenidos.

Sin embargo, es indudable que los demócrata cristianos partidarios del Golpe, después de algunos meses, entendieron su enor-

me error y paulatinamente fueron asumiendo una actitud disidente. Al grado que ellos mismos quedarán, después, en la mejor posición para encarar al Dictador y liderar la oposición con el apoyo de la izquierda y de los partidos o movimientos políticos y sociales una transición “tolerable” por el régimen cívico militar y los Estados Unidos. Potencia, esta, que había promovido el Golpe, alentado la criminal represión y finalmente se empeñara en la búsqueda de una salida política e institucional que, por supuesto, no desbaratara la “obra de la Dictadura” y garantizara fehacientemente que las expresiones marxistas no llegaran al poder.

Hay que admitir que al margen de la actitud de su última directiva y de otros personajes, más temprano que tarde, la base demócrata cristiana y sus militantes más consecuentes asumieron una actitud de lucha contra la Dictadura y un espíritu unitario con los movimientos juveniles, poblaciones y las organizaciones de los DDHH. Connotados abogados DC se destacaron en la defensa de los perseguidos, mientras que en las federaciones de estudiantes y en las organizaciones sindicales y gremiales, activos militantes y simpatizantes de este Partido jugaron un papel fundamental en la protesta y denuncia de las aberraciones de Pinochet y sus secuaces. Quizás la principal muestra de aquella recapacitación demócrata cristiana fuera el discurso de Frei Montalva en el teatro Caupolicán, cuando abogara por una Asamblea Constituyente. Posición que, después, lo llevaría a compartir el mismo trágico destino de Salvador Allende.

No cabe duda que con los años, lo que prevaleció como expresión política de este Partido fue su franco compromiso con la recuperación democrática, la condena al horror pinochetista y su resuelta y leal actitud por consolidar la más amplia unidad con los partidos y movimientos de izquierda. Creemos que en esta actitud lo que gravitó fue el histórico compromiso de esta colectividad con la Revolución en Libertad, el programa de Tomic y

la adhesión que sus militantes brindaban a la llamada Doctrina Social de la Iglesia. Así como el ejemplar testimonio de varios pastores cristianos en la defensa de los oprimidos, así como la valorización que el mundo en general hacía de la lucha democrática y antidictatorial.

Solo cuando los viejos dirigentes de este Partido recuperaron el control del mismo, es que la Democracia Cristiana fue desahuciendo la unidad política y social del pueblo, lo que coincide con los ingentes recursos ofrecidos por los Estados Unidos a la oposición chilena, siempre y cuando se excluyera de cualquier alianza o salida política al Partido Comunista, como a otras expresiones más radicales. De esta forma, la consolidación de la Alianza Democrática solo con socialistas “renovados”, socialdemócratas, pepedés y otras expresiones menores, fue el prelude de la Concertación de partidos que se hiciera cargo de suceder a Pinochet, pero acatando su legado institucional, su modelo económico social neoliberal y, en un comienzo, dispuesta a hacer justicia “solo en la medida de lo posible”.

Desde el primer gobierno concertacionista, entonces, es que la Democracia Cristiana, socialistas y otros empezaron a desperfilarse ideológicamente, al extremo que hoy –después de 26 años- rige la Constitución de 1980 solo con algunos retoques, tal cual el modelo ultracapitalista que se expresa tan contundentemente en nuestra profunda brecha de desigualdad social, la continuidad de las AFPs, las restricciones sindicales y laborales y otros disparates que ahora logran generalizar el descontento nacional.

Quizás sea por el “peso de la historia” que, dentro del oficialismo, la Democracia Cristiana constantemente ha debido soportar el desdén de sus aliados en el gobierno y el Congreso Nacional, cuando en realidad muchas veces es en los socialistas o figuras del PPD donde es posible descubrir las peores defecciones ideológicas. No hay duda que en el encantamiento, por ejemplo, con las

ideas neoliberales, son los ex miembros de la Unidad Popular los que parecen más cooptados, mientras que muchos DC se muestran como los más airados frente al sistema previsional que nos rige y la vergüenza del salario mínimo que sigue siendo indigno y poco ético. Es este sentido, hasta los comunistas han aceptado sin mayores remilgos los paupérrimos reajustes salariales de actual gobierno. Y como consta, también, han sido los más rabiosos ex mapucistas los primeros en reciclarse en prósperos administradores empresariales o en altos miembros de los directorios de las sociedades anónimas. Así como las candidaturas de la propia Bachelet, de un postulante socialista al Senado y el propio PPD recibieran descaradas y millonarias erogaciones del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Ello nos lleva a pensar que, salvo en algunos temas considerados “valóricos”, en que el acervo religioso es insoslayable no ha habido diferencias en el proceder de todos los integrantes de la Concertación y hoy de la Nueva Mayoría. Cuando es público y notorio que a nivel de la CUT, de los colegios profesionales y otras entidades civiles el papel de los demócrata cristianos suele ser más rupturista, como en la promoción de algunas reformas económico sociales. Lo que de todas maneras dista mucho de las posiciones que este partido tuvo en el pasado respecto de la educación, el papel rector del Estado, la promoción de los derechos sindicales y el desarrollo de una economía solidaria. Es decir cuando muchos demócrata cristianos asumían con orgullo, también, ser un partido “revolucionario”.

De esta manera, parece torpe y poco visionario que un puñado de nombres y apellidos de la DC se empeñen tanto en marcar sus diferencias con sus aliados, en un signo elocuente de su deseo de asumir el camino propio y hegemónico, o confluir en una alianza más cómoda con la derecha y los poderosos empresarios. En este sentido, estamos ciertos que este empeño tie-

ne relación con los intereses de algunas familias de este partido con tan sólidos vínculos, por ejemplo, con la industria pesquera, los establecimientos educacionales que lucran, las empresas mineras, algunas clínicas privadas, isapres y otras. Es decir, su proceder daría cuenta más bien de su paulatina corrupción personal, a la que hay que sumarle el subsecuente viraje ideológico. Mientras que el grueso de sus militantes y simpatizantes siguen formando parte de la clase media y de los sectores más pobres del país. Sufriendo los rigores del sistema, muy por el contrario de lo viven sus cabecillas políticos.

Sin embargo, varios intentos desde dentro de la DC por desplazar a su cúpula dirigente y recuperar las ideas de su vanguardista pasado se estrellan con una su poderosa maquinaria que, incluso, no ha trepidado en organizar un fraude como el del “Carmengate” para aferrarse a los cargos directivos del Partido y a los privilegios que les ofrece el poder compartido con sus viejos adversarios políticos.

Los viejos no pueden esperar!

Es muy habitual que quienes son refractarios a los cambios motejen de “extremista” a quienes los patrocinan. Lo prudente sería, para ellos, evitar cualquier transformación que no sea consensuada con quienes justamente se favorecen de las injusticias más fragrantas del sistema que se hace urgente substituir. Quienes históricamente han promovido el golpismo y la violencia fratricida para imponer sus privilegios por sobre los derechos de los demás, hoy en nuestro país vienen de nuevo pregonando el caos ante la posibilidad de una reforma estructural del sistema de pensiones que, como se asume, condena a los millones de trabajadores a recibir un estipendio indigno al momento de jubilarse.

En una manifestación explícita de que su gobierno renunció a las profundas transformaciones prometidas durante su campaña electoral, Michelle Bachelet -más que con sus partidos- se propone culminar sus administración en acuerdo con la derecha, los más poderosos empresarios y, ahora, con la asistencia espiritual de los expresidentes de la república, convertidos en verdaderos oráculos de La Moneda. Pese a que las más descalificadoras expresiones respecto de su gobierno son las que le vienen espetando los ex mandatarios y en circunstancia que estas mismas patronales representan a buena parte de las empresas que ni siquiera

pagan a tiempo las cotizaciones previsionales que les retienen a sus empleados. Práctica que tiene abiertos más de un millón de juicios en los Tribunales.

Al mismo tiempo, es evidente el malestar del Ejecutivo frente a las demandas y movilizaciones populares, así como la inicuca represión policial que descarga contra los estudiantes y las organizaciones de trabajadores, de consumidores, mapuches y de tantos otros chilenos indignados ante la renuencia de las autoridades a escucharlos y activar los cambios más apremiantes para nuestra población. En estos últimos meses, el descontrol y los desaciertos oficiales exhiben muestras patéticas, como aquellos zarpazos intentados recientemente el Ejecutivo contra la libertad de expresión y, recién, con aquel bochornoso despido de la rectora de una universidad pública nombrada hace menos de un año por la propia Jefa de Estado. Simplemente por sentir con el Gobierno.

Para los retardatarios, son siempre “extremistas” los que abogan por cualquier cambio estructural como los demandados en materia de educación, salud y del mismo sistema de pensiones. Las enormes manifestaciones sociales en favor de la instrucción pública y su gratuidad vemos que se frustran ahora en iniciativas cada vez más tibias y sin la convicción de comprometer verdaderamente al Estado en esta importante tarea. En una oscura connivencia, por lo demás, con los poderosos administradores de colegios y universidades privadas que siguen y seguirán lucrando de este derecho humano tan fundamental.

Lo mismo que ocurre con el sistema de las administradoras privada de salud (isapres), estructura que, como ya se nos ha advertido, no se tocará durante el actual gobierno, con el agravante de que tampoco La Moneda cumplirá con las construcción de hospitales y policlínicos públicos comprometidos por el programa presidencial de Michelle Bachelet, a fin de prestarle atención

a la mayoría de los habitantes del país, a quienes resulta imposible afiliarse al sistema privado.

Ya sabemos, por cierto, cómo se ha desbaratado la posibilidad de una asamblea constituyente y una nueva Carta Fundamental que ponga término al régimen pinochetista que todavía nos rige y que, al parecer, terminó por seducir a quienes se han rotado y profitado en la política durante los 24 años de posdictadura. Desde la misma Moneda se ideó (como ahora se constata) toda una impostura para hacerle creer al país que iniciábamos un “proceso constituyente” que ahora culmina sin más en la decisión gubernamental de endosarle a un nuevo gobierno esta transformación del Estado tan largamente prometida. Todo indica que seguirá prevaleciendo, entonces, todo un andamiaje institucional ilegítimo en su origen y contenido mediante el cual el Tribunal Constitucional y los quórum legislativos obstruyen sistemáticamente toda posibilidad de consolidar una democracia mínimamente solvente o representativa. Al tiempo que los políticos se corrompen en el ejercicio de sus cargos, gracias a las leyes y resquicios de impunidad, como en la ausencia de una diversidad mediática que garantice el voto libre e informado.

Contundentes informes demuestran la precariedad de las pensiones que han empezado a pagar las AFP a la inmensa mayoría de los jubilados que no pertenecen a las cajas de previsión de las FFAA y las policías. A quienes, como sabemos, la Dictadura y los gobiernos que le sucedieron salvaron de un sistema que, por supuesto, sería un pingüe negocio para las 10 grandes empresas que finalmente siguen recaudando y lucrando de las cotizaciones laborales. Todo un sistema previsional que, junto con sacralizar la desigualdad ante la Ley, condena hoy a la pobreza o indigencia a los chilenos de la Tercera Edad y los obliga a trabajar hasta el final de sus días por obtener un ingreso de subsistencia.

El solo promedio de lo que actualmente reciben los pensionados (menos del salario mínimo) debiera prender las alarmas de la política para hacer frente a una realidad vergonzante, que al menos debiera llevar a las autoridades a intervenir las AFP, frenar sus abusivas utilidades, nivelar las pensiones de civiles y uniformados y recurrir, con urgencia, a fondos del presupuesto fiscal y a los que se le impongan como tributos al sector patronal. Sin embargo, a lo único que ha atinado la Presidenta es a convocar a una de sus consabidas comisiones o mesas de trabajo que solo le sirven para dilatar las soluciones, advirtiéndonos en este caso que el sistema previsional seguirá tal cual, salvo con algunas modificaciones que se convendrían, claro, con las cúpulas empresariales y los partidos políticos. Siempre, por supuesto, de espaldas al pueblo y, en este caso, de la organización **NO + AFP** que ha convocado a las calles de todo Chile a cientos de miles de nuevos indignados. En la desvergüenza de inventar como paliativo, además, la creación de una APF estatal regida por las mismas normas de las entidades privadas y cuya recaudación podría constituirse en un nuevo coto de caza de los ávidos políticos de turno.

“Los pobres no pueden esperar” repiten una y otra vez los referentes morales del mundo, pero a ello debiéramos agregar que menos espera es la que pueden soportar, todavía, los ancianos, los que ya han trabajado toda una vida. Pero para los que gobiernan, para los que ya se hicieron ricos, como para sus cómplices y encubridores, por supuesto parece “extremista” exigir una reforma pronta y contundente al sistema previsional. Así como hasta “terrorista” podría parecerles que, además de abogar por la demolición del sistema, se exija desde ya incrementar las pensiones que reciben tantos chilenos. Sin transferirle, por supuesto, esta decisión a un nuevo gobierno o legislatura.

Es evidente que lo que menos tiene la mayoría de nuestros políticos, sin embargo, es sensibilidad social, ética, liderazgo y

coraje. Por lo mismo que estos atributos, de la mano del pueblo y de sus organizaciones deben hacerse un deber irrumpir en protestas y movilizaciones que impidan lo que ya se gesta en las cúpulas gobernantes. Para que al menos este cometido sea logrado entre todos los que ya desestimaron, y ni un pensionado más deba someterse a la ignominia de culminar su vida laboral con una pensión de hambre, como las estadísticas lo confirman dramáticamente.

Sin embargo, parece evidente que el actual gobierno ya no tiene fuerza ni para operar una retroexcavadora que, tal como su nombre lo indica, también puede operar hacia atrás o en cualquier sentido. Por lo que se haría necesario recurrir a otros arietes o buldóceres que encaren más bien de frente los obstáculos puestos a las transformaciones. Aunque esta idea pueda parecerles más extremista, todavía, a quienes desean preservar lo heredado de la Dictadura y tan fielmente consolidado por los gobiernos posteriores. Como este escandaloso sistema previsional que tanto ha contribuido a que algunos se hagan cada vez más ricos, no solo con el trabajo de los chilenos, sino con la apropiación y especulación de sus fondos para un digno retiro.

A orillas del descalabro institucional

No se necesita una encuesta para darnos cuenta de que estamos viviendo uno de los momentos más críticos de nuestra historia y convivencia nacional. No es solo la falta de credibilidad de toda la llamada clase política, sino la profunda desconfianza que existe respecto de nuestras instituciones públicas: en el Gobierno, en el parlamento y, como siempre, en los administradores de justicia. También en el desempeño de las policías, como en todo un sistema económico que ha consagrado la más pronunciada inequidad entre los chilenos.

Los niveles de desaprobación de la Presidenta de la República han escalado a una situación bochornosa, cuando ya en América Latina es la peor evaluada por su población, en un país que está tan acostumbrado a ufanarse ante el mundo y sus vecinos. Mientras que a nuestros diputados y senadores todos los días se le comprueban actos de corrupción que señalan su concomitancia con los más poderosos empresarios y cuando son, entre los legisladores de todo el mundo, los que se asignan los más elevados estipendios.

La confianza que empezaba a lograr el nuevo Ministerio Público para indagar sobre los delitos y formalizar a sus infractores fue recién embadurnada por la decisión del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, de remover a quien investigaba uno de los más importantes casos de soborno a nuestros legisladores, en un claro intento de amedrentar a todos los persecutores que investigan estos episodios

de corrupción. Así como la propia Jefa de Estado, meses atrás, las emprendiera con una querrela criminal contra una publicación que daba cuenta del Caso Caval que involucra a parientes muy cercanos suyos, con lo cual se quiso amedrentar al conjunto de los periodistas que a diario vienen destapando una realidad ya ineludible. Es decir que somos un país ya igualado con los peores del mundo en cuanto a la falta de probidad de sus gobernantes.

No son necesarios los sondeos de opinión para que los chilenos comprobemos la irritante injusticia que permanece en nuestro sistema previsional, cuando los jubilados de las Fuerzas Armadas, gendarmes y policías reciben pensiones de lujo comparadas con las de la inmensa mayoría de los trabajadores acogidos a retiro. Cuando, además, las cotizaciones que recaudan los dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) aportan a uno de los negocios más lucrativos del país. Más allá de que en materia de sueldos y salarios nos encontramos entre los que exhiben las brechas más pronunciadas en los ingresos de ricos y pobres.

Por lo demás, ya sabemos del descalabro que existe en materia de educación y salud, cuando se acepta que quienes pueden pagar por sus servicios tengan acceso a establecimientos de alto nivel, mientras que las escuelas y hospitales públicos aumentan su precariedad. Cuando los niños sin hogar mueren y son abusados por centenares en manos del Servicio Nacional de Menores (Sename) administrado por el Estado mediante generosas concesiones a instituciones privadas que lucran, también, con la existencia de estos desvalidos.

El fracaso rotundo de los sistemas de locomoción colectiva, el aumento explosivo de la delincuencia y la inseguridad, los horrores que se perpetran contra nuestra naturaleza y recursos más estratégicos dan cuenta, asimismo, de la codicia de los grandes empresarios abrigados por el sistema, las legislaciones tramposas y la impunidad. Cuando se descubre que la “libre competencia” francamente no existe a la hora en que las castas empresariales fijan sus precios y obligan a los consumidores chilenos a pagar

cifras desmedidas por sus productos más esenciales. Cuando por decisión de un gobierno “democrático” se le suprimieran las penas de cárcel a quienes se coludieran con tal propósito. Y el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, se erige de tapadera de los grandes delitos de evasión y elusión tributaria, cuando estos son perpetrados por las empresas que inyectan la política.

Toda nuestra irritante realidad es la que estalla por fin en las calles y en el estado de descontento nacional. Ello explica que la actual mandataria tenga menos popularidad, incluso, que la que retuvo el propio Pinochet en sus peores momentos; en que hasta los políticos y dirigentes sindicales autoproclamados de “izquierda” son obligados a abandonar las manifestaciones populares. Cuando lo que se viene imponiendo en los comicios es la abstención masiva de los potenciales sufragantes.

Debido todo, por supuesto, a que los partidos políticos han pasado a ser las instituciones más desprestigiadas del país por su falta de propuesta y consecuencia. Ansiosos solo en fabricar candidatos para ocupar los cargos mejores remunerados del Estado, donde un curioso “sistema de reparto” determina los ministros de estado, subsecretarios y jefes de servicios. Para nada su capacidad o solvencia moral. Colectividades a las que les quedan solo algunos puñados de militantes que visualizan a éstas como agencias de empleo más que referentes ideológicos.

Es difícil ya llevar una cuenta de todos los políticos ofertados como candidatos presidenciales. Basta que cualquiera discurra en una idea, por baladí que sea, para que inmediatamente se asuma como tal, quizás en la certeza de que después del actual gobierno ya nada podrá parecernos peor, como tampoco podría resultarnos más infausto que a La Moneda retornaran el expresidentes Lagos o Piñera, de tan triste memoria ciudadana. Pero que podrían tener alguna opción si quienes se abstengan de votar escalaran al 55 o al 60 por ciento de la ciudadanía como se prevé y ya ocurriera, por lo demás, en las últimas elecciones para determinar la más alta investidura del país.

En la derecha y en el oficialismo, sin duda, hay muchos más candidatos presidenciales que partidos. Algo que también ocurre en todo el resto del espectro o esperpento de referentes políticos, donde incluso es posible descubrir presidenciales que ya se anuncian para los comicios que vengan después de los del próximo año. Contundentes pruebas, por cierto, de que al interior de los partidos ya no queda coherencia ni identidad ideológica o programática, sino puro caudillismo y afán de lucro electoral.

Ante el descalabro político e institucional, cómo quisiéramos que existieran algunos actos de nobleza y patriotismo. Que los peores evaluados pusieran al menos sus cargos a disposición y se auto disolvieran, además, algunos referentes partidistas, sindicales y gremiales completamente desacreditados y sin respaldo social significativo. Sin embargo, lo que se nos ha ofrecido este fin de semana es una nueva candidatura presidencial: esto es la de José Miguel Insulza que en una entrevista a El Mercurio, por supuesto, se nos ofrece como una posibilidad que haga “una diferencia” con la de los demás candidatos. Como si fuera un extraterrestre que viene llegando recién al país, cuando debe ser uno de los políticos que más larga y estrechamente ha estado vinculado al poder, a los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Salvo durante ese paréntesis en que se desempeñara en la Organización de Estados Americanos, la más vilipendiada de las instituciones regionales.

Sin la decisión de que dejen la política quienes se comprobaron incapaces de consolidar democracia, justicia social y probidad, lo que se avecina es el derrumbe y quiebre, el escalamiento de la indignación y el conflicto social. Pero lo que se aprecia, desgraciadamente, es la decisión de la Presidenta de aferrarse a sus mismas prácticas, resistirse a desahuciar a sus ineptos operadores y prolongar sus devaneos con las entidades patronales. Creando más y más comisiones especiales que lo único que logran es postergar las soluciones y seguir colmando a la población.

La culpa es de los “chanchos”

Se ha destacado mucho el hecho de que cada ley que se aprueba en los últimos tiempos no deja contentos ni al gobierno ni a la derecha, como tampoco a los sectores sociales involucrados. La promulgación de la Reforma Laboral fue una expresión patética de esto por la frustración reconocida por la propia jefa de Estado, el desacuerdo de la derecha y del empresariado, además del malestar del mundo del trabajo. Más de un año de debates en el Congreso Nacional para que lo acordado por la mayoría parlamentaria fuera desbaratado, finalmente, por el Tribunal Constitucional; algo que ocurre solamente en una “democracia” más de veintiséis años tutelada por la Constitución de Pinochet, por sus leyes de amarre y por el cogobierno de un duopolio político –derecha y oficialismo– que tienen en común ser refractarios a los cambios más profundos y demandados por los chilenos.

Tendremos ahora una institucionalidad laboral que no reconoce la titularidad sindical, cohibe la negociación colectiva e impide la acción organizada de los trabajadores en las llamadas empresas “estratégicas” que son, dicho sea de paso, las que la Dictadura le arrebató al Estado para cederlas a sus empresarios abyectos. Por la ambigüedad de una Ley se augura por esto que los próximos conflictos laborales vayan a terminar por judicializarse,

resolverse a medias o con muchas dilaciones y contratiempos en los tribunales de Justicia.

Ciertamente que en cuanto a la reforma tributaria, como en la educación y otras materias viene resultando siempre lo mismo. Es decir, un descontento generalizado. Esto explica que sea el conjunto de la política el desacreditado y que la gran mayoría de los ciudadanos ya no tenga interés en participar en las elecciones. Pero, además, de los principales actores políticos y empresariales, lo cierto es que ha colaborado mucho a este desencanto social la bochornosa realidad de nuestras organizaciones laborales, el enquistamiento en ellas de operadores políticos postrados ante los gobiernos de turno y envueltos, también, en toda suerte de sospechas respecto de su probidad.

Prueba de ello son las últimas elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), descalificadas desde el interior de los sindicatos que agrupa por haber repetido un proceso espurio, marcado por las irregularidades y dispuesto a perpetuar a las mismas cúpulas dirigentes que cumplen largas décadas en sus cargos. Como las de la ANEF y otros referentes encabezados por sus añosos caudillos que, como se sabe, terminan siempre anteponiendo su militancia a los intereses de sus afiliados. Situación muy similar a la de un conjunto de instancias gremiales que, en vez de velar por el libre ejercicio de sus profesiones o actividades buscan aferrarse a sus “cuotas de poder” dejarse seducir por la clase política y hasta por las cúpulas empresariales.

Nada sería tan grave si en esta actitud los dirigentes sindicales y gremiales defendieran ideas y fueran fieles a las convicciones que proclaman. Se trata, muy por el contrario, de que lo único que los motiva es permanecer en sus puestos, gozar de sus fueros y, muchas veces, recibir las dádivas de los gobernantes. Para muestra, años atrás, el propio Colegio de Periodistas recibía un estipendio regular de la Secretaría General de Gobierno para su

funcionamiento, lo que ciertamente impidió que su directiva defendiera al gremio de los despropósitos comunicacionales de los gobiernos de la Concertación.

Es curioso que hasta los partidos políticos se hayan rendido a democratizar sus procedimientos internos, a practicar primarias y elecciones internas en que cada militante represente un voto, cuanto a transparentar sus cuentas, sus ingresos y gastos electorales. Sin embargo, en lo que respecta a federaciones y confederaciones sindicales lo que impera todavía son los turbios manejos que saltan de una elección como el que hemos visto recién en la CUT, al grado que después de cuatro o cinco días aún no se conocían sus escrutinios ni resultados.

Ya se sabe que ministros y parlamentarios están obligados, ahora, a reconocer su situación patrimonial antes y después de desempeñar sus cargos. Pero nada similar rige, curiosamente, para estos perennes “servidores” sindicales o gremiales, aunque se sabe que en varios casos podría descubrirseles enriquecimiento ilícito, la recepción de sobornos, como la práctica del nepotismo, esto es en la contratación de familiares y amigos en la administración de sus organizaciones.

Es un hecho de la causa que quienes nos gobiernan conocen perfectamente la precariedad ética de muchos de estos representantes de la sociedad civil, lo que ciertamente les sirve para hacernos víctimas de sus aberrantes políticas previsionales, de sus vergonzosos reajustes salariales y, en definitiva, del imperio del modelo económico y social vigente, sacralizado por los gobiernos que sucedieron al de Pinochet. Y que hoy hace crisis en las pensiones que pagan las AFP, el desmoronamiento del sistema de salud pública, en el grosero lucro que ejercen las universidades, como en fracasos monumentales como el Transantiago.

Como se sabe, primero se hizo necesario el Plan Laboral de la Dictadura para luego materializar el sistema previsional, la pri-

vatización de la educación y tantos otros horrores neocapitalistas que no hubieran sido posibles si hubiésemos mantenido una organización sindical y gremial fuerte, consciente de sus deberes y dispuesta a encarar a las autoridades. Si no se hubiera desactivado desde La Moneda, después de 1973 y de 1990, a las organizaciones sociales, incluidas las señaladas, además de las poblacionales, juveniles y de Derechos Humanos. Si el gobierno de Patricio Aylwin y sus sucesores no hubiesen llevado a cabo el homicidio programado de los medios de comunicación democráticos y libres, para terminar en connivencia con aquellos diarios, revistas y canales de televisión que habían sido cómplices del Quiebre Institucional y de los horrores seguidos.

En todo un proceso de complicidades que ha derivado, consecuentemente, en la corrupción generalizada, no solo de la política, sino de las grandes empresas e instancias sindicales. Bajo el abrigo, siempre, de las Fuerzas Armadas que, en vez de conspirar y matar en este tiempo, se han dedicado a disfrutar de sus presupuestos multimillonarios, de sus onerosos y fraticidas juguetes de guerra, cuanto de una repugnante Ley Reservada del Cobre que se lleva en su beneficio el 10 por ciento de las ventas de nuestra minera principal, incluso en momentos de zozobra de esta empresa, a consecuencia del bajo precio del metal en el mercado mundial. Con lo que nuestros “valientes soldados” no solo demuestran su inconsistencia moral, su impostura, sino su falso amor por la Patria y nuestra condición republicana. Aunque ya sabemos que hoy los militares solo ofician de gendarmes de las inversiones extranjeras empoderadas en toda nuestra geografía. Gracias, por supuesto, a la cobardía o complicidad de los gobiernos de turno y a la forma en que sus ministros de defensa, como se ha hecho evidente, terminan rendidos a sus lisonjas.

Porque la culpa es de los chanchos, como también de los que le dan afrecho.

El candidato de la izquierda

En el fracaso y descrédito político de la Nueva Mayoría y de la derecha, la izquierda enfrenta hoy la mejor oportunidad para irrumpir con fuerza en el escenario electoral y constituirse en una sólida alternativa presidencial. Si no fuera por su fraccionamiento en tantos partidos, movimientos y referentes, como por la letal megalomanía de quienes asumen las banderas del progresismo, hace tiempo que podría estar posicionada como una fuerza capaz de desplazar a las se han enseñoreado durante toda la posdictadura y cuyas diferencias ideológicas cuesta ya mucho distinguir.

Hay quienes están muy confiados en el acuerdo que algunos partidos y grupos vanguardistas han consolidado para encarar los comicios municipales. Sin embargo, lo cierto es que este loable esfuerzo de cuatro o cinco expresiones es muy insatisfactorio todavía, cuando en esta misma competencia electoral es posible observar los más diversos candidatos a alcaldes y concejales de otro buen número de referentes de izquierda desperdigados o celosos de su autonomía. Una profusión que, sin duda, afectará las posibilidades de unos y otros frente a los candidatos de la Nueva Mayoría y de la centro derecha que, pese a todas sus escisiones y reyertas internas, a la hora de las elecciones todavía son capaces de “negociar” sus listas de candidatos y dar la apariencia de unidad.

Sobre todo si a eso le sumamos los recursos económicos con que cuentan y el apoyo de los medios de comunicación que controlan.

Es de esperar que este proceso electoral entregue resultados auspiciosos para los postulantes de izquierda a los municipios, toda vez que entre ellos hay quienes son visualizados muy positivamente en sus respectivas comunas, a consecuencia muchas veces de su personal y abnegado trabajo de base. Pero también quedará demostrado el creciente desinterés que le provoca a la mayoría de los chilenos sufragar en las elecciones, mientras no visualice una alternativa unitaria que se haga cargo de representar los derechos y demandas de la vasta población indignada del país. Asqueada, asimismo, de la corrupción de la llamada clase política y de la atomización del mundo vanguardista.

No se trata, solamente, de que las organizaciones de izquierda confluyan en un referente electoral. A esta altura, más valdría que un conjunto de expresiones se disolvieran y fueran capaces, con generosidad, abrirse a la formación de un único partido o movimiento que los agrupe a todos y que, desde la partida, defina procedimientos democráticos para elegir a sus nuevos representantes. Treinta o más años de un sinnúmero de siglas, más que de convicciones distintas, son más que suficientes para entender que ya sería hora de sepultarlas, dada su incapacidad de capturar apoyo y fervor ciudadano. Habría que darle un “funeral de honor” a aquellas denominaciones que en el pasado cumplieron una tarea fundamental en la lucha contra la Dictadura, pero que hoy no sirven para combatir a la nefasta posdictadura y abogar por un cambio revolucionario de nuestro sistema institucional, nuestra economía y organización social. Cuando la inmensa mayoría de los jóvenes de hoy nacieron después del Golpe Militar de 1973 y en el mundo del trabajo surgen organizaciones como *NO+AFP* capaces de convocar a millones de chilenos. Y cuando las bases nada quieren, tampoco, con los podridos referentes sindicales y gremiales, cuyas

cúpulas a lo que más se dedican es a perpetuarse en sus cargos y hacer de comparsa de aquellos revenidos partidos aferrados a las migajas de poder que les ofrecen los gobiernos de turno.

Parece indispensable que en la precipitada carrera por llegar La Moneda (originada fundamentalmente por la pérdida de credibilidad en la actual Jefa de Estado), la izquierda auténtica sea capaz de confluír en una vanguardia como en un líder que sea capaz de reencantar a los pobres y a la clase media, como a todos los discriminados del país. Que pueda marcar diferencia real con las viejas figuras que hoy ofrece el duopolio político cogobernante y que incluso buscan “repetirse el plato” después de sus naufragadas administraciones. En más de 26 años de gobiernos regidos por la Constitución de Pinochet y su modelo neoliberal que ha creado esperpentos como los que se existen en el sistema previsional, la salud y la educación de lucro.

Sin duda que lo necesita la Izquierda son nombres liberados de sospechas, de sectarismos y ambiciones meramente personales y que se demuestren capaces de ungir como su candidato presidencial a quien ofrezca mayores atributos como consecuencia en su trayectoria. Abanderado, por cierto, que, en ningún caso, se derive de las matemáticas siempre presentes en los arreglos cupulares. Una figura moral quien no tenga porqué provenir de la política sino, ojalá del mundo social, o incluso intelectual, pero que demuestre consistencia en sus convicciones. En ningún caso, además, alguien que en victoria o en la derrota esté dispuesto a negociar cuotas de poder con sus adversarios, sino se proponga como tantos y genuinos líderes históricos recorrer el camino propio, asistido nada más que con el pueblo y sus organizaciones para llegar al poder y cumplir con su cometido ético y doctrinario. Lejos de toda la componenda o cálculo personal.

Lo que más tiene la izquierda es ideología y propuesta respecto de su vocación democrática, su compromiso con la igual-

dad social y la defensa de la vida humana, como de nuestro Planeta. Por algo los científicos y pensadores más visionarios del mundo son casi siempre personas de pensamiento progresista. Mientras los que alguna vez se declaraban socialistas y social cristianos terminaran seducidos y postrados ante los intereses y lisonjas de las clases pudientes, de los inversionistas foráneos y el hegemonismo del Imperio.

El agravio de doña Ángela

Al igual que Augusto Pinochet en enero de 1978, la madre de la actual Presidenta de la República expresó que le faltaría “patriotismo” a quienes no apoyan los propósitos y realizaciones del gobierno actual, emulando exactamente lo que en su hora hizo el propio Augusto Pinochet en su gobierno. Como se sabe, el Dictador legó a convocar a un plebiscito, incluso, para dirimir cuántos de nosotros éramos patriotas y estábamos dispuestos a respaldar su gobierno frente a las acusaciones que se le hacían en todo el mundo por sus graves violaciones a los DDHH. Una insólita consulta que concluyó, como se sabe, en que una franca mayoría (más del 70 por ciento) lo respaldó, pero se acreditara un proceso electoral completamente espurio, sin padrón de votantes, sin recuento transparente de los sufragios, emitidos o no, y sin ninguna de las más elementales condiciones democráticas. En una jornada electoral en que se nos presentó una papeleta en que la opción era votar por una bandera de Chile (que lo representaba a él), o marcar la cruz frente a una de color negro, con la cual identificó a sus detractores o traidores a la patria.

Imagino que doña Ángela Jeria no tendrá la pretensión de que se consulte al pueblo mediante un nuevo plebiscito a fin de que resuelva quién es patriota o no en la hora presente, cuando las cifras de todas las encuestas públicas nos señalan que al menos dos tercios de la población reprueba al gobierno de su hija, por lo que,

entonces, tendrían que ponerse el sayo de antipatriotas muchos millones de chilenos. Una amplísima mayoría de la población.

Seguramente, debe ser propio de la forma de ser de los uniformados, como de la familia militar, clasificar a la población civil en uno u otro sentido. Algo que debe derivarse de la rígida disciplina castrense, del ejercicio jerarquizado del mando, de la forma en que las instrucciones de los oficiales superiores se les imponen a sus subordinados. Cuando se sabe que todo lo que decida la oficialidad debe acatarse sin renuencia y discusión previa; cumpliendo todo a fuerza o sometándose a los rebeldes a sanciones muy severas. Otorgándole, incluso, por cierto el estigma de antipatriotas. De la misma forma como se espetara a aquellos militares que después del Golpe resistieron las instrucciones del Tirano y de sus secuaces y llegaron a ser ejecutados. Tal como le aconteciera, sin ir más lejos, al propio general de Aviación Alberto Bachelet.

Claro. Es comprensible que ante el enorme desdén de los santiaguinos al paso silencioso y compungido de la Presidenta de ida y regreso al Tedeum de la Catedral, debe haber sido muy fuerte la desazón de su madre y de los ministros de gobierno, cuando este añoso rito republicano de la historia de Chile siempre fuera masivamente acompañado en su trayecto de cinco o seis cuabras por el centro de Santiago. Cuando, fueran o no partidarios del gobierno de turno, muchísimas personas salían a las calles a observar a sus gobernantes, al famoso automóvil Ford Lincoln regalado por la reina Isabel de Inglaterra, a esos elegantes jamelgos o, simplemente a sorprenderse de los peculiares atuendos de la clase militar. Coloridos uniformes de gala que ya no tienen espacio para que los uniformados se cuelguen más medallas y galardones por sus supuestos méritos o victorias. Todos ahora en tiempos de paz, por supuesto. Aunque también hubo una presea asignada a los que dieron el Golpe de 1973 y bombardearon La Moneda. La que luego tienen guardadas en sus casas, me imagino.

Era cosa de verles los rostros a quienes asistieron a una ceremonia ecuménica en la que siempre llueven, por lo demás, las indirec-

tas y los eufemismos de aquellas consabidas homilías eclesiásticas que, desde hace mucho tiempo, se proponen incomodar a las autoridades. Con, esos sermones que también fueran consideradas como “antipatriotas”, desde que el Cardenal Raúl Silva Henríquez aprovechara regularmente esta ocasión para ponerle año a año su coloradas al Dictador, al tiempo de solidarizar con los pobres y los oprimidos. Como también con los perseguidos políticos.

En este sentido, ya se vio que también en esta oportunidad las iglesias aprovecharon para hacer ácidas críticas e invocaciones, lo que más tarde provocara el sarcasmo del presidente de la Cámara Baja, cuando aludió a que, al igual que la política, las instituciones eclesiásticas también estaban desacreditada en Chile. Aludiendo Osvaldo Andrade, seguramente, a aquellos abusos y actos de corrupción de prelados y sacerdotes que tienen más que ver con sus inclinaciones sexuales que con el dinero o el afán de poder.

Al igual que Pinochet, se equivoca gravemente doña Ángela, al suponer que el patriotismo se ejerce respaldando a las autoridades. Muy por el contrario: ni O’Higgins, ni San Martí ni tantos otros libertadores habrían recibido la distinción de “patriotas”, si no se hubiesen rebelado, justamente, contra la autoridad constituida, además de convocar a los habitantes a constituir república, independencia y soberanía. Aunque también consta, lamentablemente, que un puñado de alienados y fanáticos personajes son capaces todavía se asignarle este atributo a Augusto Pinochet, ampliamente reconocido en el mundo como un criminal y traidor, además de otros contundentes epítetos que tienen relación a su falta de probidad.

De esta forma es que consideramos un verdadero agravio al país la pretensión de la madre de la Presidenta de hacer pasar a la inmensa mayoría del país como antipatriota, por no apoyar al actual gobierno. Un triste desacierto de quien el país siempre ha observado con simpatía pero que ahora llegara a descolocar, incuso, a los más cercanos colaboradores de la Primera Mandataria. Superando en decibeles a los más desafortunados comentarios

efectivamente “patrioteros” que siempre se prodigan durante este mes de fiestas y todo tipo de excesos.

En efecto, y “como no hay mal que por bien no venga”, ¡vaya que podría ser conveniente, que se nos convocara a los ciudadanos (como lo hiciera el Dictador) a que manifestemos nuestra aprobación o repudio al actual Gobierno! Para que se nos consulte, por ejemplo, si queremos o no una Asamblea Constituyente o si nos complace o no el actual sistema previsional o el de las isapres. Si estaríamos o no de acuerdo con derogar la Ley Reservada del Cobre o imponer la ley de aborto terapéutico... Así fuera que el respaldo a la actual Carta Magna y los propósitos de las autoridades estuvieran nuevamente signados con la bandera tricolor y a los disidentes y opositores se nos pusiera una bandera negra. A única condición, si, de que el proceso electoral lo administrara el Servicio electoral y pudieran sufragar nada más que los ciudadanos inscritos en los registros de ciudadanos. Bajo apercibimiento, además, de que este “patriótico” gobierno actual se comprometiera a cumplir con el veredicto ciudadano, a consentir con las demandas populares, así como a cumplir con todas sus promesas electorales.

En tal caso, estamos seguros que, aun resultando derrotada, la Presidenta Bachelet podría ganar reconocimiento en la historia como la mandataria que se atrevió a consultar a la ciudadanía sobre tan importantes disyuntivas nacionales. Instalando, de paso, la práctica del plebiscito en el ejercicio democrático de nuestro país. Pasándole por encima, también, un Parlamento y un Tribunal Constitucional en que los acuerdos se “cocinan” en las casas de los grandes empresarios y hasta son redactados por los altos ejecutivos y los estudios de abogados que éstos mantienen para defenderse de los actos de colusión, de las evasiones tributarias, sobornos y otras habituales prácticas de quienes seguramente son considerados más patriotas que los ciudadanos comunes y corrientes por los moradores de La Moneda. Chilenos de a pie que ciertamente no quisieron acompañar los desplazamientos de la comitiva oficial este último 18 de Septiembre.

El pecado original impune

Las graves violaciones a los Derechos Humanos que siguen descubriéndose constantemente tienen origen en el Golpe Militar de 1973, en el magnicidio presidencial y el quiebre institucional provocado por las Fuerzas Armadas. En la conspiración de las cúpulas militares, que fuera alentada y asistida por el gobierno de los Estados Unidos, con la complicidad de los empresarios más poderosos del país, buena parte de los políticos de derecha e, incluso, de otros connotados dirigentes que posteriormente se hicieron disidentes y recibieron del propio Dictador los símbolos del Poder Ejecutivo. Además de la Constitución Política y la legalidad impuesta por el régimen castrense. Obraron también para ese fatídico 11 de Septiembre el diario El Mercurio y otros medios de comunicación que luego resultarían completamente adictos al régimen dictatorial, e incluso oficiaron como ejecutores intelectuales del horror que se impuso en el país por largos 17 años. Situación que también se encuentra en la impunidad.

Lo que ha escrito la historia es que en los meses anteriores al Golpe la sedición ya se había entronizado en las instituciones armadas, a pesar de los juramentos de lealtad que le expresaban al Presidente Allende. Los altos oficiales preparaban sigilosamente la insurrección, afinando todos sus detalles para que, esta vez, la

traición pudiera prosperar sin demasiados contratiempos y riesgos para sus personas. Apoyados, como ha quedado consignado, por la Operación Unitas y los pilotos de guerra norteamericanos, ya tenían reclutados a quienes se convertirían horas más tarde en los más siniestros violadores de los derechos individuales y colectivos. Como el general Ernesto Baeza que se encargó de escenificar la rendición y el “suicidio” del Jefe de Estado a objeto de restarle mérito a su heroico combate para defender el palacio de gobierno, al mismo tiempo que propagar una versión que ha sido aceptada, desgraciadamente, hasta por los propios familiares y camaradas del Presidente Mártir. Apoyado por la absurda versión de un médico de apellido Guijón que habría asistido al Presidente a la hora que regresó al segundo piso en llamas para recoger algún recuerdo o *souvenir* para sus hijos...

Contundentes testimonios señalan que, el propio Pinochet fue el último en ser invitado a la asonada, por la desconfianza que le tenían los otros altos oficiales debido a su zalamera actitud hacia el Jefe de Estado. Tal como a última hora se convocara, también, al general de Carabineros Cesar Mendoza, que alcanzara a ser tildado de “rastrero” por el Primer Mandatario antes de ser ultimado.

Un alzamiento militar que, por supuesto, estaba tipificado como delito en nuestra legalidad republicana y que nunca, sin embargo, ha sido perseguida como tal durante la pos dictadura, tanto que todavía permanecen en la impunidad total, o ya fallecieron con ella, los cuatro comandantes en Jefe y los demás generales y almirantes que se concertaron para violar tan gravemente el Estado de Derecho. Más allá que algunos jueces y tribunales dignos se hayan empeñado en esclarecer los crímenes y castigar a sus ejecutores, lo cierto es que no se ha condenado la conspiración misma que dio origen a las ejecuciones sumarias, los detenidos desaparecidos, la tortura, el exilio y la cárcel que sufrieron enseguida miles y miles de chilenos. Impolutos han resultado,

del mismo modo, los ministros de la Cortes que “legitimaron” la acción militar, desestimaron sistemáticamente los recursos de amparo y, en no pocos casos, hasta participaron en actos de tortura y apremios ilegítimos a los detenidos.

Quizás si la Transición hubiera intentado perseguir, primero, a los ejecutores de la traición original podría haberse avanzado mucho mejor en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por sus subordinados y lacayos. Pero no: en virtud de las negociaciones políticas archiconocidas, varios de estos ejecutores y cómplices siguieron accediendo a altos puestos públicos, adquirieron incluso la dignidad de senadores de República y se los premió con designaciones diplomáticas y diversos honores. El propio de Tirano, como se sabe, fue rescatado de la acción de la justicia mundial y mereció, hace pocos años, unas exequias de alto rango, las que solamente fueran estorbadas por aquel escupitajo que le lanzara a su féretro un nieto del asesinado general Prats. Salivazo, sin duda, que mereció la aprobación universal y aminoró la vergonzosa actitud de la clase política que permitió esta ceremonia fúnebre y que hasta se hizo parte a esta postrera provocación de los “valientes soldados chilenos”, que lo que más han acumulado en su trayectoria son victorias militares contra su propio e inerme pueblo.

En la impunidad que se le ha otorgado a los inspiradores y ejecutores del Golpe Militar se explica que en 24 años nuestros gobiernos y cámaras legislativas hayan sido incapaces de echar las bases de una Constitución Política realmente democrática, cuanto terminar con los irritantes privilegios de la llamada “familia militar” que todavía goza de tribunales de Justicia propia, un sistema previsional ad hoc, hospitales regimiento equipados, como de un presupuesto escandalosamente abultado si se lo compara con la situación de otros países. Peor aún si se atiende a las acuciantes demandas del país, por ejemplo, en materia educacional, energética o de infraestructura.

Mientras en otros estados constituye un delito hacer apología del pasado luctuoso de ciertos regímenes dictatoriales, aquí todavía sufrimos el desparpajo de políticos, historiadores y columnistas que reivindicán la dictadura pinochetista y hasta justifican los delitos de lesa humanidad cuando están forzados a reconocerlos. Mientras la figura de Pinochet sigue enrojeciendo la conciencia mundial, aquí todavía tenemos reparticiones castrenses que le rinden tributo y que, después de muerto, siguen obstaculizando la entrega de pruebas y testimonios que sirvan para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos y descubrir a sus victimarios.

Más allá de que los Tribunales hayan exculpado a un ex comandante del Ejército de toda responsabilidad criminal, no se puede negar lo impropio que resulta que se le haya confiado a un uniformado la dirección de nuestra principal institucionalidad electoral que justamente debe velar por el sufragio ciudadano de los chilenos. Ningún militar que haya hecho carrera profesional desde 1973 en adelante podría haber alcanzado cargo cívico de tal cometido si el país hubiera condenado y sancionado a los que pisotearon la voluntad popular y las leyes de la nación.

La impunidad que favorece a los hechos originales es un verdadero acicate para que, temprano o más tarde, surjan otros cabecillas que, en posición de las armas que el pueblo les confía para la defensa nacional, vuelvan a alzarse contra el orden republicano. Sobre todo cuando estos indignos militares dan pruebas tan agraviantes de ser el brazo armado del grupo de familias enriquecidas por la Dictadura Militar y lo que le ha seguido. Al mismo tiempo que ofician de guardianes de los intereses foráneos enseñoreados a todo lo largo y ancho de nuestra geografía. Lo que los señala, además de cobardes y criminales, como verdaderos enemigos de nuestra soberanía.

Jóvenes y esperanzas postergadas

Los momentos de cambio más brillantes y profundos de la historia son protagonizados por los jóvenes que asumen la convicción que su compromiso debe ser con el presente antes que con el porvenir. Las grandes revoluciones, tales como la emancipación de América, fueron consumadas por el arrojo y el riesgo que asumieron las nuevas generaciones. De esta forma, los héroes que hoy reconocemos de esas gestas fueron esos jóvenes resueltos a romper con la institucionalidad que cuestionaron y salir al campo de batalla a infringirle definitiva derrota a quienes defendían el orden establecido.

La revolución francesa, el levantamiento bolchevique y el emblemático triunfo de Fidel Castro en Cuba tuvieron como luchadores a una juventud indignada que se movilizó en las calles y, por cierto, llegó hasta tomar las armas para combatir la soberbia de los poderosos y emprender los cambios que ellos mismos se plantearon. Como se sabe, los partidos políticos tradicionales no son nunca la vanguardia de las grandes transformaciones y su rol histórico más bien ha sido defender el orden constituido que superarlo. Justamente, cuando los grandes movimientos rebeldes derivan en partidos es cuando sus conductores empiezan a oponerse a las nuevas exigencias sociales y, por supuesto, a degradarse

espiritualmente. De esta forma es que muchos de los militantes de las justas causas devienen en simples operadores del sistema instaurado, poniéndose al servicio de la clientela política de quienes deciden perpetuarse en la dirección de las instituciones públicas, como de sus mismas colectividades.

En la explosión del Movimiento de los “Pingüinos”, sus líderes no fueron capaces de sostener mucho tiempo su descontento y movilización. Acaso por su extrema juventud y candidez, fueron efectivamente engañados por una clase política que les ofreció muy pobres soluciones y promesas, ejerciendo, además, una parafernalia publicista y mediática que llevó a oficialistas y opositores, tomados de sus manos, a celebrar una conciliación que creyeron sellada con los dirigentes secundarios. Sin embargo, el ejemplo de los estudiantes colegiales encendió la conciencia y la protesta que siguió expresándose en las nuevas generaciones, como en aquellos universitarios que hasta hoy no cesan de realizar multitudinarias protestas callejeras ampliamente respaldadas por la población.

La frustración que provocaron las demandas burladas convenció a los jóvenes que los cambios no podrían ser posibles dentro del marco institucional heredado de la Dictadura y el sistema económico y social sacralizado por los gobiernos y los parlamentarios del pos pinochetismo. De esta forma es que una nueva Constitución, la Asamblea Constituyente y un sistema electoral proporcional son hoy las nuevas banderas de lucha de un país que ya está harto de la concentración de la riqueza, los salarios de hambre y la inicua explotación extranjera de nuestros yacimientos y servicios básicos. De la usura que modela nuestro sistema financiero y previsional. Del escandaloso lucro que persiguen las administradoras de salud y los establecimientos educacionales privatizados.

Pero el actual año electoral ha tentado a no pocos dirigentes juveniles a enrolarse como candidatos de aquellos partidos y referentes que en 23 años no han podido o no han querido em-

prender las reformas políticas y económicas prometidas por una Transición que justamente se encuentra abortada en sus principales expectativas. Los quorum calificados que se imponen como trampa en el Parlamento para impedir los cambios han servido de excusa para quienes siempre los proclaman durante las campañas electorales, para luego dejarlos siempre pendientes. La peregrina idea de que si logra doblar ala Derecha en la elección de diputados y senadores podría obtenerse una mayoría en el Congreso Nacional para emprender los cambios, de verdad se frustra todo el tiempo con un implacable sistema binominal que, justamente, tiene el propósito de asegurar la elección de un parlamentario a cada bando, aunque la mayoría se imponga con una fuerte diferencia de votos. Por otro lado, ya es notorio que, entre los que postulan los cambios, hay diferencias sustantivas respecto de qué mecanismo seguir para darnos una nueva Constitución y qué perfil tendría ésta, si en cuanto al propio tema del sistema electoral ya existen cuatro proyectos distintos en el Poder Legislativo para reformarlo y ninguno de ellos por sustituirlo realmente.

No sabemos qué razonamiento puede haber convencido a varios y promisorios líderes universitarios en dejarse tentar por algunos partidos políticos para incorporarlos a sus plantillas electorales. Como tampoco es fácil entender la resolución de otros por levantar opciones propias dentro de un sistema electoral que, ya se sabe, sólo permite integrar el poder legislativo con quienes obtengan las dos primeras preferencias ciudadanas. Ciertamente, lo que anima estas opciones es la idea de que, aun perdiendo, esta participación electoral pudiera darle más visibilidad a estos jóvenes que ya fueron capaces de desplazar a la clase política en credibilidad y solvencia ideológica.

Por cierto que no se nos escapa la explicación que algunos dan en cuanto a que desde dentro del Congreso Nacional o del nuevo gobierno los jóvenes que resultaran elegidos podrían acicatear los

cambios. Cuestión que se nos hace también muy ingenuo después de los largos años de mal comportamiento de las cúpulas políticas, la práctica de las nefastas órdenes de partido, su desdén sistemático a la opinión de las bases, como a la voz de las nuevas generaciones. Aferrados, como siguen, a los cargos y granjerías del poder, para lo cual la institucionalidad vigente, justamente, ha demostrado ser su mejor instrumento. Las arduas negociaciones parlamentarias de estos días dan cuenta que ni por los votos que pudieran sumarle a sus desprestigiados referentes, los viejos caudillos están dispuestos a ser desplazados por los jóvenes. De allí el fracaso rotundo de la Ley de Primarias por ellos mismos aprobada, pero que dejaron de practicar en la definición de las listas de sus candidatos.

Tal resolución puede ser incauta, aunque muchas veces sabemos que sincera o simplemente equivocada según nuestro punto de vista y observación del proceso político chileno de las últimas décadas. Por lo mismo que más absurdo que esto nos parece la competencia de un despliegue insólito de candidatos presidenciales y múltiples y aisladas listas parlamentarias que lo único que lograrán, dispersos y desunidos, es que los integrantes de la clase política tradicional sigan repitiéndose el plato en el gobierno o el parlamento. Toda vez que son éstos los que tienen los más onerosos recursos propagandísticos, controlan la televisión y la prensa, oficiando como ahijados de quienes controlan el poder económico tan bien resguardado por la Constitución y las leyes que se agenciaron durante la Dictadura y que han seguido promulgándose después. Según el propio reconocimiento de los empresarios y dirigentes patronales en cuanto a que las tareas de *lobby* hacia el Ejecutivo, el Parlamento y municipios les exige destinar todavía más recursos económicos que sus ya millonarias erogaciones a los candidatos.

Tal situación podría llevarnos al desánimo total si no fuera porque la misma historia nos indica que los procesos de cambio

toman tiempo en madurar, aunque los desenlacen suelen ser rápidos y explosivos. Por ahora sólo podemos compadecernos de aquella megalomanía que expresan tantos contendientes por sobre sus convicciones. Esa idea tan ilusa y vacua de que los que hicieron poco o nada por cambiar las cosas cuando tuvieron la oportunidad puedan ahora realmente proponérselo. O la candidez de quienes creen que es posible cambiar “desde dentro” un sistema tramposo y autoritario por otro democrático y participativo, sin que los jóvenes no asuman plenamente que es en su movilización y fuerza donde es posible abrir las puertas del cambio, y no apoltronándose en las instituciones que ya no funcionan.

Fuerza, naturalmente, que no tiene porqué ser sinónimo de violencia. En un tiempo, por lo demás, que la resistencia pacífica es lo que más intimida a quienes, además de la riqueza del país controlan las armas que finalmente son convocadas a intervenir en su defensa. Tal como hace 40 años y en otros episodios bochornosos de nuestra existencia nacional.

Bajo el imperio de la demagogia

Nunca antes había quedado tan nítido el interés de los partidos y de la clase política por aferrarse al poder sin saber a qué objetivo servir. Aunque son contados con los dedos de la mano, existen algunos dirigentes que habiendo alcanzado altos cargos en La Moneda o el Parlamento, posteriormente desistieron de seguir en carrera y se retiraron a la vida privada. Desilusionados, generalmente, por la forma en que se ha degradado la política, y/o convencidos de que las grandes decisiones en nuestro país realmente las toman los grandes empresarios, las consienten los militares o son impuestas desde el extranjero. Especialmente por los Estados Unidos y las distintas entidades financieras internacionales.

Los que por más de 26 años se han rotado en las instituciones públicas renunciaron a emprender cambios o actuar de auténticos mandatarios de esa voluntad popular que dicen representar. Desde hace tiempo no asoman liderazgos o referentes que tengan convicciones y no cultiven esa vieja demagogia a fin de mantenerse en sus cargos, aunque sea defraudando una y otra vez al pueblo.

Patricio Aylwin constituyó la esperanza de muchos en cuanto a que por fin llegaría la democracia y se haría verdad, justicia y reparación por todos los crímenes de la Dictadura. Sin embargo, lo que se impuso, finalmente, fue esta “justicia en la medida de

lo posible”, como la consagración de la Constitución y el modelo económico social de Pinochet. Asimismo, aunque la cifra de la extrema pobreza efectivamente disminuyera, ello no impidió que, sin embargo, se mantuviera y profundizara la brecha entre los que más ganan y los que menos perciben. Es decir, se prolongara la desigualdad social.

Con Ricardo Lagos se pensó que los gobiernos de la Concertación pudieran dar un giro hacia el socialismo que muchos profesaban al interior del oficialismo. Sin embargo, lo que tuvimos fue una reforma constitucional que, en los sustantivos, legitimó la misma Carta Fundamental de 1980. Así, como, en materia económica, hasta hoy los grandes empresarios se obligan a rendirle tributo a su gobierno gracias, incluso, a la aprobación de esas leyes que les rebajaran las penas por evasión fiscal, colusiones y otras prácticas que explican en muchos el enorme incremento de su riqueza.

Michelle Bachelet constituyó dos veces la esperanza que muchos tenían por el eventual gobierno de una mujer, además de haber sido una socialista que había sufrido los rigores de la represión militar. Pero es evidente que su gobierno frustró muchas expectativas, lo que culminó en que la Mandataria tuviera que traspasarle la banda presidencial al candidato de la derecha. Cuestión que de nuevo podría ocurrir, como algunos lo esperan y otros lo temen.

En efecto, lo que hemos tenido en estos años es mucha demagogia. Todo un palabrerío destinado a lograr cautivar o retener votos, en la certeza tan reiterada de que quienes lleguen a La Moneda o se mantienen en el Parlamento realmente no van a cambiar casi nada, mientras sigan imponiéndose las reglas del juego institucionales, la autoridad del Tribunal Constitucional por sobre las decisiones del Parlamento, y los gobernantes vivan con ese temor reverencial a las Fuerzas Armadas. Justificando y hasta defendiendo los ingentes y abusivos recursos que se les des-

tina desde el presupuesto nacional y la Ley Reservada del Cobre, mientras las carencias comprometen gravemente a la salud, la educación y las obras públicas. O sus sueldos y pensiones de los uniformados marquen también una brecha indignante frente a los ingresos de millones de trabajadores y jubilados civiles.

Para colmo, el país reconoce también que la corrupción está plenamente instalada en la política y sus instituciones. Comprometiendo, de Capitana a operadores políticos, con esa retahíla de escándalos y siglas como el Caso Mop Gate, Penta, Caval, Soquimich, la Papelera del grupo Matte, Corpesca y esa variedad de empresas y ejecutivos hoy investigados por la Justicia, junto a parlamentarios, candidatos presidenciales y otros que fueran sobornados por las mismas. En toda una escalada de transgresiones éticas que explica la creciente abstención electoral y el desplome en la imagen de quienes nos gobiernan.

Frente a esta falta de probidad se pensó que las viejas guardias de la política, tan responsables de todo lo acontecido, realmente se decidieran dar un buen paso al lado para permitir la renovación de sus partidos y la posibilidad de que otras generaciones pudieran acceder a los altos cargos del gobierno, del parlamento y de los municipios. Sin embargo, lo que vemos hoy es que ya se han instalado en la carrera presidencial dos expresidentes que poco a poco le van cerrando el camino a la renovación, y que ya cuentan con el apoyo de los grupos fácticos que financian la política, controlan los grandes medios de comunicación y quieren seguir manteniendo los privilegios que ostentan.

Quizás lo más novedoso de todo este asunto sea descubrir a cuál de los dos candidatos va a tributar más unciones. Cuando a uno de estos (Piñera) lo reconocen como parte de los suyos, pero al otro (a Lagos) no pueden dejar de reconocerle los favores de su anterior gobierno, el haberse desempeñado como el mejor de sus delegados en el Poder Ejecutivo.

En el ámbito de los partidos, sin embargo, son ostensibles los temores de algunos en cuanto a que los expresidentes Piñera y Lagos puedan constituir una opción clara para quedarse en La Moneda o volver a ella. Más, todavía, frente a la posibilidad de que las expresiones escindidas de los referentes del llamado duopolio político levanten sus propias alternativas o en las mismas primarias (si es que se realizan) otros contrincantes puedan superar la pretensiones de Piñera y Lagos. De allí el fuego cruzado que están recibiendo esas opciones electorales que destacan candidatos mejor posicionados en las encuestas y que han emergido como presidenciales por factores que muy poco o nada tienen que ver con sus trayectorias políticas. Desde figuras catapultadas por su buen desempeño comunicacional, hasta otros proveniente de otros ámbitos, y que – de persistir- tendrían una buena posibilidad de prosperar como candidatos ante el desgano generalizado que nos provocan los políticos tradicionales.

Por lo mismo es que las encuestas han pasado a ser muy apetecidas por las distintas cúpulas políticas y empresariales. Como imaginamos que son muy bien estimadas, además, por las instituciones castrenses que, aunque aseguran siempre que no deliberan ni sacan cálculos políticos, la verdad es que desde siempre lo han hecho. Y gozan de buenos recursos, incluso, para agenciarse sus propios sondeos de opinión.

Sin embargo, en la evaluación ciudadana respecto de los eventuales presidenciables, hay que consignar que la inmensa mayoría de los encuestados aún no manifiesta opción y tendencia. Porque no hay duda de que todas las cifras que ofrecen estos sondeos se circunscriben al limitado ámbito de los que demuestran preocupación y hasta candidez respecto de los próximos comicios. Cuando en las elecciones municipales de un mes más todavía hay más de un 60 por ciento de ciudadanos que simplemente se resiste a sufragar. Ni siquiera ante el hecho de que existen varios

miles de candidatos entre los cuales elegir. Así como que los que resulten electos van a tener que ver con la administración de nuestras comunas o barrios.

“Cortando las huinchas”, como decimos en Chile, estos candidatos se muestran totalmente desbocados en su ambición de poder y, en vez de esperar prudentemente los resultados de las municipales, todos los días acometen acciones mediáticas en las que menos demuestran es definición política, ni autocrítica siquiera respecto de los despropósitos de su pasado. Asumiendo en su discurso una de sus más típicas expresiones de la demagogia; esto es ofrecer soluciones a futuro, para veinte o treinta años más... Es decir, en un verdadero artulugio para soslayar los problemas y demandas del presente. Rehuyendo posición, por supuesto, sobre el sistema previsional, sin definirse frente a la descarriada reforma educacional, negándose también a adoptar tomar postura respecto de cómo arribar a una nueva Constitución.

Menos ideas ofrecen, todavía, estos presidenciables respecto de cómo recuperar soberanía nacional en nuestros yacimientos y recursos naturales o en cuanto a cómo enfrentar nuestros conflictos limítrofes. Aunque ya se sabe que sus respectivos gobiernos lo que hicieron fue encrispar nuestras relaciones internacionales, buscar aplausos en la Casa Blanca y apostar a una solución militarista en relación a nuestros diferendos. Incluso en la eventualidad de que el Tribunal Internacional de la Haya termine dándole la razón nuevamente a nuestros demandantes.

Por cierto que no son únicamente Lagos y Piñera los campeones del pragmatismo y del oportunismo, signos tan elocuentes de la demagogia que señalamos. Participan también de las mismas actitudes quienes en la política se desenvuelven con evasivas y se deslindan de las necesarias orientaciones ideológicas habitualmente tan francas en otros países. Aunque fuera tan solo para definirse si se es de izquierda o de derecha. Sin recurrir a

aquellas salidas tan eufemísticas como señalarse de “centro derecha” o de “centro izquierda”. Donde para todos resulta muy difícil separar aguas.

En esto nos llama la atención que aquellos radicales izquierdistas del pasado hoy asuman las banderas de la renovación o de la ponderación socialista. Mientras que algunos actores y encubridores de los crímenes de la Dictadura hoy rasguen vestiduras como demócratas. Unos y otros con la pretensión de erigirse en fiscalizadores, por ejemplo, de la situación venezolana. Con un descaro que realmente nos avergüenza.

Más temprano que tarde, los partidos políticos van a pagar los costos por manejarse con tanto oportunismo; al escoger a sus candidatos única y exclusivamente por la posibilidad de abrigar mejores resultados electorales o mantenerse aferrado a coaliciones cuyo único propósito es medrar en el poder, asegurarle cuotas de trabajo a sus militantes y alimentar desde la administración pública o las empresas recursos económicos que, ya sabemos, han hipotecado la independencia de gobernantes y parlamentarios. Decepcionado a la población, renunciando a sus demandas y afectando severamente la vocación democrática del pueblo. Cuando otras encuestas, por cierto más confiables que las que están más en boga (como la de Latinobarómetro), nos advierten que apenas la mitad de nuestra población sigue confiando en la democracia. Mientras aumenta inquietantemente el deseo de que venga un gobierno autoritario que se haga cargo de nuestros actuales problemas.

El grave trastorno moral de la riqueza

En una impactante entrevista que leemos en la última Revista del Sábado de El Mercurio observamos nítidamente las sórdidas condiciones económicas sociales y culturales que llevan a tantos niños y adolescentes en nuestro país a convertirse en delincuentes comunes. A quienes desde la más tierna edad no tienen más opción que seguir el destino de sus propios padres (cuando los tienen) y que descubren en el hurto, el robo con violencia y el tráfico de drogas la mejor posibilidad de subsistencia. Seres que son discriminados desde que nacen, que muchas veces pierden la vida a temprana edad y cuyo futuro más seguro es encontrar guarida en las propias las cárceles.

Se trata de una extensa conversación con uno de estos niños que empezara delinquir a los 10 años y, ahora, a los 18, luce en su cuerpo ocho cicatrices de balas y un proyectil todavía alojado en su vientre. Uno de los pocos jóvenes de su condición que ha sido acogido por un programa de rehabilitamiento del Ministerio del Interior, mientras tantos otros como él siguen en las calles expuestos cotidianamente la muerte temprana o el presidio en cárceles que más bien parecen escuelas del delito. Enrique Troncoso se llama quien dice no estar seguro de que a esta altura pueda cambiar de rumbo cuando se duele que nunca tuvo niñez y, por cierto, oportunidad de recibir la educación mínima necesaria para desempeñarse en alguna actividad laboral decente.

Consultado si no le provocaba remordimiento asaltar a las personas y despojarla de sus bienes, Enrique Troncoso dice que, aunque una vez decidió devolverle a una anciana lo que les había robado, en general no le causaba problema robarle a los ricos, a aquellos que podían trasladarse en vehículos costosos o de lujo, porque si tenían “15 palos para uno, nos dice, deben tener otros 15 para comprarse otro”. Su argumento es simple: todos necesitamos comer y, para ello, personas como él simplemente no saben hacer otra cosa que delinquir para propiciarse los recursos necesarios. Situación que, como reconoce, está empeorando en nuestro país y día a día muchos otros chicos toman el mismo camino.

Se trata además de una entrevista que claramente demuestra la responsabilidad del Estado y de la política en las condiciones de pobreza y marginalidad en que viven millones de chilenos, cuyos hijos no alcanzan instrucción, carecen de hogar y son estigmatizados desde que dan sus primeros pasos. Niños y jóvenes que por los medios de comunicación, especialmente por la televisión, pueden apreciar la enorme riqueza y holgura de un segmento de la población, cuyos niveles de consumo son ostentados sin pudor alguno. Cuando nos enteramos, por ejemplo, que uno de los más intrépidos delincuentes de cuello y corbata recientemente huido del país había adquirido para su propio disfrute cinco o seis automóviles de lujo, además de las pomposas propiedades en que vivía e implementaba sus turbios negocios... O cuando se descubren las escandalosas colusiones de los grandes empresarios con parlamentarios y candidatos para evadir impuestos y defraudar a los consumidores chilenos.

Es decir, cuando ya es imposible disimular aquella inequidad en que apenas un uno por ciento de los más ricos percibe más de lo que alcanza un cuarto de la población nacional. Una desigualdad que ciertamente explica los crecientes niveles de inseguridad que hoy nos afectan y que, por cierto, estimula también la co-

rrupción, no solo de los que no tienen nada o muy poco, sino de las autoridades, los propietarios de los bancos y de las isapres o los controladores de los fondos de pensiones, de las Afp. Cuyas enormes ganancias, en este último caso, ciertamente no provienen de recaudar y administrar únicamente las cotizaciones de los trabajadores, sino de la posibilidad que la Ley les brinda de rentabilizar a través de sus propias entidades financieras los recursos que disponen. Prestándole, como se sabe, el mismo dinero a miles y miles de chilenos que pagan intereses muchas veces por sobre el 4 por ciento para adquirir una vivienda y otros bienes de consumo. Todo esto cuando se asume el alto endeudamiento de las personas y familias en el país que para colmo, es identificado en el mundo como uno de los más desiguales de la Tierra.

La pobreza y la miseria desde hace mucho tiempo son considerados un grave pecado y trastorno social, sobre todo en una nación que tanto se ha ufano de tan alto ingreso per cápita y de un crecimiento económico que por muchos años fue considerado ejemplar y hasta envidiable desde el extranjero. Pero es preciso que ahora se asuma que la riqueza extrema es también una severa transgresión ética y moral. El aliciente más fuerte, por lo demás, de la criminalidad que hoy tantos lamentan, cuando las víctimas de la delincuencia común muchas veces son personas de clase media, que viven también con toda suerte de privaciones. Pero que, desgraciadamente, están más al alcance de quienes los asaltan y despojan en las calles como en sus propios hogares.

En contraste, una persona que posee un automóvil de lujo y vive en una suntuosa mansión efectivamente tiene muchas más posibilidades de recuperar los bienes que les fueran arrebatados o resarcirse con los buenos seguros que tienen la posibilidad de contratar. No así los millones de chilenos que circulan generalmente en locomoción colectiva y perciben un modesto sueldo o salario, pero cuyas especies o dinero robados resultan insignificantes para los policías.

En este sentido, somos muchos los que hemos comprobado en carne propia cuando los propios carabineros o funcionarios de la PDI nos instan a no perder el tiempo en recurrir a la justicia cuando lo usurpado es inferior a los cinco o seis millones de pesos. Especies perdidas que en dinero resultan sin duda muy onerosas, sin embargo, para la inmensa mayoría de los afectados. Una actitud policial que explica, entonces, que muchos de los delitos en que se logra llegar a sus hechores, como recuperar los bienes sustraídos, son los que se producen en los barrios más pudientes y afectan, por ejemplo, a poderosos empresarios y rostros de la televisión y la farándula.

Pero lo más grave de todo es la idea que se ha ido consolidando en cuanto a que los propios policías son, muchas veces, los que les dan protección a los delincuentes o forman parte de las mismas bandas de asaltantes. Temor que antes no existía en Chile, pero que ahora se hace cada día más ostensible cuando con frecuencia comprobamos la presencia de estos “guardianes del orden” en asaltos a cajeros automáticos, robos de automóviles, microtráfico y tantos otros delitos tildados curiosamente “comunes”. Porque en el afán de nuestras autoridades de enfrentar la delincuencia, sin atacar sus principales causas, éstas no discurren más solución que elevar considerablemente el número de carabineros y dotarlos de armas represivas (o disuasivas, como las llaman), entre los cuales resulta fácil que se filtren personas poco idóneas, moralmente hablando, para cumplir con estas funciones policiales. Sobre todo cuando se comprueba, ahora, los privilegios generales de los uniformados en materia de remuneraciones, previsión y privilegios.

Cuando muchos tenemos fresca en la memoria, todavía, el bochornoso papel cumplido por policías civiles o uniformados en los más terribles crímenes de la Dictadura. Cuando Chile miraba con orgullo su eficiencia, probidad y afán de servicio público.

La política chilena bajo cautiverio

Además de la desmedida consideración que toda la larga pos-dictadura ha tenido con las grandes entidades empresariales y los inversionistas foráneos, lo más permanente en estos largos 26 años ha sido el temor reverencial de nuestras autoridades a las FFAA. En efecto, contradiciendo todo lo que se prometió antes y después de la partida de Pinochet de La Moneda, lo cierto es que los militares gozan de ofensivos privilegios en relación a la realidad que afronta cotidianamente la población civil.

Si no hubiera sido por la detención del Dictador en Londres, y el ánimo europeo de procesarlo y condenarlo por sus crímenes de lesa humanidad, lo cierto es que la impunidad podría haberse consolidado mucho más en Chile, si no fuera por el rubor que le produjo a algunos jueces aquella sentencia de Patricio Aylwin de que solo se “haría justicia en la medida de lo posible”. Aun así y, pese a todos los uniformados que han sido condenados, es evidente que todavía no se cierran muchas investigaciones judiciales en los tribunales a más de 30 o 35 años de cometerse crímenes tan horribles como el de Lonquén y tantos otros que en estos días se rememoran. Se asume, además, que las penas dictadas a sus principales hechores son del todo discretas respecto de la premeditación y alevosía demostrada por los homicidas y tortu-

radores. Así como es evidente que el principal autor intelectual de todos estos graves despropósitos muriera impune, salvo aquel saludable y digno escupitajo que recibiera su urna durante sus pomposas exequias.

Resulta grosero que los más encarnizados militares cumplan sentencia en una cárcel especial que, por cierto, difiere mucho de los sórdidos recintos penitenciarios de los delincuentes comunes, y hasta se discuta en estos días la posibilidad de que uno de sus más feroces criminales pueda ser excarcelado cuando, en realidad, le faltarían dos o más vidas enteras para pagar por sus innumerables crímenes. Hay quienes alegan la correcta conducta de Miguel Krassnoff al interior de Punta Peuco sin que hasta la fecha, como consta, haya expresado signo alguno de arrepentimiento por sus sangrientas faenas en diversos campos de detención.

El Código de Justicia Militar solo ha recibido algunos retoques, pero sin variar en lo fundamental. Esto es que los uniformados son juzgados por sus propios pares y los titulares de sus fiscalías y tribunales son designados por los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. Un cuerpo legal que, además, sigue contemplando la pena de muerte como posible sentencia, pese a que la justicia civil la erradicara con bombos y platillos ante el mundo civilizado.

Allí siguen, también, los hospitales militares, edificaciones que se constituyen en verdaderos hoteles de lujo en relación a los recintos a los que accede la amplia mayoría de la población civil y cuando el sistema público acumula deudas por más de 220 mil millones de pesos, según reciente reconocimiento. Instalaciones que fundamentalmente atienden a sus familiares, como las enfermedades prostáticas de los más añosos oficiales, cuando de las peripecias militares la mayoría salva sin rasguño alguno.

Algo que resulta insólito, asimismo, es que después de los cinco últimos gobiernos, los presupuestos militares para la adquisición de armas solo se hayan incrementado en desmedro de las urgentes

carencias de millones de chilenos en el país, como se sabe, el más desigual de la Tierra. Además del oprobio del sistema previsional que los favorece al momento de jubilarse, con pensiones promedio que superan tres o cuatro veces las que recibe el conjunto de los trabajadores chilenos que ciertamente se esfuerzan más y por más tiempo que los uniformados.

A esta altura, no queda más que reconocer que la Presidenta Bachelet era la más indicada para impulsar reformas que acotaran los privilegios castrenses, habida cuenta que ella se siente parte de la familia militar y su padre fuera un alto oficial de la Aviación. Sin embargo, ella se resiste incluso a derogar aquella Ley Reservada del Cobre que le sustrae a Codelco el 10 por ciento de todas sus ventas en favor de las instituciones armadas, aunque desde el propio oficialismo y la oposición se la inste a ello. Cuando nuestra principal empresa sufre las zozobras, además, del alicaído precio internacional del metal rojo, nuestro principal producto de exportación. ¡Qué duda cabe que los conflictos alimentados por nuestro Canciller con nuestros vecinos pueden servir de excusa para que se mantengan estos multimillonarios recursos para las Fuerzas Armadas y con los cuales bien podrían financiarse varias reformas educacionales y previsionales! O servir de cimiento para nuestra urgente necesidad de ponerle "valor agregado" al mismo cobre en bruto que por miles de toneladas sale diariamente al extranjero a precio vil.

Por cierto que los millones de chilenos que salen a las calles convocados por NO+AFP valen mucho menos para las autoridades que quienes siguen parapetados en sus cuarteles o entretenidos en sus juegos de guerra y arcaicas parafernalias marciales. Como esa cada vez más ridícula y dispendiosa Parada Militar que parece ser la preocupación fundamental, ahora, de ese Ejército "jamás vencido", y que tiene para su deshonor haber masacrado a miles y miles de chilenos a lo largo de nuestra vida republicana. En Santa

María de Iquique, en Ranquil, en Punta Arenas y, por cierto, durante la llamada “pacificación de la Araucanía”, entre otros tantos puntos de toda nuestra larga y ensangrentada geografía.

Cómo quisiéramos tener militares y policías que protegieran nuestra soberanía y fueran garantes de los derechos del pueblo, como sucede en los países democráticos; cuando en toda su trayectoria en lo que se han prodigado es en acometer asonadas golpistas, en amedrentar los cambios sociales, actuando como una guardia pretoriana de los más poderosos e inescrupulosos empresarios del país. Oficiando, por supuesto, de gendarmes de los intereses foráneos enseñoreados en nuestros yacimientos, bosques y las aguas de nuestro Océano Pacífico, ríos y lagos. Sin prestar colaboración alguna, insisto, al esclarecimiento de los horrendos crímenes de la Dictadura, guardando bajo llave las evidencias, cuanto consintiendo en que los testimonios de quienes fueron víctimas de torturas y arbitrarios encarcelamientos se mantengan sin desclasificar porque, de nuevo, la Presidenta y sus colaboradores prefieren acallar la verdad que irritar a los altos oficiales.

Lo insólito es que un sistema institucional como el nuestro tenga la pretensión de ser reconocido como democrático bajo esta tutela militar y la profunda brecha que prevalece entre los derechos ciudadanos y las inmunidades militares. Con una ciudadanía que se abstiene masiva y crecientemente en las elecciones, cuanto con la preeminencia de un Tribunal Constitucional que puede borrar con el codo lo dispuesto por el Ejecutivo y el Parlamento. Con una clase política, para colmo, corrupta y en que algunos de sus miembros terminan, incluso, recibiendo honorarios de los propios militares y entidades policiales, además de las boletas y facturas que les emiten a la grandes empresas.

Lo que resta de gobierno y paciencia

A un año y medio del fin del actual gobierno todavía no es posible visualizar las transformaciones políticas, económicas y culturales que se concibieron a su inicio. Esto es, promesas destinadas a consolidar la democracia, como a terminar con las profundas desigualdades sociales. Por alguna extraña razón se pensaba que una nueva administración de Michelle Bachelet corregiría el rumbo de los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera y para los cuales se le solicitó a la ciudadanía brindarle un amplio apoyo electoral a la Nueva Mayoría. La idea era contar con una amplia ventaja de esta coalición en el Parlamento para que aprobara las nuevas leyes que significarían a ponerle una “retroexcavadora al pasado”, advertencia que alarmó a la derecha y, desde luego, a los grandes grupos empresariales.

Sin embargo, ya sabemos que ésta y otras bravatas no llegaron a materializarse y a esta altura parecen francamente imposibles de consumir. Ya se ha desatado la nueva campaña presidencial y solo se espera que la Presidenta no termine tan mal evaluada por las encuestas. Aunque muchos sentencian, de todas maneras, que su gobierno quedará inscrito como el peor de todos los de la posdictadura, respecto de las expectativas que quedan nuevamente frustradas. Este fracaso, en definitiva, es lo que explica la decisión de los dos últimos presidentes de postularse nuevamente

a La Moneda, como diciendo que el pasado – por malo que haya sido- resulta preferible a lo que vino. De esta forma es que se habla de rebautizar nuevamente al conglomerado oficialista a objeto de soslayar el descrédito general de la política y de tal referente.

La reforma tributaria resultó a medias e insuficiente para solventar una reforma educacional que todavía sigue en pañales y con muchas incertidumbres. Al mismo tiempo, ya se sabe que la Jefa de Estado le ha sacado el bulto a la demanda por una nueva Constitución, endosándole a un próximo gobierno tal posibilidad. Muy incierta es, además, la posibilidad de que el Ejecutivo acometa una profunda reforma al sistema previsional, salvo que el Movimiento No +AFP fuerce a las autoridades mediante una drástica movilización y Paro Nacional.

Pese al alto número de demandas judiciales que las afectan, la isapres parecen estar salvándose otra vez y, con ellas, también, muchas empresas estratégicas que pudieron ser recuperadas para la administración del Estado, sobre todo cuando se sabe que fueron mal habidas por sus actuales propietarios durante la Dictadura. Personajes como Julio Ponce Lerou, y la plana mayor de los grupos Penta, Angelini y Matte, entre otros, ya no parecen temer la intervención y confiscación de sus empresas, después de sus graves actos de colusión, fraude tributario y soborno a la política. En todo un incesante conjunto de operaciones que siguen descubriéndose y en difícilmente sus responsables y cómplices resulten efectivamente condenados por la justicia. Cuando ya comprobamos los juicios abreviados y otra serie de resquicios judiciales para eludir la acción de los Tribunales.

Los primeros políticos y empresarios formalizados suman ahora a su haber la habilidad para escapar de un juicio justo y aleccionador, por lo que es muy probable que la corrupción se consolide para siempre en el llamado servicio público gracias a esta fragante impunidad.

Lo que no se apreciara del todo en los gobiernos anteriores, durante éste ha quedado en evidencia que el Tribunal Constitucional es el organismo verdaderamente rector de la institucionalidad chilena, cuando varias iniciativas legales ya no se resuelven entre el Ejecutivo y el Legislativo sino en esta entidad integrada por magistrados que son cuoteados políticamente. El mismo “tribunal” que ahora no solo atiende los diferendos entre estos dos “poderes del Estado”, sino también los requerimientos particulares de quienes han sido sancionados por el Poder Judicial. Con lo cual nuestra Corte Suprema le ha quedado claramente subordinada y expuesta al ridículo, incluso.

Es evidente que Pinochet y Jaime Guzmán, desde el más allá, podrían estar celebrando la “genialidad” (como algunos lo catalogan) de su diseño institucional todavía vigente por los 27 años que han seguido a su régimen cívico militar. Mucho más, si se considera la forma en que ha terminado rindiéndose el conjunto de la clase política a los principios que rigieron la refundación del estado chileno, como el de la “democracia protegida”, la subsidiariedad del Estado y el modelo neoliberal que se nutre muy adecuadamente de ambas.

Diversas publicaciones y estudios en estos días dan cuenta de lo que entonces muchos adversarios o disidentes de la Dictadura proclamaban, en contraste a lo que terminaron haciendo y defendiendo en La Moneda o en el Parlamento. Qué duda cabe que otro de los triunfos del Dictador y sus operadores radica en el acatamiento de un Patricio Aylwin, un Edgardo Boeninger y tantos otros a las reglas del juego impuestas para la llamada Transición a la Democracia. Promesa sin duda incumplida y que bajo la actual administración tampoco parece avanzar. Salvo, recién, la idea de que los intendentes sean elegidos en elecciones y cambien su nombre por el de gobernadores regionales.

Por lo mismo, resulta razonable la preocupación de ciertos actores políticos ante el creciente malestar popular y la radicali-

dad que van adquiriendo las protestas sociales. Hasta en materia de Derechos Humanos, pareciera que las heridas vuelven a abrirse en nuestra convivencia, como que las Fuerzas Armadas no logran sacudirse se la responsabilidad institucional por sus crímenes. Cuando hoy quedan al descubierto, además, los propios actos de corrupción de la oficialidad actual, cuanto esa serie de irritantes privilegios económicos en relación a sus ingresos, sistema previsional y tantos otros.

En este sentido, apreciamos ya que el ímpetu de algunos jueces por sindicar y condenar a o los culpables de tan graves violaciones a la dignidad humana hoy empieza a flaquear y mostrar inclinación por conmutar las penas de los grandes criminales. Al tiempo que el penal especial de Punta Peuco tal parece que no se cerrará ni a corto o mediano plazo, en otro de las graves asimetrías entre la situación de los delincuentes comunes y la de los que cometieron los horripilantes crímenes de lesa humanidad. Como tampoco parece dispuesta la Primera Mandataria a derogar la Ley Reservada del Cobre que financia las desmedidas y fratricidas compras de armas en desmedro de tan graves carencias sociales que podrían ser financiados con las exportaciones del metal rojo.

Preocupante les resulta también a ciertos actores la abstención electoral manifestada crecientemente en nuestros comicios, cuando el propio entusiasmo que concitara la última postulación de Michelle Bachelet sumara, sin embargo, más de un 58 por ciento de renuentes a sufragar. Cuando muchos temen que la abstención de las municipales pueda ser tan o más alta, todavía, como en la posterior elección presidencial. Sobre todo si la competencia quedara acotada a estas dos viejas figuras que más que todos los políticos encarnan lo que se le incumplió al país, lo que se hizo tan mal, (como el Transantiago, por ejemplo). Y, por supuesto, la falta de probidad que sus administraciones dejaran tan anclada a las prácticas políticas y empresariales.

Para colmo, debemos agregar que con el actual gobierno se va otro que se demuestra completamente incapaz de enfrentar la situación de la Araucanía, reconocer la guerra civil que verdaderamente se vive en el sur de Chile, producto por la obstinación de nuestras autoridades en desconocer los derechos de nuestro pueblo fundacional. Un conflicto en que todos los días se ejercen arbitrariedades policiales y judiciales que se estrellan, incluso, con el criterio de los propios jueces de la zona, además de concitar el repudio interno y internacional. Al mismo tiempo que nuestra Cancillería acumula errores y despropósitos en relación a las demandas de nuestros países vecinos, pero, sobre todo, a la posibilidad de arreglar pacíficamente nuestros diferendos.

El escenario político difícilmente puede ser halagüeño en los años que le restan a Michelle Bachelet, pero sobre todo si lo que viene es más o peor de lo mismo. De allí la responsabilidad ineludible de la izquierda en ofrecer una alternativa política que no comulgue más con los tejemanejes del duopolio gobernante, ambos completamente seducidos por el legado institucional y socioeconómico de Dictadura.

Porque si de algo no hay duda es que la paciencia se está agotando en nuestra población.

La posdictadura en el “principio del fin”

La gran contrarreforma económica y social de Pinochet radicó en las privatizaciones de las empresas del Estado como en su convocatoria a que los capitales foráneos vinieran a invertir a nuestro país. A precio vil, pudimos comprobar cómo se apropiaban los amigos y cómplices del Dictador de las más importantes compañías eléctricas, mineras y de servicios, empezando a amasar sus actuales fortunas, sobre todo desde que empezaron a revenderlas a las empresas transnacionales. El famoso principio de la subsidiariedad del Estado, que hasta hoy protege la Constitución de 1980, fue el gran ariete ideológico del extremo neoliberalismo que todavía nos rige. Realidad que explica, además, la pavorosa concentración de nuestra riqueza en solo unas pocas manos, constituyéndonos en una de las naciones más desiguales de la Tierra.

No solo se trató de desprenderse de las entidades productivas más rentables y estratégicas sino, también, de traspasarle a entidades con afán de lucro nuestra educación, la salud, el transporte público y un sinnúmero de propiedades urbanas y rurales. Despojando, incluso, a los campesinos de sus tierras y, lo más grave y escandaloso de todo, al conjunto de los trabajadores de sus cotizaciones previsionales. Exceptuando, por supuesto, a las Fuerzas Armadas y policías, acaso en la certeza de que el anterior

sistema de reparto era mucho mejor que el actual régimen de las AFP. Cuestión que se nota en las profundas asimetrías entre las jubilaciones castrenses y la de los civiles.

Lo peor de todo es que quienes sucedieron al Régimen Militar nada han hecho para recuperarle al Estado todo lo mal habido por este puñado de no más de diez clanes familiares que, como se ha constatado, acumulan más riqueza que la de los 17 millones de chilenos. Multimillonarios que ganan y siguen incrementando su fortuna gracias al salario promedio de 500 mil pesos que les pagan a casi dos millones y medio de trabajadores. Los cuales, para colmo, a la hora de jubilarse, deben conformarse con pensiones todavía inferiores a las de este salario.

Como ya ha quedado constatado, tanto los gobiernos de la Concertación, el de Sebastián Piñera y el actual de Michelle Bachelet avalaron este despojo, ofreciéndole todavía más beneficios al gran capital y a los inversionistas foráneos. Suscribiendo, además, tratados de libre comercio que han venido a consolidar la extranjerización de nuestros recursos básicos y nuestra dependencia económica. Así fuera al precio de provocar severos trastornos a nuestro medio ambiente tanto como a la vida de nuestra población. Despropósito, por lo demás, que ha originado severos conflictos de las autoridades con los pueblos y ciudades afectados por estos desechos tóxicos emanados de actividades verdaderamente criminales en cuanto a la salud de nuestros ecosistemas.

Sabido es que Ricardo Lagos y el parlamento de la época legislaron para liberar de las penas de cárcel los empresarios que, contradiciendo la “libre competencia”, se coludieran para estafar a los consumidores en los precios que pactaban para productos tan esenciales como los farmacéuticos, los pollos y el papel higiénico. Delincuentes “de cuello y corbata”, como se los identifica, que a lo sumo están siendo condenados a multas muy inferiores a todo lo recaudado con estos sobrepuestos.

Claro: ya se sabe que gran parte muy importante de los recursos para financiar a los partidos y sus procesos electorales provinieron de los sobornos programados de los grandes grupos económicos. Entidades que hasta llegaron a redactarle de su puño y letra a nuestros legisladores algunas disposiciones la última Ley de Pesca. Así como se asume que el propio yerno de Pinochet, que aun mantiene la propiedad de Soquimich, no solo evitó la recuperación por el Estado de sus lucrativas empresas, sino se agenció nuevas concesiones y oportunidades de negocios. Nada más que por su habilidad de ejercer el cohecho en todo el espectro político.

Toda la indignación que han causado en el país los escándalos y colusiones entre empresarios y políticos ya vemos que empieza a sofocarse en juicios que difícilmente logren algún día castigar ejemplarmente a los culpables. Ello explica, incluso, que varios de los más comprometidos personajes ya fueran sobreseídos por la prescripción y los juicios abreviados, y algunos ahora hasta insistan en repostularse como candidatos. Sin embargo, lo que no se puede dudar es de la inmensa conciencia adquirida por los chilenos del estado de postración de nuestra política, de la falta de probidad de sus actores y de la certeza de que cualquier cambio ya no será posible sin erradicar de La Moneda, del Parlamento y de los municipios a tantos inescrupulosos. Quienes, además de corruptos, demuestran en estos días su completa ineptitud, cuando casi medio millón de ciudadanos, curiosamente, pierde su inscripción electoral a pocos días de las elecciones para elegir alcaldes y concejales.

Una clase política, recordemos, que legisló deliberadamente para hacer voluntario el sufragio popular en nuestro país a objeto de hacer más expedito el trámite de perpetuarse en sus cargos mediante el sistema electoral binominal y la acotada votación de su clientela política. En una de sus decisiones más torpes a la postre y que ahora tiene en entredicho a todo nuestro régimen republicano, cuando ya en los últimos comicios la cifra de abs-

tención superara largamente a la de los que todavía votan. No es de extrañarse, por lo mismo, que ahora haya dirigentes políticos más empeñados en promover la concurrencia ciudadana a las urnas que en procurar votos para sus candidatos. ¡Vaya cómo temen, ahora, que esta abstención vuelva a reiterarse o crecer en los próximos escrutinios municipales, a pesar de esa enorme cantidad de candidatos que postulan para acceder a un cargo remunerado en los 345 municipios del país. Una actividad, dicho sea de paso, que paga mejor y es más segura que el salario promedio que anotáramos antes y a la cual, por supuesto, no hay que dedicarle demasiado esfuerzo.

La propia Ley Electoral que se dictaron las cúpulas políticas legitima ciertamente esta abstención y la erige como una contundente expresión del malestar general de la población. Nadie debiera interpretar la no concurrencia a las urnas como una falta de madurez cívica o desdén de los chilenos respecto de la situación de nuestro país. De otra forma no se entenderían las multitudinarias concentraciones y marchas a lo largo de todo el país demandando cambios en la educación y en tantos otros temas, a los cuales se suma ahora el repudio nacional contra el sistema previsional vigente a fin de que sea reemplazado por uno solidario. No se entendería, tampoco, que en pocos meses la organización NOP+AFP haya obtenido un amplio reconocimiento y una capacidad de convocatoria muy por encima a las de todos los partidos y agrupaciones sindicales. Y que por tercera oportunidad haya logrado la participación de cientos de millones de chilenos en todo nuestro territorio y que, por lo además, se aprestan a un Paro Nacional, como a nuevas y más contundentes demostraciones públicas de su indignación.

Con ellas, se asume que será de responsabilidad de los propios chilenos movilizados la posibilidad de un cambio, de un verdadero salto a un régimen democrático y de justicia social. Después de 27 años de engaños, fraudes y, lo peor, de ese bochornoso vuelco

de tantos progresistas del pasado que se rindieron a la herencia de la Dictadura, además de encantarse con los pocos espacios de poder que les brinda la Carta Fundamental de Pinochet y este régimen tutelado por los empresarios y las Fuerzas Armadas. Vigilado, como sabemos, por el Tribunal Constitucional, la Casa Blanca y las organizaciones financieras internacionales.

Ante el completo desdén de la Presidenta de la República y de su gobierno a la demanda de los trabajadores y pensionados del país, nos parece notable y digna de encomio la convocatoria de NO+AFP a desafiliarse de aquellas entidades previsionales extranjeras que recaudan utilidades siderales con los ahorros previsionales de todos los trabajadores chilenos. Podríamos decir que con esta iniciativa se da un paso contundente a la justa resistencia pacífica de un pueblo hartado de ser burlado y que tiene en sus manos la posibilidad de derrumbar un sistema injusto y antipatriótico. Desde el momento que facilita la emigración de ingentes recursos al extranjero a través de estas empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York y profitan de uno de los más suculentos negocios especulativos del mundo. Desde luego, mejor que cualquier inversión productiva.

Podríamos decir que las AFP tienen sus días contados si esta masiva desafiliación es exitosa y el Estado es forzado a hacerse cargo de estas multimillonarias reservas que, de administrarse de otra manera, podrían rentarle al país, junto con mejorar sustantivamente las pensiones de los chilenos de la Tercera Edad. Cuando se nos advierte con mucho fundamento que ya con la emigración hacia los fondos "E" del sistema y, ahora, con esta desafiliación, los ahorros previsionales quedarían mucho mejor resguardados ante cualquier riesgo.

Una rebelión social que puede marcar el principio del fin no solo del sistema previsional sino de la interminable y escandalosa posdictadura.

SEGUNDA PARTE

Alocuciones matinales en
Radio Universidad de Chile

Necesario reconocimiento a la Revolución Cubana

Es imposible soslayar que en América Latina está en desarrollo una de las más importantes noticias de los últimos años, cual es la visita del presidente de los Estados Unidos a La Habana, después de 50 años y décadas de confrontación entre ambas naciones. De resultados muy inciertos todavía, parece inevitable que con esta visita a Cuba las relaciones entre ambos países van a continuar mejorando, y que lo más previsible sea que la poderosa potencia imperial levante el bloqueo o el embargo a la Isla. Sin embargo, todo indica que el régimen castrista tenga que abrirse a muchos cambios relativos a su economía y sistema político. Pero ¡vaya que inmenso triunfo es para la Revolución Cubana que haya sido Estados Unidos el que terminó por desahuciar su política de agresión, reconocer su fracaso en las hostilidades y sacar, por ejemplo, a Cuba de la lista de naciones que fomentaban el terrorismo en el mundo! Una calumnia que el propio Barack Obama se encarga hoy de desacreditar totalmente.

Para los nostálgicos de la revolución es posible, sin embargo, que Cuba no sea más el país que se conoció y rápida o lentamente cambie mucho, a la luz de la gravitación que volverá a tener Estados Unidos en la vida de este país. Pero también será para Cuba una oportunidad de demostrarle al mundo que su revolución no fue en vano; que los éxitos de ella están a la vista en el estándar alcanzado

en lo educacional, en la salud, en la cultura y el desarrollo del deporte, por ejemplo. Porque si se compara a Cuba con los países que habría que compararlo, su nivel de vida y desarrollo por cierto está muy por encima de la realidad de los otros países caribeños.

Tarde o temprano, toda la América Latina tendrá que agradecerle a Fidel Castro y a Cuba haber actuado como freno a las aspiraciones imperialistas en su llamado “patio trasero”. El haber alentado procesos de cambio en favor de la justicia social y la equidad entre las naciones. Por haber demostrado una inigualable dignidad política y moral que hoy debe ser reconocida por Barack Obama con esta visita que sigue a la de dos pontífices, por lo demás, y a la de una cantidad ‘impresionante de jefes de estado que, más allá de sus diferencias, supieron reconocer la prestancia de los gobernantes cubanos y sus consabidos éxitos, pese al criminal bloqueo del país más poderoso de la Tierra.

En esta hora tan importante para Cuba ¿cómo no reconocer su enorme aporte a la lucha de los chilenos en contra de la dictadura de Pinochet, cómo no agradecer su generosa hospitalidad a miles de compatriotas exiliados en la Isla, cómo no valorar su apoyo político, moral y militar que nos fueron tan necesarios. Y que fueron tan indispensables y oportunos también en otros países de América Latina, del Asia y del África, hasta donde extendió su compromiso con la liberación de todos los oprimidos de la Tierra. Como que el propio Nelson Mandela en una de sus primeras visitas al extranjero viajara a Cuba para agradecer a este país y a Fidel Castro por su enorme y generosa solidaridad. Mientras estuvo encarcelado por el régimen segregacionista.

Es justo celebrar la resolución de Obama de visitar Cuba hacia el final de su gobierno y desafiando muchas oposiciones y visiones cortoplacistas... aunque le queda dejar sin efecto el bloqueo, liberar a los prisioneros de Guantánamo y abrir las puertas para que Estados Unidos libere en favor de Cuba este enclave militar

que mantiene en la Isla para violar, como se sabe, sistemáticamente los DDHH fuera de su territorio.

Él y los líderes cubanos nos están demostrando capacidad de liderazgo, visión de estado y altura de miras: justamente los atributos que nuestros gobernantes no han sido capaces de demostrar durante la posdictadura, arrodillados como estuvieron todos nuestros gobiernos a los dictados del Departamento de Estado Norteamericano. Lejos, incluso, de demostrar una mínima gratitud por todo lo que hizo Cuba por nosotros y por esta enorme fila de políticos que recibieron su apoyo, acogida y recursos económicos, para luego en el gobierno y el parlamento volverle la espalda.

No les quepa duda que ahora, nuestro Canciller como tantos otros van a celebrar esta visita del Presidente de los Estados Unidos a Cuba, después de haber mantenido un silencio cómplice y un desdén grosero ante las serias dificultades vividas por ese país en los últimos años, pero que afrontara con una virtud de la que carece nuestra política exterior: dignidad.

(4 de marzo, 2016)

Las izquierdas bajo sospecha

La corrupción es casi tan antigua como la política. Prácticas como la del cohecho, los sobornos y el pago de coimas han estado adheridos desde siempre al ejercicio del poder y han caracterizado, por sobre todo, a los gobiernos de derecha, elegidos por los empresarios o terratenientes, cuanto apoyados por las grandes compañías internacionales. Desde los albores de nuestra institucionalidad republicana se sabe de la forma en que se sobornaba a los campesinos para obtener su voto, así como se asume por todos la influencia que ha tenido el dinero en la renovación de nuestros gobiernos y parlamentos, así como en los dictámenes de los tribunales.

Los favores de las autoridades a la población civil siempre ha estado intermediada por el pago de coimas y, si bien FF AA y policías, ha sido más castas que otras en el continente, lo cierto es que ahora no se aprecian diferencias mayores, cuando ya es corriente descubrir militares en gruesos actos de apropiación ilícita de recursos públicos, Carabineros en el robo de autos y asaltos, como políticas civiles involucrados en el narco o micro-tráfico de estupefacientes.

Desde siempre se ha acusado a los gobiernos de derecha de ser ladrones, de enriquecerse al alero del poder, de legislar en favor de sus intereses. Tanto así que una de las mayores promesas de las izquierdas haya sido actuar con probidad, favorecer los intereses del pueblo, asumir la política como una vocación de servicio. Los grandes referentes políticos de la izquierda eran casi siempre figuras morales, incorruptibles e infatigables luchadores que viven y mueren sin haberse enriquecido ilegítimamente.

El caso de Nelson Mandela posiblemente sea el más cercano y contundente en tal sentido, así como se admira la sobriedad y sencillez del ex presidente Mujica en Uruguay, y hasta Fidel Castro, en el ocaso de su existencia, recibe el reconocimiento de dos pontífices que lo visitan y ahora luego del propio Presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, en los últimos años también los líderes de izquierda de América Latina han caído en sospecha y son imputados por graves actos de corrupción e indecencia. La esperanza que despertó el partido de los trabajadores en Brasil y de su líder Lula Da Silva ya vemos que ha sido frustrada y que, hoy, millones de brasileros salen a las calles para demandarle a la Presidenta Rousseff que deje el gobierno, al mismo tiempo que el ex presidente Lula sea procesado y condenado por ese enorme escándalo de Petrobras que colaboró al desmoronamiento de la confianza popular hacia el PT. Sobornos a parlamentarios desde el Ejecutivo, enriquecimien-

to personal y un cúmulo de acusaciones que, lo más posible, terminen sepultando la esperanza de los pobres y provocar el retorno de la derecha o el populismo al gobierno brasileiro.

Acusaciones severas también en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia en contra de la solvencia moral de sus líderes que, en la mayoría de los casos, buscan perpetuarse en el poder, como lo quería Pinochet en Chile y tantos otros caudillos derechistas en todo nuestro continente. Sin detenernos mucho en los socialdemócratas o socialistas europeos que terminaron comportándose igual que las derechas, enriqueciéndose en el poder y renunciando muy luego a sus idearios y promesas, como el más corrupto e inconsecuente de todos: Felipe González. Que, además, de su voracidad por el dinero terminó reprimiendo a los opositores como los más feroces gobernantes de derecha.

Y Chile, por cierto, no ha sido una excepción con los sobornos, por ejemplo, del ex yerno de Pinochet a importantes políticos, digamos vanguardistas. En operaciones que, además de transgredir las disposiciones tributarias, contienen la repugnante colusión de éstos con sujetos como Julio Ponce Lerou y su gerente Contesse, dedicados a repartir dinero en coimas y sobornos a fin de obtener lucrativas concesiones mineras y llegar a redactar de puño y letra las leyes de la República durante toda esta posdictadura que les ha permitido enriquecerse más que durante el régimen militar. Un Ponde Lerou que, además de inescrupuloso, debiera estar condenado por sus horrendas acciones criminales en la Araucanía después del Golpe Militar de 1973.

Dineros para una fundación socialista y al mismo tiempo para el senador de la UDI Pablo Longueira. Boletas y facturas pagadas para la candidatura “progresista” de Marco Enríquez Ominami que hizo campaña ‘presidencial, como se sabe ahora, arriba de un yet proporcionado por otra corrupta empresa brasileira, luego del apoyo que consiguiera del mismo Lula da

Silva. ¡Tres mil dólares por hora de vuelo durante tres meses y sin rendir un peso al Servicio Electoral por este servicio...! Mucho más que millonarios recursos del propio Soquimich para los operadores políticos de la última candidatura presidencial de Michelle Bachellet que al menos en el mundo es considerada de izquierda, aunque los chilenos sepamos que su gobierno rinde culto todavía a la Constitución de Pinochet, al modelo económico neoliberal ultracapitalista que todavía nos rige después de 26 años de pos dictadura y dos de la propia gobernante que en las encuestas coincide un 70 por ciento de reprobación.

Sabemos que el cohecho y los sobornos puestos en una balanza tal parece que todavía comprometen más a la derecha que a los llamados izquierdistas. Pero esto, como decimos, no constituye una novedad: los gobernantes y parlamentarios de derecha siempre han estado al servicio de los grandes empresarios e inversionistas extranjeros. Siempre han tenido apetito por los recursos públicos y, desde siempre, buscan en su paso por La Moneda y el Congreso Nacional enriquecerse y dejarle una buena caja electoral a sus hijos y nietos para que los hereden en los cargos públicos.

Lo más escandaloso es lo que sucede con los más rabiosos jacobinos del pasado, por la nula consistencia moral que nos demuestran, después de hacer gárgaras con las palabras cambio y revolución, y una vez en el poder actúan con la misma voracidad que llevó a Nestor Kirchner a decir que “para hacer política había que hacer dinero”; o la que llevara a un viejo dirigente sindical del PRI, en México, a decir que “un político pobre era un pobre político”. Vaya que sería conveniente que a los propios ex presidentes de la Concertación se les hiciera una auditoría para comprobar cuánto tenían y cuánto tienen hoy y sus familiares en bienes inmuebles, fundaciones y otras especies. Para saber cuánto reditúan casos como el MOP Gate y otros como Caval, en estos días. Estamos seguros que nos encontraríamos al menos con una sorpresa o grave constatación de enriquecimiento ilícito.

Ojalá que las investigaciones que hoy comprometen a los ejecutivos de Penta, Soquimich y otras empresas pudieran en algún momento llegar a transparentarnos lo que han ganado lobistas tan audaces como Enrique Correa Ríos, otrora un político radical del Mapu y ahora un multimillonario.

Pero quizás la más cínica y repugnante de las explicaciones sea aquella que fuera y dentro de Chile le quiere imputar a la prensa, a los Estados Unidos, como a otras “fuerzas del mal” la desacreditación que hoy afecta a tantos líderes y partidos de izquierda devenidos en tramposos al abrigo del poder y de las redes de apoyo continental que vemos que también existen en la Izquierda. Cuando además de dinero se creen merecedores de una vida cada vez más holgada para vivir en el lujo, rodearse de amantes y hasta “tirar hijos al mundo”. Tal como lo hacían los Trujillo, Batista o los Somoza.

Sabemos que la prensa de derecha miente y calumnia; sabemos que hay diarios y agencias internacionales interesadas en desacreditar a todos los líderes y dirigentes izquierdistas, pero en el mundo de hoy una injuria no se sostiene sin pruebas y fundamentos por mucho tiempo.

Desgraciadamente, vamos comprobando que la corrupción ya se ha instalado en casi todos los gobiernos de izquierda y parece completamente asentada también en los partidos políticos chilenos, como en no pocas organizaciones sociales. Que no es algo que solo se le ocurra al imperialismo, a la derecha o a sus medios abyectos.

Por lo mismo es que los dirigentes políticos y sociales de izquierda debieran cuidarse más y asumir aquello de que “cuando no se vive como se piensa, se termina pensando como se vive”. Como ha ocurrido durante esta larga transición a la democracia que ahora no es nada más que una posdictadura. Que recuerden esa magnífica invocación de Charles Peguy, en cuanto a que “la revolución es moral o no es revolución”.

(21 de marzo, 2016)

Nuestro “diligente” Fiscal Nacional

Muy saludable nos parece la discrepancia de algunos fiscales con lo planteado por su superior jerárquico, el Fiscal Nacional, en cuando a continuar sus investigaciones y formalizar a políticos y empresarios sin esperar las querellas del Servicio de Impuestos Internos. En un afán sincero de justicia, efectivamente es absurdo confiar que una institución del Estado, como Impuestos Internos, se proponga acusar a todos los infractores tributarios cuando sabemos que sus decisiones dependen de la voluntad del gobierno de turno. En muchos casos realmente poco interesado de que se conozcan y se sancionen los despropósitos de camaradas o correligionarios.

Los seis meses que el Servicio de Impuestos Internos retuvo los antecedentes que inculpaban al ex senador Carlos Ominami fueron determinantes para que éste después fuera sobreseído por prescripción del delito. Una de las primeras y flagrantes argucias y vergüenzas judiciales destinadas a exculpar los sobornos y cohechos de la “clase política”.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a no dudarlo, desea que estos procesos a la política y a al empresariado terminen lo antes posible, así sea aplicando prescripciones y otros recursos que impidan llegar al fondo de las investigaciones, cuanto sancionar a los responsables de defraudar al Fisco, violar la Ley Electoral y, sobre todo, afectar severamente la confianza pública. Recordemos que incluso antes de resultar designado en el cargo por Michelle Bachelet (y acaso para asegurar tal nombramiento), Abbott había afirmado que si no había querrella de Impuestos Internos no correspondería ninguna acción penal contra estos infractores. Pero al menos dos fiscales, como observamos, se proponen avanzar en sus investigaciones, así como solicitar, incluso, a instituciones extranjeras información que pueda configurar o consolidar los des-

propósitos cometidos casi por todo el espectro partidario, como por las tres últimas candidaturas presidenciales.

Lo encomiable es que el propio Presidente de la Corte Suprema llamara en los últimos días a que se investigue todo, se aclaren totalmente las infracciones y se sancione a los responsables, a objeto, justamente, que la verdad y la justicia puedan colaborar a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, como en la propia y desmirriada política. Loable es, asimismo, la reacción del presidente de nuestro máximo tribunal en contra de esa reforma al Código Penal, aprobada por el Senado -a solicitud de La Moneda- y que se propone sancionar las filtraciones judiciales hacia la opinión pública. Iniciativa que ha sido tildada como una verdadera mordaza a la libertad de prensa y que, para colmo, se proponía encarcelar a quienes cumplieran con su deber de informar. Felizmente ha causado tanta repugnancia esta iniciativa que ya tiene muy pocas posibilidades de continuar su tramitación legislativa y aprobación, luego de la amplia oposición de los periodistas y medios de comunicación, además de algunos políticos que, aunque reaccionaron muy tardíamente, finalmente se han comprometido a corregir esta enmienda, o simplemente descartarla.

No podría ser más absurdo que los mismos que aprobaron durante el gobierno de Lagos suprimir las penas de cárcel para los empresarios, que se coludieran para defraudar a los consumidores, en este caso se propusieran sancionar con prisión efectiva a los comunicadores. Claro: esta enmienda de seguro se proponía inhibir las indagaciones de la prensa sobre todos estos escándalos de colusión entre la política y los negocios, en el mismo propósito del Fiscal Abbott y, por supuesto, de toda esa clase política que se siente acosada ahora por tales indagaciones que, comprueban, de paso, cuán feble es nuestro sistema institucional, como precaria nuestra democracia.

Sería bueno descubrir, ahora, en que piso o repartición de La Moneda se concibió una iniciativa tan nefasta y que tanto ha perjudicado la imagen de la propia Jefa de Estado; cuando los escándalos de corrupción también han involucrado a su familia y al que era su entorno político más cercano y dilecto, cuando varios de sus recaudadores electorales y operadores están a punto, también, de ser formalizados. Descubrir quién o quiénes estuvieron en una iniciativa que contradice tan severamente la vocación republicana y democrática que dicen tener los moradores de nuestro Palacio Presidencial, cuando hasta la Asociación Nacional de la Prensa que reúne a los patrones de los medios de comunicación ha llegado a determinar que esta norma puede “afectar gravemente la libertad de informar y el derecho de las personas a ser informadas sobre los hechos de interés nacional”. Mientras no se sancione políticamente a quienes promovieron este nuevo dislate oficial deberemos suponer que éste contó con la venia de la Presidenta y de su ministro del Interior.

Debemos anotar, en todo caso, que este hecho no es tan aislado del manifiesto propósito gubernamental de frenar o alterar algunos de sus rumbos reformistas, además de proponerse, en la segunda mitad de su administración, consentir con una derecha opositora que le demanda más mano dura, por ejemplo, en aplacar el descontento de la Araucanía y sujetar los cambios en favor de un crecimiento económico. Como puede deducirse de los esfuerzos del ministro Eyzaguirre con su eufemística expresión de ayer de “consolidar reformas antes de impulsar nuevos cambios” en el objetivo de agradar a los integrantes del Foro Empresarial de Icare en la Casa Piedra, un espacio que lleva un nombre muy acertado y atingente a la dureza de corazón de los empresarios que la frecuentan. Tan renuentes, como se sabe, a cualquier desprendimiento en beneficio de la suerte general del país y de los más pobres. Siempre amenazando con llevarse al extranjero sus inversiones si es que la patria les pone algún freno a su voracidad.

Como puede deducirse, también, de la actitud mendicante de la Presidenta y se su canciller Heraldo Muñoz en Estados Unidos para clamar por inversiones que perfectamente podría acometer nuestro propio país con esas multimillonarias reservas monetarias estatales depositadas en bancos norteamericanos. Demostrando, con ello, su servil actitud hacia el capital foráneo, su encantamiento neoliberal, así como su tan escaso patriotismo y voluntad de soberanía. Cuando se sabe que todas estas inversiones, en la práctica, significan renunciar a nuestros yacimientos y recursos naturales, afectar gravemente nuestros ecosistemas y pisotear el derecho a una vida libre de contaminación de nuestras poblaciones afectadas por toda suerte de emprendimientos ecocidas.

Vaya qué curioso resulta en estos días las bravatas de nuestro Canciller y advertencias de la propia Presidenta a las demandas de Bolivia y de Evo Morales, al tiempo que claman en Washington para que los empresarios de ese país vengan a enseñorearse sobre nuestra soberanía minera, forestal y marítima. Dispuestos ahora, en tal propósito, a frenar los cambios, consolidar confianza entre los grandes empresarios y mantener el sistema previsional, el de las isapres y postergar para otro gobierno la posibilidad de una Nueva Constitución. Después de administrar por 26 años todo el legado que les dejara Pinochet. Ansiosos, asimismo, que el presidente Obama alcance a venir a nuestro país, antes que termine su gobierno y después de haber visitado Cuba y Argentina, lo que les cayó como un balde de agua fría a toda nuestra política rastrera. Un objetivo que muy probablemente no consigan cuando el gobierno estadounidense y el propio presidente mulato saben que esto es innecesario, cuando tienen en Chile al país más dócil de su patio trasero y, en su gobierno, los más macizos heraldos del imperio.

(1 de abril, 2016)

Nuestro máximo Tribunal ¿Constitucional?

En expresiones paralelas, tanto la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, como su ministro del Interior, les aseguran al país que buscarán todas las opciones que la Ley les permita para contrarrestar el fallo del Tribunal Constitucional que, como se ha indicado, afectó letalmente la Reforma Laboral. La adversa resolución de este tribunal conformado políticamente le hacen creer a ambas autoridades que dentro del ordenamiento institucional actual se pueden alcanzar objetivos de cambio que, entre otros, se propongan, como han dicho, emparejar la cancha en las relaciones de patrones y trabajadores. Una extraña pretensión cuando después de tantos meses se discutió y se aprobó una nueva legislación laboral en el Congreso Nacional que fuera aniquilada en pocos días por este Tribunal erigido como la entidad superior del Estado, por sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Uno no sabe si es candidez o hipocresía la de quienes piensan y pensaron que sería posible consolidar una auténtica democracia, como un nuevo modelo económico social bajo la camisa de fuerza institucional que la Dictadura le ha dejado a estos 26 años de posdictadura, sin que se haya podido materializar las grandes reformas prometidas por sus gobiernos y comprometidas por el conjunto de la clase política. Por más votos y mayoría que haya alcanzado el oficialismo en el Parlamento, ya se ve que a la minoría de derecha le queda siempre la posibilidad de recurrir a este Tribunal Superior, cuya correlación de fuerzas favorece las posiciones retardatarias y la voluntad de que la herencia pinochetista se prolongue en el tiempo.

Después de tantos traspies en este Tribunal, lo cierto es que quienes dicen gobernar en Chile más bien debieran reconocer que bajo las leyes actuales ha sido imposible en tanto tiempo lograr la profundización de la Democracia, disminuir los niveles de inequidad económica y social, como emprender reformas serias y consistentes, incluso en materia educacional.

Lo que uno esperaría es que la Jefa de Estado enfrentara las cámaras y micrófonos para desahuciar toda posibilidad de cambios sin que se derribe primero la Constitución de 1980 con el apoyo del pueblo movilizado, una Asamblea Constituyente y una dura interpelación a los sectores de derecha que siguen apegados a las normas heredadas y que, más allá, de imposibilitar una nueva legislación laboral, harían imposible atacar el sistema de APPs, de Isapres, así como acabar los privilegios e impunidades que todavía favorecen a las Fuerzas Armadas, a los poderosos medios de comunicación que estuvieron postrados ante la Dictadura y, por cierto, a la clase empresarial que en estos 26 años de posdictadura han acrecentado la concentración económica. Apoderándose, todavía, de más empresas fiscales y estratégicas, además de consolidar utilidades escandalosas en desmedro de los salarios justos de los trabajadores.

Sabemos que hay muchos políticos romos y sin visión, así como torpes en su actuar (como lo prueban las chambonadas de la Nueva Mayoría ante el Servicio Electoral), sin embargo a esta altura solo puede convencerse uno que aquellos que han llegado al gobierno y están empoderados en el Poder Legislativo terminaron encantándose con el ordenamiento jurídico vigente, con el modelo neoliberal de la Dictadura y, además de ello, con el estatus que les permite ocupar los más altos y excelentemente bien remunerados cargos de la administración pública. Perpetuarse en ellos o rotárselos incesantemente y, para colmo, ser sobornados y corrompidos por los empresarios más poderosos del país, como lo prueban las centenas de boletas y facturas falsas cobradas por los operadores políticos de legisladores y candidatos de todos los colores políticos que integran el duopolio gobernante que Pinochet dejó establecido para heredarlo y darle continuidad a su legado.

Es así como ahora se nos anuncia desde el Ministerio Público que vienen nuevas formalizaciones producto de las colusiones político empresarial es descubiertas por los medios de comunicación

e investigadas por los fiscales que, de no precipitarse también por el tobogán de la corrupción, podrían dejar al descubierto todo este entramado de relaciones espurias que, en definitiva, se oponen a toda posibilidad de cambio, cuando el estiércol alcanza a la Moneda, a los legisladores, los partidos políticos y, desde luego (y aunque todavía no se destape todo) a los municipios del país.

Los apellidos de la rancia derecha, con la de los más advenedizos en materia de defraudar al fisco y asociarse o familiarizarse con los más altos delincuentes de cuello y corbata empiezan por fin a aparecer en las investigaciones judiciales, pero todo sabemos cómo hasta los más mediáticos fiscales se dan maña para seguir postergando los encauzamientos a determinados políticos. O como el propio Servicio de Impuesto Internos demora sus querellas a objeto que altos implicados, como el exsenador Carlos Ominami, empaten el tiempo para acogerse a prescripción. El mismo Caso Caval se desperdiga en aristas para soslayar la responsabilidad del hijo y la nuera de la Presidenta. Así como tarda las imputaciones que debieran hacerse al ex ministro Rodrigo Peñailillo y otros políticos que habrían recibido recursos de las gestiones irregulares de un señor Martelli, encargado de recaudar dineros para la precampaña presidencial de la actual Jefa de Estado.

Quizás resulte ahora más fácil resolver en Brasil que en Chile cómo el dueño del Partido Progresista consiguió un lujoso yet para acometer su última campaña presidencial. Quizás haya que ir a Venezuela, a Marruecos y a otros países que han contribuido a varias cajas electorales y a donde constan innumerables viajes de parlamentarios y candidatos chilenos en los últimos años.

De esta forma, si sirve de algo el proceso constituyente de la Presidenta de la República sea para que el pueblo compruebe la impostura de tal cometido, el cinismo o la candidez de quienes todavía lo defienden, además de tomar conciencia de que solo con su organización y movilización pueden alcanzarse los cam-

bios y el término de un régimen político, económico y social que, además de injusto y excluyente, ha devenido en corrupto.

La desvergüenza, estimados auditores, llega a tal extremo que hoy en el diario El Mercurio, por ejemplo, el expresidente del llamado Tribunal Constitucional, Raúl Bertensen, le advierte a las autoridades que sería improcedente reponer mediante vetos presidenciales lo que le suprimió a la Reforma Laboral este equipo de operadores políticos que se asume como Tribunal, y se constituye en la instancia superior del Estado. Razonable sería que los chilenos movilizados le hicieran imposible a estos falsos jueces seguir reuniéndose y ocupando uno de los edificios más amplios, bien dotados y lujosos de toda la administración pública.

Por otro lado, estimados auditores, imaginémonos el ridículo que haría nuestro gobierno y la mayoría parlamentaria que aprobó la reforma Laboral de alentar a los trabajadores para que recurran a instancias jurídicas internacionales para apelar de lo resuelto por el Tribunal Constitucional y la minoría opositora del Poder Legislativo.

Es cosa de imaginarse el ridículo que haría nuestro país de prosperar la ocurrencia del diputado socialista Osvaldo Andrade. Cuando lo habitual es que se recurra a estos tribunales internacionales para oponerse a los actos de los gobiernos cuando estos violan pactos o tratados internacionales, pero no a lo obrado por las minorías parlamentarias o de una entidad como el Tribunal Constitucional cuyas facultades derivan de la constitución ilegítima en su origen y contenido, como lo aseguraban los actuales moradores de la Moneda y del Parlamento que hoy juran respetarla. Tal iniciativa solo serviría para que el mundo comprobara la feble democracia en que vivimos donde el Gobierno y el Poder Legislativo son rehenes de un grupo de supuestos jueces, de las entidades patronales y del pinochetismo legislativo.

(29 de abril, 2016)

Asesinos y ladrones

En un país en que las cúpulas empresariales han dejado al desnudo su corrupción; en que buena y transversal parte de la clase política se deja sobornar por los grupos fácticos; en que los medios de comunicación más poderosos se someten a los intereses de sus dueños o sostenedores publicitarios; en que hasta sacerdotes y obispos han incurrido en graves delitos, era lógico pensar que los militares no serían una excepción. Menos todavía cuando se acostumbraron a ejercer el poder discrecional y los gobernantes, por años, han estado consintiendo con todas sus demandas, presiones y privilegios.

El descubrimiento del enorme fraude al fisco del Ejército con recursos de la Ley Reservada del Cobre es lo que nos faltaba en esta retahíla de putrefacciones, cuando la sospecha no solo se ha instalado en los mandos medios o bajos de los militares, sino en sus mismas cúpulas. De esta forma es que ahora el país demanda conocer la forma en que —en apenas cuatro o cinco años— se ha enriquecido el ex comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba. Quien fuera nombrado por la propia presidenta Michelle Bachelet en el cargo, casi al finalizar su primer gobierno. Las primeras indagaciones de su patrimonio, sólo en Chile, hablan de haber acaudalado más de dos mil millones de pesos en inmuebles y automóviles de lujo, sin que se sepan todavía sus depósitos bancarios o de descubran otra suerte de riquezas.

Difundidas las denuncias, sin embargo, hasta ahora no hay reacción o explicación alguna del general Fuentealba, quien durante su trayectoria castrense llegó a percibir como sueldo en los últimos años no más de cuatro millones de pesos mensuales, aunque se sabe que por la naturaleza o las granjerías de su cargo tenía acceso a un elevado monto para gastos reservados. Será el Servicio de Impuestos Internos, ahora, la Contraloría General

de la República, la propia Policía de Investigaciones las que se encarguen de develar el monto de esta fortuna, así como su origen. Pero la sospecha ya está instalada y se supone que la proveniencia de esos recursos y de tantos otros hay que explicársela, sobre todo, en la libertad que han tenido las instituciones castrenses para administrar recursos destinados a la adquisición de armamentos. Esto es, en el ejercicio de una actividad en que suelen abundar sobornos y otras tentaciones de parte de los grandes proveedores o traficantes de armas.

¿Podríamos abrigar la esperanza o la ilusión en que estos desfalcos puedan ser esclarecidos y sancionados ejemplarmente? El general Fuentealba y los otros jefes militares saben que en estos despropósitos se configura verdaderamente, además, el delito de traición a la patria, la posibilidad de que hasta la pena de muerte pudiera serles aplicada, cuando el Código de Justicia Militar chileno todavía contempla esta posibilidad. Porque es evidente que todo peso robado o malversado en estos casos implica recursos que fueron sustraídos a los gastos de seguridad de todo el país y de la nación. Pero, por supuesto, hay que dar por descontada esta posibilidad, en la certeza de que los tribunales castrenses controlados por las mismas Fuerzas Armadas jamás aplicarían una sanción que tienen reservada solo para las ejecuciones sumarias a los opositores políticos civiles, en esos consejos de guerra que instalaron y asesinaron en los primeros años de la Dictadura Militar y en tantos otros cuartelazos de nuestra historia.

Un auditor me decía anoche que estaba totalmente repugnado por el país en que estamos viviendo, que ya le era molesto leer o escuchar noticias en las que campean la corrupción en todos los niveles y actividades, además del desarrollo impresionante del crimen y de la violencia que son acicateados, justamente, por el pésimo ejemplo que ofrecen las autoridades políticas, los empresarios y, ahora, los propios militares y no pocos policías.

Porque, en efecto, traicionan también a la patria los parlamentarios que reciben coimas a propósito de las decisiones que deben tomar en el ejercicio de su labor legislativa. Traicionan a la patria los gobiernos que instruyen a los servicios públicos para que soslayen las denuncias que puedan ejercer en contra de políticos que les son afines y estos, por ejemplo, puedan salvarse mediante la prescripción de sus gruesos delitos tributarios. Así como traicionaron a la Patria los gobiernos de la pos dictadura que les permitieron a las fuerzas armadas mantener privilegios previsionales y de salud que resultan irritantes para la población civil estafada cotidianamente por las AFPs y las isapres. Tal como traicionan a la patria los titulares de la Contraloría General de la República y otros organismos fiscalizadores que *motu proprio* (o instruidos desde La Moneda) dejaron sin controlar las operaciones de los recursos de la Ley Reservada del Cobre, que le arrebató al país el 10 por ciento de todas las ventas de Codelco. Cuando, además, el precio internacional del metal rojo pasa por su peor momento.

Veremos qué dice, ahora, el locuaz ex contralor Ramiro Mendoza de quien, se dice, aprobaba sin revisar los estados de cuenta del Ejército que, según lo establecido por la Ley Reservada del Cobre, debía sancionar. Curiosa Ley, por lo demás, heredada también de Pinochet y sacralizada en el secretismo por los seis gobiernos que le siguieron, cuando recién ahora se descubre su texto, gracias a la indagación pertinaz del periodista Mauricio Weibel.

Al menos de negligencia grave debemos culpar a los funcionarios de gobierno que nombraron al general Fuentealba como Comandante en Jefe sin indagar en nada la situación patrimonial de éste, según lo reconociera ayer el ex ministro de defensa Francisco Vidal. Más todavía cuando el mismo secretario de estado es convocado por el propio Fuentealba para integrar un comité asesor del Ejército, enseguida que dejara el cargo del Ministerio.

No veo porqué causaran tanto estupor, entonces, aquellos políticos que emigraron del Fisco a la actividad privada; concre-

tamente –por ejemplo– desde el Banco del Estado al directorio del principal banco privado, como lo hizo Jaime Estévez a la entidad de Andrónico Luksic, quien le otorgó un millonario crédito al empresario que adquirió esta entidad financiera... O de los múltiples políticos que se trasladaron del Ministerio de Educación hacia las universidades y establecimientos privados de enseñanza, justamente para lucrar de esta actividad. Pienso que es igualmente sospechoso e impropio que un ex ministro de Defensa emigre en tan poco tiempo a asesorar a la principal rama castrense y al propio Comandante en Jefe nombrado pocos meses antes por su gobierno.

No vamos a decir que confiamos en la acción de la Justicia respecto de la situación del general Fuentealba y de otros presuntos defraudadores y traidores a la patria. Sería hipócrita hacerlo en el país de las impunidades, y en que los delitos de los empresarios, de los políticos, medios de prensa, de los jueces y, ahora, de los militares están tan concatenados. Solo confiamos, a esta altura, en el juicio popular: en que la población acumule justa ira y castigué con su desdén y, más temprano que tarde, con su activa movilización a todos los culpables. A quienes defalcan al Estado y a quienes los protegen desde las instituciones públicas y la política.

Ya se sabía que Pinochet, además de asesino, era ladrón. Que regaló arbitrariamente empresas del estado a sus parientes y amigos y que legó enormes propiedades a su viuda Lucía Hiriart en Cema Chile y que ella lo ha convertido en dinero fresco para sus herederos. Cuestión que los gobiernos de la posdictadura, por cierto, sabían, pero prefirieron hacerse los lesos.

(3 de mayo, 2016)

Mande fotos, Presidenta!

Ayer tuvimos la ingenua esperanza en que la Presidenta suspendiera su viaje a Europa o al menos ella se abstuviera de cumplir con esta gira por el norte de Europa. Pensamos con ingenuidad, que lo que estaba sucediendo en Chiloé y el enorme interés nacional que ha causado la tensa situación de una zona en plena rebelión popular, con sus accesos bloqueados y las enormes y graves consecuencias de todo esto, iban a obligar a nuestra Primera Mandataria a permanecer en el país. Supuse erróneamente, asimismo, que al menos los parlamentarios que la acompañaban se obligarían a bajarse del avión, habida cuenta del costo político que le causara a un senador de la Democracia Cristiana haber viajado a presenciar un partido de rugby en medio de la catástrofe de Copiapó hace un año.

Pero ¡nada! , nuestra Presidenta se encuentra en Europa para concurrir al llamado *Chile to day* y participar de todo tipo de reuniones, así como recepciones y banquetes con la realezas sueca y británica. El diputado Andrade no perdió la plata invertida en el arriendo de su frac y el diputado Pepe Auth podrá volver a vestirse con el suyo que, seguramente guardaba desde que fue embajador en el país báltico, justo al otro lado del mundo.

Para un Gobierno que tiene tan alto grado de repudio ciudadano y que se revela nuevamente hoy en otra encuesta, en realidad puede ser fatal que la Jefa de Estado se ausente en estas circunstancias, cuando el conflicto de la Araucanía continúa agravándose y el malestar general del país irrumpe en manifestaciones en todo el país en solidaridad con los pescadores artesanales de Chiloé, en repudio a las acciones criminales de las salmoneras, como irritadas por la nula diligencia de los moradores de La Moneda en resolver un agudo drama social que puede ser letal para una zona de diversas actividades económicas, turísticas, cuanto para la vida y subsistencia misma de la población y su medio ambiente.

Tanto la Presidenta, como su ministro de Hacienda (el de la billetera fiscal) están lejos de Chile y el país ha quedado en manos de un ministro del Interior como Jorge Burgos, quien fuera el primero en lanzarle a los pescadores las más duras bravatas gubernamentales, advirtiéndole que por ningún motivo les daría un bono por más de cien mil pesos, cuando ya esta cifra se sido triplicada por el ministro de Economía, aunque todavía dista mucho se alcanzar la suma justa y ética demandada por quienes han perdido abruptamente su fuente de trabajo, por una marea roja que posiblemente por años impida reanudar las faenas pesqueras.

Han abandonado el país cuando a las demandas de los pescadores se han sumado otras 26 del conjunto de la población chilota que se siente discriminada por el centralismo político e incluso proclama la posibilidad de separarse, de autonomizarse del territorio nacional. Aires, sin duda, de secesión que también se han expresado antes en la Región de Magallanes, en la Araucanía y en las zonas nortinas o mineras debido a la indolencia de las autoridades que rigen el país desde Santiago y que hasta en los momentos más difíciles y tensos prefieren viajar dispendiosamente al otro extremo del mundo. Mientras se les niega a las víctimas de tales tragedias un modesto bono que no alcanza a ser ni siquiera el viático diario de cada uno de los integrantes de la comitiva presidencial.

Yo no sé qué pasaría si no estuviésemos en un año electoral, si no estuviéramos en medio de un proceso constituyente que cada día se desbarata más y va dejando en evidencia que es el conjunto de la clase política la que quiere mantener la Constitución de Pinochet, la autoridad del Tribunal Constitucional, cuyo reciente fallo sobre la Reforma Laboral encanta a los grandes empresarios, a la derecha política pero, en realidad, a no pocos integrantes de la Nueva Mayoría que, tal cual como el senador Zaldívar nos recordara ayer, juraron como senadores respetar la Carta Funda-

mental que nos rige, las leyes vigentes y heredadas de la misma y, por supuesto, la resoluciones de este Tribunal supraestatal. En una intervención televisiva en que nos advirtió a todos de que él no se va a prestar para revocar con el veto presidencial acuerdos ya tomados con sus propios votos en el Congreso Nacional. Que no se prestará para ejercer el revanchismo oficial respecto de esta Ley, a fin de anular las indicaciones que hizo la derecha en la discusión de esta iniciativa y que fueron consentidas por las bancadas de la Nueva Mayoría y por el propio Gobierno.

Tan solo este diferendo en relación a la Reforma Laboral y las naturales protestas de la CUT y de los trabajadores por la resolución del Tribunal Constitucional debieron dejar a la Presidenta en el país y a su ministro de Hacienda, más aún si se considera el riesgo de estar en manos de un Jorge Burgos que ha sido ninguneado por ella misma y de quien se sabe tiene muy poco oficio político, criterio, además de haberse esfumado la sensibilidad social que en algún momento tuvo.

Claro: el Gobierno debe tener en cuenta que ya no puede seguir aumentando mucho su desprestigio cuando a gobernantes como Dilma Rousseff, con todo lo sucedido en Brasil todavía se le otorgan algunos niveles mínimos de aprobación. Sin embargo, deben ser los partidos del oficialismo los que estén preocupados con las ausencias presidenciales y lo digo en plural –ausencias- porque aun estando en La Moneda nuestra Jefa de Estado parece alejada, desvinculada de la realidad y parece ser que lo único que le preocupara son las recepciones que le brinda el empresariado y saludar a delegaciones de cantantes o futbolistas y otros que suelen visitarla en Palacio. Después de lo abatida que quedara por el escándalo familiar de Caval, cuyas indagaciones judiciales, como las relativas al maremoto, la perseguirán hasta después del término de su gobierno.

Y todo esto ocurre, estimados auditores, en una situación de postración total de la política y descrédito de nuestras institucio-

nes. En medio de los desacuerdos del Servel con los partidos, las controversias del Ejecutivo con el Poder Judicial a propósito de haber garantizado la libertad condicional de decenas de presos, según mandata la Ley...

Y, por supuesto, en medio de toda otra escandalera de corrupciones que ahora afecta a las Fuerzas Armadas y a oficiales promovidos, no por Pinochet, sino por los gobiernos de la posdictadura, muy en particular por el mandato anterior de Michelle Bachelet. En medio, por último, de la desaceleración económica con características de recesión y aumento de la cesantía.

Todo para darse el gustito de rozarse con príncipes, princesas y monarcas e ir a demandar inversiones europeas en nuestro país para seguir hipotecando nuestra soberanía, para ofrecer inversiones en el cobre cuyo actual precio internacional, por lo demás, ya no incentiva a los capitales foráneos. Para que se instalen a contaminar nuestros mares, ríos y lagos. A talar nuestros bosques y a construir puentes que deben ser demolidos antes de inaugurarse.

Cuando Chile tienen millonarias reservas que le redeviene intereses a la banca norteamericana. Cuando desde el mismo Estado, con una constitución republicana y un sistema económico nacional y popular, podrían emprenderse muchas actividades que dieran trabajo a la población y pagaran sueldos dignos. Si es que el Estado recuperara los millonarios fondos de los cotizantes previsionales que están en manos de un puñado de APPs y ladrones. Si el Estado asumiera la educación pública y de calidad como la que tuvimos cuando éramos todavía un país pobre. Y se hiciera cargo de la salud encarecida por la especulación de la isapres y la voracidad de sus propietarios.

Todo lo cual si los socialistas e izquierdistas del gobierno siguieran comportándose como izquierdistas y socialistas y no anduvieran preocupados de incrementar sus viajes, patrimonio y relaciones sociales. (Ahora a nivel internacional). Si a los demócrata

cristianos les quedara algo del mensaje evangélico en sus propósitos. Si radicales y otros mantuvieran una mínima cuota del espíritu laico y progresista de sus líderes y gobernantes de antaño. Si los militares mostraran una pizca de afecto por Chile, el ejemplo de nuestros libertadores y no anduvieran tan preocupados siempre de conspirar, jugar a la guerra y enriquecerse personalmente a cuenta del erario nacional Demostrando una ineptitud colosal, incluso, para advertirnos de los riesgos y para salir al rescate de las poblaciones afectadas cíclicamente por los terremotos, maremotos y otras catástrofes. Como la que debieron prevenirnos en nuestros mares ahora infectados, en las altas cumbres cordilleras, témpanos y ríos arrasados por la voracidad de las empresas mineras extranjeras y las hidroeléctricas también foráneas.

Millones de dólares de la Ley Secreta del Cobre mantenida como reservada por los últimos seis gobiernos y que todavía no se gastan después de los ingentes recursos para armarnos y despilfarrar barcos, aviones y tanques que nunca se van a llegar a usar. Salvo que nuevamente apunten contra nuestro palacio presidencial y nuestra institucionalidad.

Dineros depositados para el uso y abuso de nuestros oficiales sin que tengan la más mínima disposición a que sean usados en favor de las víctimas del sur y sin que haya político alguno que se atreva a expropiárselos, junto con mandar a la cárcel a los corruptos de charreteras que se han sumado a nuestros rechonchos empresarios y cínicos “servidores públicos”

¡Mande fotos, Presidenta!

(10 de mayo, 2016)

El “membrillo GATE”

Revelación periodística de nuestra investigadora y redactora Catalina Gaete que da cuenta de otro oscuro episodio vinculado al ex comandante en Jefe del Ejército Luis Miguel Fuentealba, mientras estaba en servicio activo. Cuestión que afecta la “trayectoria irreprochable que dice haber tenido el general para salir al paso de las acusaciones que se le han hecho por enriquecimiento ilícito (fortuna de más de 2 mil millones de pesos).

Recién ascendido a la Comandancia en Jefe de la segunda división del Ejército de Santiago asumió su rol como Juez del Segundo Juzgado Militar... y en esta función emitió sentencia en la causa 975-87 que caratuló un caso de corrupción que adquirió fama en el mundo militar y que hoy la periodista revela en nuestro diario Electrónico diario.uchile.cl Un millonario fraude fiscal que involucró a 21 uniformados todos tenientes, mayores y coroneles de Ejército... Al igual que el Milico gate, los involucrados acreditaron facturas por la compra de productos como la carne, manteca, garbanzos, porotos y membrillos PERO QUE NUNCA LLEGARON A DESTINO...

Falsificaron facturas, certificados de recepción con firmas y timbres para defraudar una suma que en la época superó los 5 mil millones de pesos, recursos –desde luego- fiscales y provenientes del presupuesto militar asignado.

Recién en junio del 2007, el general Fuentealba y el auditor subrogante del Ejército, Roberto Reveco, condenaron a los 26 imputados por falsificación de documentos militares (qué gravedad), pero el delito fue atenuado con “presidio menor en su grado mínimo...”

Si hubieran sido juzgados por un tribunal civil y atendiendo a la condición de empleados públicos las penas hubieran sido mucho más drásticas y los responsables habrían quedado inhabilitados por

vida para volver a ejercer en cualquier repartición del Estado...

Pero esto no es todo: fue tan discreta la condena que 4 de los 21 militares ascendieron posteriormente hasta los grados de coronel y mayor de ejército e incluso fueron recontratados por la institución después de retirarse o jubilarse.

...Todo ello en relación al anacrónico y abusivo Código de Justicia Militar que convierte en jueces a personal uniformado dependiente y subordinado de los mandos supremos de las instituciones armadas. Sin formación jurídica alguna en muchos casos. Atribuciones que se pueden descubrir en el artículo 16 de este código que sigue prácticamente incólume y otorgándole un privilegio escandaloso a los militares, al convertirlos en jueces y parte de sus irregularidades.

¿Se puede tener presunción de inocencia respecto de los militares involucrados en tantas acusaciones, después de esta nueva revelación de la periodista Catalina Gaete, nuestra experta en materias de seguridad y asuntos castrenses? Cuando los escándalos recién asoman con el milico gate, este membrillo gate y otros tantos que se remontan a la propia operación Rayo que llevó a Pinochet con el jefe de Famae y el jefe de Finanzas del Ejército a repartirse unos dos millones de dólares, en este caso? Después de las coimas recibidas por varias operaciones de adquisición de armamentos, tanques Leopard, aviones y embarcaciones militares que involucraron también a la Fach y la Armada...

Falta de coraje del mundo político, de cada uno de los gobiernos de la posdictadura que hoy ni siquiera aprovechan el desprestigio de las FFAA para acabar con sus privilegios...

Ley Reservada del cobre y millones de dólares inmovilizados y que debieran salir al rescate de los pescadores de Chiloe y de tantos otros chilenos damnificados por los terremotos, avalanchas, inundaciones y contaminación criminal de nuestro mar... Cuando somos en el Continente el país que más gasta en armas

en relación a su PIB y sobre favorecido por la Ley secreta del Cobre, que ya no es secreta y ha sido revelada por los periodistas.

Privilegios derivados de su sistema previsional que no le entrego a los usureros propietarios de las APP las cotizaciones castrenses. Privilegios en la atención de salud, en sus sueldos, asignaciones y otras granjerías.

(13 de mayo,2016)

Huele a arreglín...

Pero a propósito de leguleyadas o resquicios legales, lo cierto es que el Tribunal Electoral le ha terminado dando la razón a la Nueva Mayoría en tu tardía y sonsa inscripción de sus elecciones primarias ante el SERVEL. Una inscripción a la que concurrió fuera de plazo la presidenta del Partido Socialista, lo que le diera argumento a la funcionaria del Registro para rechazar todo el proceso de inscripción de primarias del oficialismo. Una inscripción que posteriormente, sin embargo, ha sido acreditada por el Tribunal Electoral, advirtiéndonos que no era necesaria la comparecencia de los presidentes de todos los partidos en tal inscripción y que bastaba con sus firmas y la concurrencia de sus secretarios generales.

Por el reconocimiento de varios representantes de la Nueva Mayoría lo que es irrefutable es que al momento de concurrir al SERVEL, los partidos del oficialismo no habían alcanzado a configurar un acuerdo, por lo que se hacía necesario entonces que esta inscripción fracasara y les diera más tiempo para este cometido. Lo que finalmente consiguieron mediante el favor concedido por el Tribunal Electoral que ha quedado tanto o más acreditado que el propio Tribunal Constitucional.

Y claro uno se pregunta: ¿y si no era necesaria la concurrencia de los presidentes de los partidos a esta inscripción, para

qué fueron entonces todos los demás al Servel a cumplir con un trámite innecesario?

Y al mismo tiempo: ¿para qué llegó acezando, fuera de tiempo, al Servel la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, si su concurrencia no era necesaria? ¿Para qué se la expuso a este bochorno de llegar tarde si no se requería su asistencia?

Y, claro, una pregunta más: ¿no será que todo este episodio se trata más bien de todo un arreglín preconcebido, de un ardid político, para darle tiempo al oficialismo de alcanzar sus cada día más difíciles acuerdos? Aunque, al menos yo, creo que ya en la política nuestra hay cada vez más torpezas que argucias. Tropiezos que siempre producen el descaro y la impunidad.

(16 de mayo, 2016)

Crecimiento con inequidad

Una de las mentiras más escandalosas de los últimos tiempos es la de la promesa de un “crecimiento con equidad” de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Más de 20 años de cifras macroeconómicas espectaculares, así como del llamado ingreso per cápita del país dejaron más que claro que el desarrollo económico del país significó beneficios enormes para los más ricos, una escandalosa concentración de la economía mientras los sueldos y salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores se mantenían prácticamente estancados. Más de dos décadas de crecimiento económico nos ubican ahora en el último lugar de la Región en materia de equidad, mientras en el mundo sólo existen, ahora, apenas una o dos naciones más desiguales que la nuestra.

La desigualdad no ha acarreado al mismo tiempo un crecimiento severo del delito, de la criminalidad, al mismo tiempo que se han pronunciado lacras como la del tráfico y microtráfico

de toda suerte de estupefacientes. La enorme brecha en el ingreso de los chilenos nos tiene convertidos en un país violento que obliga a los gobiernos a destinar más y más recursos para dotar a las policías, agilizar la justicia y ampliar las cárceles, sin que los resultados sean halagüeños si se considera la cantidad de delitos que quedan a diario sin resolverse, así como el hecho de habernos constituido en el país con el mayor número de presos en relación al tamaño de nuestra población.

Como lo hemos dicho tantas veces: es mucho más seguro y hasta feliz un pueblo pobre, pero igualitario, que uno que esté marcado por las agudas y agraviantes diferencias en el ingreso. Con el PIB de un país desarrollado (pisándole los talones casi a ciertas naciones europeas) en la práctica somos un país con millones de pobres y marginados; con una educación cruzada por enormes desigualdades en el acceso y la calidad de la enseñanza; con un sistema de salud que se prodiga para quienes son ricos y castiga cotidianamente a la inmensa mayoría de los chilenos. Con un sistema previsional escandaloso que condena a millones de pensionados a recibir una pensión de mínima subsistencia.

Si juzgamos a nuestro país por lo que dedica a la compra de armas, sin duda que estamos, ciertamente, entre los más solventes de América Latina y del mundo. Si anotamos los sueldos de nuestras autoridades políticas, ciertamente competimos y superamos los ingresos de los parlamentarios alemanes, suecos o estadounidenses y asiáticos, es decir de los países más ricos de la Tierra. Y si consideramos nuestros gastos electorales, comprobaremos que, además, somos un país dispendioso en esta materia, por lo mismo que nuestro sistema institucional tiene poco o nada de republicano y democrático, aunque nuestras autoridades se ufanen tanto en tal sentido. Frente a países, por ejemplo, que se han atrevido a convocar a una Asamblea Constituyente y a darse, mediante un plebiscito serio, una nueva Carta Fundamental.

De poco o nada no ha sirvió tan espectacular crecimiento económico cuando los índices sociales siguieron tan deprimidos y el ingreso nacional solo tuvo como consecuencia que nuestro país inscribiera nuestros mejores logros en la lista de Forbes , donde anotó a varios multimillonarios criollos entre los más ricos y poderosos del orbe. A un puñado de empresarios que se han coludido sistemáticamente para asaltar los bolsillos de nuestros consumidores, como para meterse al bolsillo propio a nuestros dirigentes políticos, partidos e instituciones del Estado.

Nunca hemos tenido más ricos, pero nunca también en nuestra historia más chilenos desencantados o indignados anta tamañas injusticias e inequidades. ¡Vaya que frustra que gobiernos autodefinidos como socialistas y socialcristianos hayan consentido con tantos desequilibrios, se hayan encantado con el modelo económico neoliberal y apostado a que el desarrollo económico nos traería algún día bienestar social, cuando justamente las políticas neoliberales consagradas sustentan el crecimiento y las buenas cifras macroeconómicas en la mano de obra barata, en la prohibición de los trabajadores a organizarse y exigir sus derechos, partiendo por el salario mínimo digno!

Por otro lado, la voracidad de los empresarios y de las compañías extranjeras terminó por colapsar nuestra naturaleza y medio ambiente. Ahora ya no solo es nuestra Capital la contaminada y estresada; lo son también unas diez urbes más, cuyos índices de polución ahogan a sus habitantes, destruyen y agotan nuestra fauna y flora marina, cuyos recursos eran más que suficientes para el consumo de toda nuestra población. Porque hasta las grandes cumbres y témpanos de nuestra Cordillera fueron ofertados por nuestros gobiernos al capital foráneo que llega, explota y emigra donde hayan más recursos naturales y gobiernos dóciles. Aunque en cuanto a docilidad es difícil que haya un país más abyecto que el nuestro, cuando nuestra propia Presidenta se manda a cambiar a Inglaterra a clamar por nuevos inversionistas, mientras el con-

flicto social arde en la zona de los Lagos y en la Araucanía. Cuando más del 25 por ciento de los santiaguinos se resiste, con justicia, a pagar su pasaje en el fracasado Transantiago y los escándalos de la política cercan a La Moneda, el Parlamento y los partidos.

Infatigables en su afán de lucro, los grandes empresarios y sus amanuenses que concurren a la televisión celebran ahora el tono de la Primera Mandataria en su discurso anual al Congreso Nacional, mensaje que hace rato dejó de ser una “cuenta política y administrativa de la marcha del país y del gobierno”. Aplauden su moderación, pero lamentan que no anuncie medidas más afectivas para emprender la ruta del crecimiento económico, es decir de la posibilidad de hacerse todavía más ricos, cuando ni siquiera han querido consentir con una reforma tributaria que reparta más, o con una reforma laboral que le permita a los trabajadores exigir mejores condiciones. Mayor crecimiento quieren para salvar la ecocida industria salmonera, para especular con los abusivos créditos bancarios, las pensiones previsionales, y emprender actividades que agoten nuestros recursos forestales o maten la pesca artesanal.

Cuando el desafío, a todas luces, no es crecer más, sino repartir, distribuir mejor. Prohibir la extrema riqueza, dejar ojalá a cero nuestras compras de armamentos y gastos ociosos en Defensa. Para seguir acumulando armas ofensivas y fratricidas que, como sabemos, descargan cada cierto tiempo los militares contra nuestro propio pueblo. O se obsoletan y desbaratan en sus incesantes juegos de guerra en nuestro desierto o en nuestro ancho mar.

Ojalá no creyéramos más si ello solo va a redundar en mayores inequidades y mayor descontento social, en más agresiones a nuestro medio ambiente. Bastaría solo con derogar la Ley reservada del Cobre para financiar, no solo la reforma educacional y construir todos los hospitales prometidos e incumplidos. Bastaría con recuperar los fondos previsionales para tener todo el

dinero que nos falta para invertir en actividades productivas pero bajo soberanía nacional y salarios dignos. Bastaría con recuperar Soiquimich y todas las empresas mal habidas por los corruptos mandamases de nuestra economía y de las decisiones legislativas.

¡Cómo nos iría bien, asimismo, con nacionalizar las empresas eléctricas y recuperar el gas, el agua y la energía traspasadas a precio vil para el disfrute de especuladores extranjeros. En definitiva, recuperar nuestra soberanía tan mancillada, suprimiendo de nuestra legislación esa subsidiaridad del Estado consagrada por la Constitución pinochetista y que los gobiernos de toda la Posdictadura se resisten a reemplazar, aunque nos prometan procesos que siempre han resultado más dilatorios que efectivos.

Que no nos metan más alquimia, ilusiones y demagogia. Hace rato que la comunidad científica mundial no ha alertado, por lo demás, que el crecimiento económico concebido como en Chile solo nos lleva a la destrucción del Planeta. Que este desarrollo debe ser sustentable, moderado, pero en ningún caso seguir concentrando bienes en unas pocas manos. Mientras las mayorías y los pobres siguen esperando y acumulando resentimiento.

(24 de mayo, 2016)

Los vociferantes de antaño

Me solicitan un comentario respecto de la división que ha experimentado la Izquierda Autónoma, movimiento vanguardista y juvenil que surgió dentro del ámbito universitario y estuviera liderado por el diputado Gabriel Boric, ex presidente de nuestra Federación de Estudiantes. Y ¡qué más puedo decir sin hacerme eco del estupor de tanta gente respecto de este quiebre!, como de la profunda desilusión que nos provoca que los jóvenes de hoy caigan en las mismas prácticas de los jóvenes de ayer, sobre todo cuando se trata de expresiones progresistas.

Si uno pudiera descubrir disensos que pasen por serias desavenencias ideológicas, por formas distintas de expresión y lucha -como los quiebres de antaño del Partido Comunista, de la propia Democracia Cristiana, del Partido Socialista y otras múltiples expresiones- uno podría tener más comprensión y tolerancia frente a estas divisiones; sin embargo, lo único que se aprecia en éste y otros quiebres es la ambición de poder, las pugnas entre las expectativas personales de sus dirigentes. Puede que el entendimiento me falle, pero he seguido con atención las explicaciones de quienes mantendrán el nombre, el timbre y la campanilla de la Izquierda Autónoma, como las del propio diputado Boric y de quienes dicen que se propondrán ahora otra expresión en el seno de la izquierda, sin que en este quiebre, insisto, se pueda observar una diferencia estratégica o táctica en el propósito de ambos grupos de hegemonizar, ganar visibilidad pública y, posiblemente, posiciones de poder.

Con cada división en la izquierda, la que gana siempre es la Derecha, por supuesto, como también los que se aferran a partidos y organizaciones completamente muertas en convicciones y propuestas. Entidades que, entreparéntesis, solo permanecen en la política para promover candidatos, administrar cuotas de poder, medrar de los altos ingresos que el sistema ofrece a parlamentarios y alcaldes. Tener la posibilidad de incorporarse a un ministerio o subsecretaría ya sea tan solo para convertirse en asesores mucho mejor pagados que todos los funcionarios públicos de planta o a contrata.

No es que la Derecha no se divida. Hoy son fácilmente unas diez las expresiones en todo este ámbito, pero los derechistas tienen una virtud por encima de sus diferencias y competencias intestinas, cual es saber claramente lo que representan y defienden, despreciar colectivamente la democracia, pero demostrar habilidad para ponerse de acuerdo a la hora de las elecciones. De forma tal de conve-

nir en uno o a lo sumo dos candidatos presidenciales a objeto de no quedar excluidos del poder y de la toma de decisiones.

Está claro que quienes los financian, por lo demás, no les permitirían las divisiones que se prodigan en la Izquierda y que la lleva a postular hasta cinco candidatos presidenciales que a lo único que colaboran, a la postre, es a la mantención del régimen vigente, a la consagración del duopolio político que faena el poder desde La Moneda, el Parlamento y los municipios.

Lo curioso es que con cada división las distintas bandas o esquilas que se separan siempre prometen que se van a ir a la búsqueda de la unidad de la izquierda, a confluir con otros sectores vanguardistas, a edificar “izquierda unida”, “frentes amplios” y otras recurrentes expresiones que jamás resultan y que ya tienen poblado el país en más de 15 o 20 fórmulas distintas, imposibles de identificar en sus idearios y hasta en sus mandamases, caudillos y candidatos. Estos últimos siempre perdedores que nos dicen, sin embargo, “salir fortalecidos de cada derrota” y se aprestan, una y otra vez, a “repetirse el plato” al interior de sus pichiruches o fantasmas organizaciones.

Rimbombantes denominaciones que abusan de la bella y exigente palabra “revolución”, que declaran su profunda vocación democrática y que desde hace mucho rato se olvidaron de la realidad de los pobres, de los marginados, de su pertenencia latinoamericana y de la solidaridad con los movimientos de liberación del mundo. Salvo para ir a pasarle la bandeja a Chávez, al PRI mexicano, a Lula y hasta a Evo Morales, como ahora a los nuevos referentes izquierdistas de España y Grecia, cuya consistencia y consecuencia todavía debe ser probada.

Señoritos, muchos, que desde su rebeldía universitaria se acomodaron rápidamente en el Ministerio de Educación, por ejemplo, para “asesorar” una reforma educacional que todavía no alcanza gratuidad universal, no desmunicipaliza los establecimien-

tos, aún no define una ley de Educación Superior, ni consigue otros objetivos por los cuales se hicieron “héroes” en su lucha contra los guanacos y bombas lacrimógenas policiales, antes de pasar a embucharse sueldos por encima de los 7 u 8 millones de pesos mensuales. Cooptados, aunque no les guste reconocerlo, por los que siguen y seguirán gobernando el país con más razones, todavía, cuando los vemos colapsar, dividirse y escupirse en el rostro. Escupiendo, con ello la esperanza de los oprimidos, de los que siguen esperando.

Obsérvenlos ustedes de dónde vienen y podrá pronosticar, como yo, que terminarán igual que los guatones Correa, los Jaime Estévez, los Oscar Guillermo Garretón y otros vociferantes de antaño, tan bien descritos en el último libro de Mónica Echeverría, convertidos hoy en millonarios lobistas y defraudadores del fisco. A los que agrego otro como el señor Carlos Ominami, asaltante de supermercados (se nos asegura), cuando de joven recaudaba plata para el MIR... tal como ahora recauda de Soquimich, de Julio Ponce Lerou y del Fisco para financiar su campaña senatorial y su referente intelectual socialista Chile XXI. Sobreseído por la justicia por prescripción, como sabemos, y no por haber probado su inocencia.

¡Qué otro comentario puedo hacer que no sea desearles pésima suerte a estos divisionistas!, para que no les vaya como los otros que nombré, si es que no son capaces de reaccionar frente a su vergonzoso quiebre. Asumir que estas rupturas en la izquierda son una falta escandalosa que no tiene otro nombre que el de la traición. Una transgresión a la ética y la estética que debe exigir el comportamiento de los izquierdistas. Sobre todo, insisto, cuando en sus disensos no hay ideas o propuestas antagónicas o irreconciliables, sino puramente ambiciones personales. Efectivamente, “La revolución es moral o no es revolución”, como nos decía el célebre Peguy.

Nos señalan que “el quiebre ha sido difícil y doloroso”, pero no nos dicen palabra alguna de cuán doloroso y difícil puede resultar para tantos chilenos que volvieron a ilusionarse en el entusiasta y refrescante paso de estos jóvenes y estudiantes por las alamedas, jornadas de protesta en las que renació una esperanza que ahora amenaza con desplomarse en decepción profunda. Me pregunto cuánto ahora tendremos que esperar después de esta división y luego de que ese otro referente (ahora partido), “Revolución Democrática”, haya retirado a sus cuadros de las ubres del Gobierno para disponerlos, de seguro, como candidatos en los nuevos desafíos electorales que se avecinan y que volverán a estar regidos por la Constitución de Pinochet, un sistema electoral binominal recién remozado y, desde luego, el sacrosanto modelo económico y social neoliberal que nos dicen abominar. Mientras transversalmente la clase política se alimenta de los sobornos de los más poderosos empresarios del país y de las multinacionales ancladas en toda nuestra geografía.

Cuánto tendremos que esperar luego de que estos rebeldes que rompían con el sistema y nos convocaban a una rebelión popular se convencieran en tan poco tiempo de que los cambios hay que hacerlos desde “dentro del sistema” y bien premunidos de cargos públicos y sueldos. Así como otros, ilusamente, piensan o se justifican en la idea de que a los añosos y corruptos partidos hay que cambiarlos también desde su interior. O tal como otros creen que a los presidentes que fracasaron y no fueron capaces de hacer, o no quisieron realizar, lo que prometieron hay que darles una nueva oportunidad... Como si no estuviera ya a la vista hoy y en nuestra historia que quienes se repiten en La Moneda vuelven a hacerlo peor que antes, como a perder hasta los últimos vestigios de su credibilidad.

(31 de mayo, 2016)

Impunidad y presidencialismo

Si en vez de un sistema presidencialista tuviéramos uno parlamentario, como sucede en la mayoría de los países europeos, lo más probable es que el actual gobierno de Michelle Bachelet ya hubiera sido censurado y reemplazado. El rendimiento económico, las duras sentencias de las encuestas, los episodios de escándalos y la protesta social que se expresa en todo el territorio harían imposible su continuidad. El riesgo de un sistema parlamentario sería estar en manos de los legisladores, si es que no contásemos, efectivamente, con un sistema electoral realmente democrático y representativo, donde la falta de probidad no pueda expresarse tan impune como transversalmente como sucede actualmente en Chile.

En la posibilidad de ser removida por el Poder Legislativo, seguramente los propios partidos del oficialismo la habrían sustituido por una opción más segura, a fin de reencantar a los ciudadanos y asegurarle la continuidad en La Moneda a la fórmula gobernante. Con niveles de apoyo inferiores al 25 por ciento, difícilmente en esos países parlamentaristas un gobierno podría mantenerse en el poder. Menos todavía frente a la irrupción de un Caso Caval que ha golpeado tan fuerte el prestigio de la Gobernante o, al menos, ha sembrado profundas dudas sobre nuestra Primera Mandataria y su entorno político y familiar.

La misma querrela presentada por la Presidenta contra un medio de comunicación habría resultado escandalosa por lo que, en sí, intimida la libre acción del periodismo, cuando ella prefiere demandar a quienes difundieron una grabación (que indudablemente existe) y cuando soslaya acusar ante los tribunales a quien realmente la ofendió, seguramente en el temor de que éste pueda revelar otras infidencias o expresar nuevas injurias o calumnias, como algunos asegura.

Cuando desde el propio Gobierno se acusa una operación para afectar la imagen de la Presidenta de la República, resulta in-

compresible que no se emprenda una acusación contra el operador que, a todas luces, estaría involucrado en esta maniobra. Nos referimos a ese oscuro o siniestro operador Juan Díaz, vinculado por mucho tiempo a la UDI, lo cual no le fuera impedimento para involucrarse en el Caso Caval, con la nuerca de la Presidenta, y cuando ya había estallado el escándalo reunirse en el propio Palacio Presidencial con el administrador de la sede de la Presidencia, por cierto una persona de la plena confianza de Michelle Bachelet, aunque ésta asegure que nunca lo vi o conoció.

Un presidente o primer ministro difícilmente en esos países europeos podría mantenerse en el Gobierno ante una situación como la que vive la Araucanía, como la vivida en Chiloé o con la protesta multitudinaria en las calles de los estudiantes y trabajadores. Menos todavía se habría podido tomar la licencia de viajar al extranjero en medio de estas graves tensiones, donde parece estar siempre mucho más complacida y relajada que en su propio país. No habría podido, a no dudarlo, dejar pasar las increíbles declaraciones de su Intendente en la zona de un severo conflicto, cuando desconoce la existencia de una etnia como la de los mapuches, y les desconozca identidad y derechos plenamente reconocidos en el país y en la más diversas organizaciones internacionales.

Sería poco probable que un gobierno hiciera caso omiso de la creciente sorpresa que causa en el mundo una querrela en contra de la libertad de cualquier medio de emitir declaraciones de otros por injuriosas que le parezcan a la Mandataria que, además, ha pretendido que el país y los tribunales reconozcan su querrela como una acción personal sin vincularla a su condición de ser la primera autoridad del Estado.

A la protesta de la propia prensa, del Colegio de Periodistas y de no pocos dirigentes políticos de la Oposición y del propio oficialismo se suma hoy el reproche de Human Right Watch, cuyo titular en Washington ha precisado que todo gobernante debe estar expuesto al escrutinio público y que acción penal decidida por

Michelle Bachelet ciertamente no es consistente con estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Que su acción es un “error político y jurídico”, apelando a que los tribunales chilenos desechen esta acción. Una sentencia de este importante referente internacional más que contundente y reprobatorio respecto del proceder de la Presidenta, en una conducta que muchos temen fue pésimamente asesorada, si es que no se le quiso hacer una zancadilla más desde su propio círculo de confianza.

Aunque muchos se sientan tentados a defender la acción de Michelle Bachelet, a mostrar solidaridad con su indignación, lo cierto es que al difundir una filtración telefónica como la que existe en el Ministerio Público es una decisión que sirve al interés público y no debiera ser constitutivo de delito. Aun en el caso de que se demuestre la falsedad de lo que se afirma en esta grabación y de cuyo contenido debe responder el que pronunció estas acusaciones graves contra la Mandataria y, en ningún caso, una revista o cualquier medio de comunicación. Ciertamente, estimados auditores que este planteamiento nuestro no puede ser atribuido a una defensa de la revista *Qué Pasa* sino a los derechos y obligaciones que nos asisten a todos los medios de comunicación al cumplir nuestra tarea. Mucho más grave habría sido guardarse, ocultar el contenido de esa grabación que difundirla.

A la prensa se le debe exigir responsabilidad, estándares éticos pero nunca la obligación de comprobar previamente la veracidad de las informaciones que pesquiza o las afirmaciones de quienes son cotidianamente sus entrevistados. Escándalos internacionales como el de Watergate, en Estados Unidos, jamás se hubiesen conocido si los periodistas no difundieran lo que investigaron sin comprobar antes toda la veracidad de ello. Es tarea de los Tribunales de Justicia, y no de la prensa, dictar sentencias y castigar a los injuriadores y calumniadores. Lo que no puede o debe hacer la prensa es inventar testimonios o documentos, ni menos

coludirse con los gobernantes para urdir crímenes como los acometidos bajo la dictadura. De allí que resulte tan absurdo que, en vez de acusar a quien presumiblemente la calumnió, decida, cargarle la responsabilidad de esto a los periodistas que le dieron tribuna a una grabación telefónica, procediendo en esta materia igual como lo hizo varias veces la Dictadura pinochetista.

(2 de junio, 2016)

Bochornosas primarias

Propio de los actos más vergonzosos de la política, el Gobierno celebra la participación ciudadana de las recientes primarias en que tan solo un 5.5 por ciento de los potenciales electores concurrió a las urnas. Desde La Moneda se dice, incluso, que lo que faltó en esta consulta ciudadana fue mayor difusión, por lo que se ampliarán los gastos en este sentido para las primarias del próximo año. En total se nos dice que el Servel gastó 5 mil 500 millones de pesos en este proceso en materia de impresos, informática, transporte y otros. Gastos que debieron ser muchos más, en todo caso, si le agregamos lo que cuesta mover a los efectivos militares a los carabineros y lo que deben haber gastado los propios candidatos. De parte de los partidos políticos, asimismo, se celebra este proceso al compararlo con las más discretas concurrencias, todavía, a esas primarias que eran convocadas por las propias colectividades. 5.5 por ciento de participación ciudadana versus el 94.5 que no concurrió a votar... pero eso es bueno para el Ejecutivo y todos los actores involucrados en esta fallida experiencia.

¿Habría acto de cinismo más grotesco que éste? ¿Habría una burla mayor al país y al conjunto de la población que observa cuánto podría hacerse con este dinero en vez de malgastarlo en estos juegos cupulares de la política, tan similares a los juegos militares que le significan otra porrada de millones al erario nacional.

En las cuentas alegres, al Gobierno le satisface que hayan sido más los concurrentes de las primarias de la Nueva Mayoría que los del Chile Vamos. Es decir se atribuyen ventajas y fracasos dentro de ese magro 5.5 de votantes que unos y otros compartieron sumados.

Otros, los más frescos, se preguntan si no será necesario que la Ley permita a los candidatos gastar más en propaganda para encarar las próximas primarias, en la certeza que todos tienen de que el dinero y el dispendio electoral puede acarrearles más apoyo en las urnas. No escucho autocríticas: la clase política se hace una sola en la defensa de este fiasco electoral y político. A excepción de los presidentes de los partidos Radical y del Comunista que dicen que nadie puede estar realmente conforme con este nivel de participación ciudadana. El líder de PPD, en tanto, sugiere que el Gobierno le entregue más recursos al SERVEL para destinar a difundir estos procesos...

Pero el fracaso y la preocupación existen. Por más que el nuevo ministro del Interior califique como “buenas las cifras electorales”, una mentira flagrante que debiera causarle problemas como supernumerario del rígido Opus Dei al cual pertenece. En tanto que las presidentas del Partido Socialista, Isabel Allende, y de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, coinciden en que la explicación radica “en la poca información” que entregara el Gobierno sobre este proceso.

Más allá de los embustes por algo han surgido algunas voces para que se recupere la obligatoriedad del voto, una iniciativa que seguramente no va a alcanzar a materializarse antes de las próximos comicios parlamentarios y presidenciales por lo que las próximas elecciones municipales arriesgan a encontrarse, también, con una altísima abstención, aunque nunca tanto como los índices expresados por estas primarias por el elevado número de candidatos a alcaldes y concejales que tendremos y que, se conseguir cada uno de ellos unos cien o doscientos votos ya estaríamos

en la posibilidad de disminuir un poco la abstención que, a no dudarlo, será de todas maneras superior a los votos válidamente emitidos. Acuérdense de mí.

En todo caso, a la mayoría de los actores políticos no les importa mucho que haya tanta abstención. La política cupular se alimenta y se sostiene, precisamente, en la posibilidad que los ciudadanos no se expresen, miren con completo desdén estos juegos electorales. Me atrevería a asegurar que el voto obligatorio, del cual soy partidario, no se va a reponer por ahora. La política cupular no puede correr el riesgo de los millones de chilenos indignados con su voto expresen su repudio y desencanto.

(21 de junio, 2016)

La incultura alimenta los nacionalismos

Sabido es que los pueblos con menos formación cultural y pobre formación cívica son los más dispuestos a asumir las posiciones nacionalistas, la discriminación social y racial y el belicismo. La renuncia que han hecho los ciudadanos británicos a formar parte de la comunidad europea tiene diversas y atendibles razones pero ciertamente expresa cuán arraigados están aún en el Reino Unido el espíritu hegemónico y colonialista. Cuan poco le importa a esa mayoría de ciudadanos su integración económica, política y cultural con los otros países del llamado Viejo Continente.

Lo mismo se deduce del éxito avasallador de la candidatura de Donald Trump en Estados Unidos, cuando muy pocos pensaban al comienzo que un personaje como éste pudiera ganar las primarias de su Partido Republicano. Y ya se ve que ha sumado la mayor cantidad de votos en la historia de las convenciones de este Partido y que en las encuestas esté prácticamente empatado ya con su rival demócrata aun sin proclamarse.

Cuando en pleno siglo XX hubo quienes aseguraron que el mundo avanzaba hacia una aldea global, hacia la integración general y la superación de las fronteras convencionales, ya se ve cómo estalló la Unión Soviética en una infinidad de naciones y cómo se han venido avivando las pretensiones nacionalistas y separatistas en España y otros países. Realmente resulta triste observar todavía las profundas diferencias del mundo árabe, sus irreconciliables posiciones, además de su constante estado de guerra donde también la religión islámica, como sucedió mucho antes con el Cristianismo, se ha separado en distintas versiones y vertientes, según sean las regiones y países en que se profesa esta fe.

No hay duda que en el siglo XXI tenemos mayores divisiones que en el pasado, aunque nuestra región latinoamericana sea donde existen menos conflictos y amenazas de enfrentamiento entre nuestros numerosos países, aunque ciertamente prevalecen intereses contrapuestos, tensiones fronterizas y otros que felizmente no han escalado a nuevas guerras fratricidas como las tuvimos a inicios del siglo XX.

Chile, que fuera en el pasado uno de los países que más colaborara la integración latinoamericana, a la superación diplomática de nuestras controversias, y que asumiera un liderazgo tan importante en el fomento de las instituciones regionales, en estos últimos años ha dado un inmenso paso atrás en el soberbio interés de ser reconocido como un país desarrollado o en el umbral del Primer Mundo, en el propósito de competir dentro de “las grandes ligas”, como lo expresara patéticamente una ministra de Relaciones Exteriores y no pocos de nuestros pretensiosos y engolosinados economistas. De esta forma es que después de impulsar tratados de libre comercio regionales, por ejemplo, nuestros gobiernos derivaran a consolidar acuerdos con Estados Unidos y las grandes naciones, mirando mucho más hacia otros continentes que a nuestro primer ámbito geográfico.

Ello explica que nuestros últimos gobiernos hayan mostrado tanta arrogancia a la hora de encarar las demandas de nuestros países vecinos y que, consecuentemente, seamos el país de la Región que más dispendia recursos en la carrera armamentista en nuestro Continente, como en la consolidación de una superioridad militar que distrae recursos para nuestro desarrollo económico, provocando una inequidad económica escandalosa entre nuestros habitantes y que pudiera, como muchos pensamos, estallar en un nuevo conflicto interno en que las armas, como varias veces ha sucedido en nuestra historia, más que apuntar a un eventual enemigo interno, se orienten a despropósitos tan terribles como bombardear nuestro propio Palacio Presidencial y acribillar a las poblaciones más pobres del país.

En la pretensión de que países como Bolivia y Perú se sometan a lo obtenido por Chile en una guerra, o en tratados impuestos más por la fuerza que la razón, nuestro país está sorteando demandas si el menor intento de diálogo con nuestros vecinos y exponiéndonos a resoluciones de tribunales internacionales y arbitrajes que, hasta aquí, no han sido nada de halagüeños para las pretensiones de nuestra Cancillería y diversos gobiernos. Simplemente porque desde fuera nadie puede desconocer que los territorios conquistados por Chile en la Guerra del Pacífico desmembraron enormemente a los perdedores y nos permitió ampliar nuestro territorio hacia ricas zonas, especialmente mineras, que ciertamente han cimentado más nuestra riqueza más que todo lo que teníamos como soberanía antes de este conflicto bélico.

No es que Chile tenga que avenirse a devolver los territorios conquistados. Ni quiera los demandantes tienen esa pretensión, sino únicamente que los límites por el norte, con Perú, queden razonable y definidamente demarcados y que con Bolivia nuestro país acceda a darle apenas una franja de soberanía hacia el Océano Pacífico en nuestro enorme desierto de Atacama. Cuestiones que

ya se han empezado a resolver en contra de la tozudez de nuestros gobiernos en el Tribunal Internacional de la Haya, dejándonos ante el mundo como un país intransigente y prepotente, sin ánimo alguno de resolver bilateralmente nuestras controversias.

Es completamente absurdo que ahora se mantenga una controversia por un pedazo de territorio equivalente al de una cancha de fútbol, como que no encontremos una solución justa, fraterna y bien compensada, por lo demás, para resolver la mediterraneidad boliviana. Y, lo más importante, avanzar a una integración económica que podría cimentar tanto nuestro crecimiento en esa confluencia territorial magnífica con nuestros países hermanos. Ahorrarnos el enorme gasto militar e impedir la enorme gravitación que por todo esto, siguen teniendo nuestra Fuerzas Armadas en la política del país.

Pero, claro, nuestros políticos saben que las posiciones ultranacionalistas, el celo desmedido por nuestros intereses y el desprecio a quienes tienen ciertamente una inferioridad militar a la nuestra da muchos dividendos electorales, por cierto, en una población bien alimentada ideológicamente por los mismos disvalores que impulsaron el blexit en el Reino Unido y que, ahora, encarna un candidato como Donald Trump, en los Estados Unidos. Chauvinismo que sorprende en tantos chilenos que acaso nunca tengan la oportunidad de viajar al Norte y disfrutar de un territorio enteramente entregado por nuestros sucesivos gobiernos a las grandes empresas extranjeras y a un puñado de empresarios nacionales que, además, de inescrupulosos, no generan riqueza ni bienestar para la mayoría del país, sino para ellos mismos.

Sé que es difícil hablar de estos temas sin exponerse al repudio absoluto de tantos fanáticos e insensatos que dicen velar por nuestra soberanía, negándose a reconocer cuán poco nos queda de ella al haberla cedido a las grandes empresas e intereses empujados en todo nuestro largo territorio. Desafiando la evalua-

ción positiva que goza un ministro como Hernando Muñoz, que en sus posiciones suma, al contrario de sus colegas en el Gabinete, la aceptación de los chilenos más ignorantes, sin duda, pero también de la derecha recalcitrante. Bajo el cobijo, siempre, de los intereses de la gran potencia imperial de la cual es, en efecto, un heraldo y fiel vocero. Y se hace todavía más adicto cuando ofende a un régimen como el de Evo Morales que ciertamente tiene entre los bolivianos niveles de aceptación muy por encima a los de su Presidenta. Realidad que irita a los Estados Unidos cuando, además, esta revolución de Morales ha demostrado elevar y sostener uno de los niveles de desarrollo más altos del mundo, sacando a su población de los más profundos rezagos.

Pese a los aplausos que hoy recibe, Hernando Muñoz se está condenando a un gran repudio histórico por su entreguismo, mordacidad oral y traición a los valores del paramericanismo y del progresismo político. Aunque, por supuesto, gozará todavía por un buen tiempo del reconocimiento de toda esa casta de políticos y diplomáticos que tanto están medrando por estos litigios llevados al Tribunal Internacional de la Haya, con gastos millonarios que no se compadecen, hasta aquí, con sus resultados.

(22 de junio, 2016)

Los portazos de Hacienda

Resulta sorprendente enterarnos del portazo del ministro de Hacienda y de otras autoridades, a la demanda expresada por cientos de miles de chilenos en las calles de Santiago y regiones el último domingo. Un NO rotundo, insolente e irreflexivo al deseo nacional de ponerle fin al sistema previsional vigente, luego de comprobarse las miserables pensiones que condenan a los trabajadores a la hora de jubilarse, después de largo años de actividad. Pero lo más increíble es que quienes se niegan a escuchar

al pueblo son los que habrían venido a restaurar la democracia y a procurar equidad en nuestro país después de la Dictadura.

Autoridades regidamente bien remuneradas que ni siquiera tienen preocupación por lo que puedan llegar a recibir ellos como pensión al momento de jubilarse, si se considera todo lo que pueden acaudalar como ministros, parlamentarios y embajadores, por ejemplo.

Sujetos que se declaran representantes del pueblo y militan en partidos de denominación socialista o cristiana. Que se proclaman herederos de la Revolución en Libertad o de las ideas y luchas de un Salvador Allende, un Juan Emilio Recabarren, Clotario Blest y otras insignes figuras de nuestra historia, cuando el país era realmente pobre, pero la educación era gratuita y las pensiones bastante mejor de lo que son hoy se nos ofrecen cuando nos ufamamos de pertenecer a la OCDE y de estar en el umbral del Primer Mundo. Cuando con los fondos del sistema previsional de reparto, miles de chilenos obtenían un crédito blando para aspirar a una casa propia o un préstamo de auxilio para encarar algún impostergable gasto familiar. Cuando la salud, además, era prácticamente gratuita y nos enorgullecíamos del nuestro sistema público de salud.

Insólito e hipócrita, por decir lo menos, que el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés se atreva a decir todo lo que dice, y para ello cuente con el consentimiento de la propia Presidenta de la República, de la cual muchos temen que ya ni cuenta se dé (con tanto viaje y atribuciones familiares) de las barbaridades que hacen y dicen sus secretarios de estado todos los días, obligándose después a pedir perdón. Como tuviera que hacerlo la lenguaraz ministra Del Piano.

Realmente, no creemos que el ministro Valdés sea sincero cuando dice que el Fisco no tiene más dinero para mejorar el sistema de pensiones. Cuando sabe también de las enormes reservas que tiene nuestro país en el extranjero, cuando sabe lo abusivo

que representa que las FFAA, las policías y los gendarmes gocen de privilegios insultantes en esta materia, si se los compara con la realidad de los civiles. Cuestión que ha quedado con tanta evidencia demostrado por la pensión que recibe la esposa del socialista Presidente de la Cámara de Diputados, monto que, de repartirse, podría asegurarle una pensión digna a 5 o 6 jubilados. Cuando sabe que si direccionara a pensiones los fondos de la Ley Reservada del Cobre y todo el excesivo gasto militar de nuestro país, de verdad cientos de miles de pensionados podrían recibir un estipendio digno.

Cuando sabe, además, que las administradoras de fondos de pensiones de verdad lucran, tal como lo hacen las universidades privadas, de los recursos que todos los meses llegan seguros y a raudales a sus arcas. En lo que se estima, sin duda, uno de los negocios privados más lucrativos del país y del mundo y que con tales utilidades desmedidas se podría mejorar las pensiones de decenas de miles de trabajadores obligados a cotizarles a las AFPs una parte significativa de sus sueldos. Cuando sabe perfectamente que todavía es más oneroso ser dueño de una AFP que de un banco, una gran compañía minera, forestal o pesquera. Más todavía que poseer casi a perpetuidad un curul en el Parlamento, tener acceso a los gastos reservados de algunas carteras como la suya o ser un edil en una municipalidad rica.

Cuando sabe el ministro Valdés que la última reforma tributaria realmente fue de caricatura y terminara sacándole más recursos a la clase media y menos a las grandes empresas del país y fortunas personales. Cuando le es imposible soslayar que el país que administra con la billetera fiscal es el más inequitativo de toda la Tierra y que, mediante una más justa redistribución del ingreso y de la riqueza de verdad podría haber muchos recursos para mejorar las pensiones, salvar a la educación pública y garantizar un acceso digno a la salud.

Muchos recursos más si el país se propusiera arreglar sus tensiones fronterizas y comprometer al Estado, ahora (y no solo a las compañías privadas y extranjeras) en inversiones conjuntas con nuestros países vecinos que ciertamente nos llenarían de fuentes energéticas y recursos mineros para cimentar nuestro desarrollo y dejar de dispendiarnos en la compra de armas fratricidas que terminan derribando nuestra institucionalidad y matando a miles de chilenos.

Si es que el gobierno se sacudiera de un Canciller guerrerista que siempre ha estado al servicio de la potencia colonial y de las inversiones foráneas. Un Canciller digitado, como muchos temen, por el propio Departamento de Estado Norteamericano y otras entidades que sirven de escudo a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.

Vaya con que ligereza hay tantos opinólogos, pseudo economistas y periodistas ignorantes que se tragan el cuento del tío Sam y de sus acólitos en la política chilena. Que quedaran tan satisfechos, y no hicieran cuestionamiento alguno, al portazo del este ministro Valdés, cada día más encantado de la relación que ha podido establecer con las grandes patronales chilenas que financian los partidos, las contiendan electorales y el sobresueldo de los legisladores. Que se coluden para estafar a los consumidores, que evaden y eluden impuestos con el consentimiento del Servicio de Impuestos Internos, entidad que de él depende, cuando deja prescribir los delitos tributarios en el caso de que sus infractores lleven cuello y corbata, como se dice. Cuando se trata de los *pentaboy*s, de los Carlos Ominami, de los Ponce Lerou y tantos otros operadores de menor cuantía cercanos a La Moneda, la Sofofa y dilectos de El Mercurio.

Qué solidez y resolución nos han mostrado los convocantes a la marcha contra las AFP y las movilizaciones que deben acrecentarse y radicalizarse si queremos terminar con un sistema previ-

sional tan injusto y arbitrario. En la necesaria convergencia que debe producirse con los que demandan educación pública gratuita y de calidad y porque el Estado se obligue a controlar la usura también de las isapres que también lucran escandalosamente con la salud de los chilenos.

Claro. Cínicamente se nos dice que bajo la actual Constitución es imposible cambiar las cosas y frenar los abusos. Que el principio de subsidiariedad consagrado por la Constitución pinochetista y remozada por Ricardo Lagos Escobar, le impide a los gobernantes recuperar la dignidad e iniciativa del Estado. Cuando justamente en el pasado prometieron Asamblea Constituyente y un régimen institucional democrático y ahora se muestran arrodillados bajo el imperio de la legalidad heredada y del cancerbero Tribunal Constitucional. Olvidados ya de la ilegitimidad de origen y de contenido que entonces proclamaron de aquella Constitución surgida en un espurio plebiscito. Rindiéndose, además, a una legalidad que viola flagrantemente nuestros tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos laborales y en relación al debido respeto que hemos comprometido a la diversidad étnica y cultural de nuestra nación.

Todos los días la clase política hace gárgaras con el liderazgo y hasta la condición de estadista de algunos de sus cabecillas que, una vez en el poder, en vez de desafiar la Constitución, convocar la opinión del pueblo, condenar la extrema riqueza han terminado sometidos a las directrices neoliberales, al poder del dinero y a la más abyecta sumisión al orden internacional regido por El Pentágono, el Fondo Monetario Internacional y la negra Casa Blanca.

Lo que debe saber el país, al menos, es que hoy tenemos muchos más recursos que antes para sostener una previsión digna, una educación igualitaria y un sistema de salud democrático. Que en este sentido podríamos estar mucho mejor y no peor que

antes, si no viviéramos bajo un régimen tutelado por las Fuerzas Armadas y la clase patronal más codiciosa e inescrupulosa, además de la complicidad y el encubrimiento ejercido por los más poderosos medios de comunicación.

Pero lo que también debe asumir el país, después de 27 años de posdictadura como de la hegemonía de los mismos partidos, autoridades y candidatos, que es necesario rebelarse, discurrir por nuevas alternativas de gobierno y líderes genuinos y honestos. Salir, además, a las calles a derribar los muros de la mentira y la prepotente impunidad de autoridades como este ministro de Hacienda y otros que escupen a diarios los derechos del pueblo y, cuando se hace necesario, recurren a las mismas armas de la represión usadas por la Dictadura para aplastar la insurgencia popular que ya se hace tan bienvenida en la conciencia mayoritaria de los chilenos. Hartos de engaño y dilaciones.

(27 de junio, 2016)

Como los “monos porfiados”

La figura general de los políticos de nuestro país me parece como la de esos monos porfiados que existen en los recintos de juegos. Monos que se levantan prestamente cuando los golpeas y no logramos tumbarlos nunca definitivamente por más pelotazos que les demos. Con ocasión del inicio de la campaña municipal hubo muchísimos candidatos que prefirieron iniciarla por sí mismos, sin la presencia de padrinos o madrinas en la política. Sin embargo, hubo otros que se hicieron acompañar por las viejas figuras de los partidos oficialistas y de la derecha asumiendo un riesgo en sus postulaciones cuando se sabe lo desacreditadas que está la clase política.

Se trata de otro ritual que suele ser muy hipócrita en las prácticas políticas. Candidatos presidenciales que, como se sabe, exis-

ten por doquier en Chile acompañando a candidatos que muchas veces ni conocen pero con quienes van a quedar retratados en los diarios o en los afiches de campaña, en la idea de que pueden contribuir al éxito de estos incautos postulante a alcaldes t concejales. Cuando se sabe que los partidos y sus representantes están todo por debajo del 10 por ciento en su aprobación y prestigio social. Con todo, hay que apreciar esta vez que fueron los diputados, senadores y presidenciales los más interesados en asistir a las proclamaciones de ayer para “robar cámara”, como se dice, o trigo para sus propios molinos.

Ayer comentábamos que, incluso, dos ex ministras de Michelle Bachelet que fueran forzadas a renunciar por la Jefa de Estado buscaron la fotografía con su antigua jefa y camarada, cuando los niveles de aprobación de la Jefa de Estado están realmente por los suelos. Sin embargo se trata, sin duda, de un acto de nobleza de ambas candidatas.

Pero lo que se pudo comprobar ayer es la forma en que muchos candidatos rehuyeron presentar sus postulaciones con los más desacreditados de la política. No vimos postulantes que se hicieran acompañar de un ex ministro Jorge Burgos o del presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade. Incluso tenemos la impresión que el propio Marco Enríquez Ominami estuvo ausente de la proclamaciones de los múltiples candidatos de su partido PRO, aunque se sabe que el aprovechará esta coyuntura electoral para viajar por todo el país, aunque sea por auto, bus o tren, esta vez, en la idea de recuperar confianza ciudadana. Porque él, como Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y unos cuantos más deben encabezar la lista de los monos porfiados en la política. Lo que en todo caso es considerado un don en esta actividad, más que un empecinamiento tonto.

Ya vemos cómo ahora mismo, en estos comicios municipales, hay alcaldes y concejales que, luego de un pésimo o desafortunado desempeño, insistieron en repostularse. Como ya vamos

a ver el próximo año cómo se repostularán los parlamentarios más inescrupulosos. Los que fueron sobornados por las grandes empresas pero que -casi con toda seguridad- van a terminar escapando de la sanción de la justicia, cuando la corrupción también se entroniza en los tribunales y los buenos fiscales son apartados de los casos que investigan para favorecer la impunidad de los actualmente imputados.

(25 de agosto, 2016)

Las últimas vergüenzas de nuestra política

Todas las mañanas se nos hace inevitable comentar los despropósitos o escándalos de nuestra política, por lo que debemos iniciar este recuento con la vergonzosa declaración de nuestra Cancillería a propósito de la destitución de su cargo de la presidenta Dilma Rousseff. Mientras que lo sucedido ayer en la votación del Senado brasilero mereció el repudio de varios gobiernos de la Región, nuestro Gobierno emite un texto aguachento y oportunista.

Asumimos que la diplomacia suele ser hipócrita y decir las cosas de forma oblicua, pero nunca se puede llegar a tal extremo con una declaración que omite pronunciarse respecto de lo sucedido y que solo se limita a “reafirmar la amistad entre ambos países”, haciendo votos para que Brasil resuelva sus propios “desafíos a través de su institucionalidad democrática”, con un pálido reconocimiento de aprecio y reconocimiento a la Presidenta Dilma Rousseff, pero abogando (después de lo sucedido allá) por mantener los “renovados caminos de convergencia y fortalecimiento de la relación bilateral” entre nuestros países.

Vaya qué distinta actitud se podría haber esperado de Chile cuando todo el mundo sabe de la condena mundial y regional franca que tantos países democráticos ejercieron con ocasión del

Golpe Militar de Pinochet. Imagino que la propia mandataria destituida debe estar muy desencantada de la posición que ha adoptado su colega, y también mujer, Michelle Bachelet con quien se las vio varias veces abrazarse muy efusivamente.

Pero, por el contrario, da la impresión que el Canciller Heraldo Muñoz (un consabido pro norteamericano que curiosamente se ufana de estar casado con una estadounidense traída por él a Chile) parece aplicar la fórmula de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, deslindándose de la airada protesta de tantos países por el derrocamiento de la presidenta Constitucional, para confluir con el rápido reconocimiento que ha hecho el Departamento de Estado y la Casa Rosada de Mauricio Macri del gobierno asumido ayer en Brasilia. Seguramente para aprovechar el momento que se nos ofrece cuando lo único que le importa a nuestro servicio exterior es hacer buenos negocios con quien sea y como sea. Alineándose para ello con todas las posiciones adoptadas por la gran potencia imperial (que también tutela, como se sabe, nuestra posdictadura), como subsecuentemente con los gobiernos más reaccionarios, títeres y criminales del orbe. Cuando todas sus proclamas democráticas, como en relación a los DDHH, son de la boca para afuera, si se trata de hacer buenos negocios con aquellos países que están bajo la férula del Pentágono y de la Casa Blanca.

Sin avalar un instante aquellas presunciones fundadas de corrupción respecto de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, lo que no puede caber duda es que éstos sirvieron solo de pretexto para separar de su cargo a una izquierdista y a una mujer que incomoda a los poderosos empresarios y políticos de extrema derecha brasileros. No debe ser una mayoría parlamentaria la que juzgue las imputaciones que se le hacen a Dilma Rousseff, sino los Tribunales de Justicia, lo que equivaldría a que por el Caso Caval nuestro Senado decidiera destituir de su cargo a nuestra

presidenta de la República. Justamente es por el procedimiento seguido allá que se trata de una maniobra nada más que política. Alentada, por lo demás, por políticos probadamente corruptos como el que se hará de gobierno brasilero sin el aval, por cierto, de la ciudadanía.

No podemos soslayar, tampoco, la vergonzosa votación de ayer de nuestra Cámara de Diputados que rechazara la iniciativa de hacer públicos los antecedentes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura (la Comisión Valech), mantenidos en confidencialidad durante 50 años y para cuya desclasificación se necesitaban 60 votos. Con los votos en contra de la derecha y, especialmente, de varios diputados “socialistas” y de la Nueva Mayoría, solo se reunieron 57, pegándole un portazo a la voluntad de las propias víctimas de la Dictadura que prestaron declaración en esta Comisión Valech en favor de que sus testimonios sean dados a conocer públicamente.

Es justo y necesario consignar, por lo mismo, que entre los detractores de esta iniciativa están los diputados Pepe Auth, Marcelo Schilling (el mismo de “La Oficina”) Guillermo Ceroni y Juan Luis Castro, cuyos sufragios sumados -insisto- al de los parlamentarios pinochetistas agraviaron a las organizaciones de DDHH, a la víctimas de la represión y a la verdad que se clama respecto de los crímenes de la Dictadura. A ver si el Partido de Salvador Allende se hace cargo de este gravísimo dislate de sus diputados y da una explicación pública de lo acontecido ayer en el Congreso Nacional, sancionando como sería debido a estos “representantes del pueblo” convertidos en encubridores, cuando no en co autores, también, de los crímenes que se investigan todavía en nuestros Tribunales. ¡Qué vergüenza, estimados auditores!

Pero, finalmente, cómo no volverles a llamar la atención respecto de la renuencia del actual gobierno –especialmente de la Presidenta y su ministro de Hacienda- a impulsar la derogación

de la Ley Reservada del Cobre, mediante la cual las FFAA se hacen automáticamente del 10 por ciento de todas las ventas de Codelco, empresa que pasa por muy críticos momentos, además, por la caída del precio internacional de nuestro metal rojo.

A las voces del propio oficialismo que demandan esta derogación, a la expresa voluntad de los partidos de la derecha, se ha sumado también la disposición de algunas cúpulas de las propias organizaciones castrenses para discutir y concretar esta derogación. Sin embargo, nuestra Jefa de Estado y el gran tesorero del Gobierno no quieren, por cierto, avalar una iniciativa legal que, dentro de nuestra curiosa institucionalidad, necesita ser presentada por el Poder Ejecutivo.

Imaginamos las turbias y ocultas presiones que deben estar recibiendo ambas autoridades para oponerse a una derogación que parece más que justificada enfrente de las enormes carencias económico sociales y que podrían satisfacerse rebajando nuestros desmetidos gastos militares, poniéndole freno, por lo demás, a una carrera armamentista dispendiosa e inmoral, como inútil.

Asumimos que la Presidenta es una de las más activas integrantes de la llamada “familia militar chilena”, pero parece inaudito que sea ella y su monaguillo ministro de Hacienda los que en nuestro país más de opongán a esta vieja aspiración ciudadana, y que el propio gobierno de Sebastián Piñera no alcanzara a consumir durante su administración, contando con la aprobación transversal del Parlamento. ¡Otra gran vergüenza, estimados auditores!

(1 de septiembre, 2016)

Un trasnochado clericalismo

Una dura respuesta recibió el obispo católico Felipe Bacarreza de parte del senador demócrata cristiano Ignacio Walker, después

de que este alto clérigo llamara a este partido a suprimir la denominación de “cristiano” en el nombre de esta colectividad de no entrar en comunión plena con lo que proclaman las autoridades de esta pontificia iglesia. Un despropósito que contradice, sin duda, lo dispuesto por el propio Concilio Vaticano Segundo, hace ya más de 60 años, cuando adoptó la resolución de no interferir en las decisiones de quienes actúen en política pero mantienen su fe católica.

Y digo esto a propósito del fuerte clericalismo que ha renacido últimamente en algunos pastores religiosos, a propósito de la posibilidad de que se legisle para despenalizar el aborto en tres causales, conforme a proyecto del Ejecutivo que se discute y se encuentra en trámite en el Congreso Nacional. Asumiendo una actitud que aspira a someter a gobernantes, legisladores, comunicadores y otros que profesan la fe cristiana a las posiciones que sostenga el magisterio de la Iglesia y que, en el caso que irrita al senador Walker, tiene la pretensión, incluso, de que un partido como el que fundaran católicos tan relevantes como Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y Radomiro Tomic cambie de nombre si es que los diputados y senadores de esta colectividad no se oponen a esta iniciativa del aborto terapéutico. Insisto: solo en tres causales como la violación, el peligro de la vida de una madre y la inviabilidad de que prospere un feto.

Por cierto que la iglesias, los clérigos y feligreses de todas las religiones tienen total derecho a defender públicamente sus puntos de vista y, ¡cómo no celebrarlo!, cuando lo que se proponen es defender la vida y los derechos humanos. Pero otra cosa es arrogarse un poder temporal que no les corresponde, más allá de ejercer su autoridad moral sobre todos los temas de la política y del desarrollo humano y de las naciones. Tienen derecho, incluso, a tocar las puestas de La Moneda y del Congreso para exponer sus puntos de vista, pero en ningún momento para conculcar la libre

determinación de quienes deben tomar decisiones en nombre de todo el país. Porque si ello se tolerara, nada podría sorprendernos, entonces, que los empresarios y otros grupos fácticos dispongan de recursos económicos para interferir en las decisiones de nuestras autoridades. O los propios militares hagan valer la posibilidad de tomar las armas contra la institucionalidad y el pueblo cuando algo los disguste o desfavorezca.

Ni en plena Dictadura, cuando Pinochet se hizo del gobierno y de los destinos del país, los obispos católicos y de las otras iglesias osaron desconocer la realidad impuesta incluso por la fuerza y mediante métodos tan contrarios a la dignidad de las personas. Limitándose, como era su obligación ética o moral, a plantear con vehemencia sus puntos de vista e interpelar a las autoridades, a objeto de que se respetaran los derechos humanos realmente avasallados por las ejecuciones sumarias, la tortura, el exilio, la cárcel y los sitios de detención y exterminio. Incluso, así, recordamos, que hubo obispos, cardenales y sacerdotes que se hicieron cómplices o encubridores de lo sucedido y siguieron bendiciendo a los militares y a sus estandartes. Entre los que podría haber estado el propio obispo Bacarreza, quien hoy aboga para que la Democracia Cristiana abandone su calificativo evangélico.

Pero, pese a estos detractores al interior de la Iglesia, ya sabemos que pudo mucho más la fortaleza moral de un cardenal Raúl Silva Henríquez y de tantos otros obispos y sacerdotes que desde la primera hora salieron en defensa de la vida y la dignidad de quienes eran estigmatizados por la tiranía de Chile. Así como desde antes el propio Silva Henríquez y obispos de la talla de un monseñor Manuel Larraín abogaron por la reforma agraria y los derechos de los campesinos. De la misma forma, además, en que durante la conquista española del Continente hubo tantos otros sacerdotes que defendieron la dignidad de los indígenas y alentaron los procesos independentistas, muchas veces, al precio de sus propias vidas.

En la amistad que tuve con el obispo Jorge Hourtón, y de la cual tanto me precio, varias veces lo escuché protestar por la forma en que varios de sus colegas acotaban la moral cristiana a los asuntos del sexo y las prácticas sexuales de una juventud que ya empezara en su época a rebelarse contra los frenos y estigmas puestos en los confesionarios. Sin considerar que el mensaje evangélico a lo que nos insta es a la liberación de los oprimidos, a la justicia social, al reconocimiento de nuestras diversidades humanas, como a la equidad entre los pueblos y las naciones, valores que dejaran tan plasmados algunos pontífices como Juan XXIII, Pablo VI en sus famosas encíclicas sociales y donde además fustigaran el desarrollo capitalista y la desigualdad que pregona la imposición de los privilegios de los dueños del dinero por sobre los derechos de los trabajadores y de las minorías étnicas, o de “los más pobres entre los pobres”, como los denominara el Episcopado chileno en ese momento. Sustentando el magisterio eclesial toda una ideología liberadora que llevara al compromiso de tantos cristianos y católicos con la política y las vindicaciones sociales. Como fundamentara la ejemplar actitud del cardenal Silva y otros obispos de todo nuestro continente asolado por los regímenes militares y terroristas.

Desgraciadamente lo que más destaca en la actualidad es la actitud y presencia mediática de obispos como Bacarreza que soslayan las más acuciantes demandas políticas y sociales del pueblo en un país marcado por las graves desigualdades, por los atropellos del sistema contra la vida de los humildes, de los enfermos, de los niños desvalidos del Sename y de los ancianos. En un país que gasta ingentes recursos para adquirir armamentos y prepararse para la guerra fratricida; donde una casta de multimillonarios concentra cada día más riqueza y poder, contradiciendo las propias advertencias pontificias que hace tiempo ya declararon a la extrema riqueza como un grave pecado.

En defensa de la vida es que también nos gustaría ver a los Barcarreza protestando contra tantas leyes flagrantemente injustas y contrarias al espíritu evangélico de la fe, la esperanza y la caridad. Y no abogando porque se condene a la cárcel a las mujeres que son violentadas sexualmente y embarazadas sin consentimiento alguno o, incluso, pudieron perder sus vidas por un embarazo anómalo.

En defensa de los derechos de los propios sacerdotes y religiosas es que no gustaría ver al obispo Bararreja, como al arzobispo extranjero de Santiago, abogando por el fin de ese aberrante celibato eclesiástico que, como ya se sabe y reconoce, no tiene fundamento evangélico o doctrinal alguno y que tanto violenta los derechos sexuales y reproductivos de quienes perfectamente podrían compatibilizar su vocación sacerdotal con el sexo saludable y una familia. En vez de fomentar toda esa suerte de aberraciones y prácticas sexuales al interior de los templos, seminarios y otros recintos religiosos. Episodios que han escandalizado al mundo entero y afligido tanto, como se dice, a los últimos pontífices, cuando han implicado a niños y adolescentes en los abusos de quienes tenían la obligación de quererlos, protegerlos y orientarlos para una vida sana y próspera.

Para ser consecuentes, además, con los derechos del pueblo y el clamor de su grey, bien se vería, por ejemplo, que el obispo Bararreja y sus colegas del Episcopado golpearan las puertas de El Vaticano para que el Papa escuche la voz de la feligresía de Osorno disgustada con la presencia en el sur de Chile de un obispo que al menos calló frente a los abusos sexuales cometidos por un cura degenerado como Jorge Karadima. Para que, además, notáramos todos los que somos o no creyentes que la Iglesia Católica abraza las ideas democráticas por sobre las monarquistas. Los valores de la tolerancia y el respeto a las ideas ajenas por sobre las de este clericalismo que tanto daño la hace a la fe y a la convivencia social.

(28 de septiembre, 2016)

Un tardío acto de justicia

Nuestro Diario Electrónico publica hoy la nómina completa de las 83 integrantes de la Fuerza Aérea que después del Golpe Militar de 1973 fueron acusados y condenados como traidores a la patria por haber discrepado de esta asonada que dio origen a 17 años de Dictadura. Entre ellos destaca, por supuesto, la figura del general Alberto Bachelet, padre de la actual mandataria. Recién ahora, después de todos estos años, la Corte Suprema ha anulado las sentencias que los afectarían lo que es indudablemente una excelente noticia si ello no considerara todo el tiempo transcurrido sin que el Estado chileno reivindicara a todos estos afectados. En este sentido, cómo no lamentar que todos los gobiernos transcurridos hayan tenido tanta negligencia al respecto, incluyendo por supuesto a la primera y esta segunda administración de la hija de uno de los afectados a quienes les cambiara tanto la vida (según declaran algunos) después de que bajo torturas les obligaran a autoinculparse para salvarse del patíbulo. Muchos de los cuales ya murieron o, como en el caso del propio Bachelet, no resistieron entonces los tormentos que se les aplicaron. Una buena noticia pero una vergüenza más, sin embargo, de todo el tiempo en que se ha tomado la posdictadura por recuperar la verdad de lo acontecido como la dignidad de las víctimas y su justa reparación.

Muchas veces hemos señalado que nuestras “heroicas” FFAA han ocasionado más muertos entre sus propios connacionales que en las guerras con nuestros supuestos “enemigos externos”. Masacres y homicidios por doquier a lo largo de toda nuestra historia nacional contra los pueblos aborígenes, contra los trabajadores del norte y sur de país, contra los estudiantes y otros, siempre avalados por sus mandos superiores como por los sucesivos gobiernos. Entre ellos, los de Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Campo que compiten con Pinochet en el número de víctimas que tienen a su haber.

Ejecutados, torturados, exiliados, relegados y detenidos muchas veces por la Fuerza Aérea de Chile, rama de las FFAA que siempre solo se enfrentara con civiles o con denominados enemigos internos y que consolidara el Golpe con aquel cobarde y terrorista bombardeo de La Moneda que le ocasionara la muerte al propio presidente constitucional y desde donde las tropas de asalto tomaran toda suerte de detenidos que, una vez rendidos, fueran ejecutados. Una criminal acción desde aquellos temibles Hawker Hunter que, como se sabe ahora, también bombardearían poblaciones civiles y zonas aledañas a La Moneda, causándole la muerte a una pequeña niña, por ejemplo, respecto de la cual su familia solicita ahora justicia y vindicación.

Pilotos criminales e irreflexivos que acometieron este horror que siempre nos recordarán las imágenes de nuestro Palacio Presidencial incendiado y destruido y que, como se ha dicho, se constituye en el acto terrorista más grave de nuestra historia y cuyos hechos son mantenidos en el anonimato hasta hoy por la Fuerza Aérea y, por cierto, en la más completa impunidad. Pese a todos los requerimientos judiciales y periodísticos burlados por la superioridad de esta institución, a la cual se le han destinado multimillonarios recursos para comprar aviones, pagarse excelentes estipendios y tener derecho a una jubilación ostentosa en relación a la que reciben los millones de civiles que efectivamente han hecho “patria” trabajando durante todas sus vidas. Mientras que con recursos y armas que le confían los chilenos a estos forajidos y cobardes se dedicaran a las carnicerías humanas y destrucción como las se descubren y siguen denunciándose.

Vamos a ver si la dormida “clase política” se suma ahora a la demanda nacional porque se den a conocer y se juzgue la acción de los pilotos de guerra que apuntaron contra nuestro orden institucional y la vida de ALLENDE Y SUS COLABORADORES. Sin embargo, estimados auditores, no tenemos mucha confianza

en ello cuando en medio de todo lo que se conoce, el presidente del Senado e hijo de expresidente Lagos (ya auto ungido como candidato presidencial) se mostrara partidario de diferir para un nuevo gobierno la derogación de la Ley Reservada de Cobre que favorece a los militares con el 10 por ciento de todas las ventas de Codelco nuestra principal cuprífera. Cuando la propia Mandataria a rato parece más una integrante de la llamada familiar militar que de la civilidad chilena. Especialmente cuando la vemos desfilar ante las tropas y entonar los himnos castrenses con ocasión de las paradas militares. Única forma en que se entiende que a más de 40 años del Golpe y el homicidio de su progenitor recién ahora el máximo Tribunal le revoque la condena ejecutada por sus pares de esta cobarde y dispendiosa Fuerza Aérea.

A lo anterior, cómo no agregar lo que está sucediendo con CEMA Chile de lo cual informan hoy nuestros noticiarios y Diario Electrónico. Una institución que hasta unas pocas semanas siguiera presidida por la esposa del Tirano y en la cual se hicieran toda suerte de negociados y fraudes para dotar a la familia del Dictador de un buen pasar y dejara a sus herederos y amigos bien provistos. Situación avalada también por los gobiernos de quienes hoy buscan reelegirse, cuando ahora al Consejo de Defensa del Estado no le quedará más que acoger la revocación de su personalidad jurídica... después de una investigación del ministerio de Justicia. Cuando recién nos enteramos que CEMA Chile llegó a utilizar más de cien diferentes Rut para operar, defraudar al fisco y camuflar sus turbios negocios.

(5 de octubre, 2016)

Dios mediante

Irrumpimos en el debate político que ha ocasionado la iniciativa de Camila Vallejo y otros parlamentarios comunistas a objeto de acabar con las invocaciones a Dios que se hacen al inicio de las sesiones del Parlamento. Sin duda, una costumbre que no se condice con nuestro estado laico y que más bien se nos hace una simple tradición todavía adherida a los protocolos de las distintas instituciones del Estado. Teniendo razón la Diputada respecto de lo que plantea, la principal objeción que recibe su propuesta es lo desconsiderada que resulta ella con la fe religiosa que, según las propias encuestas, profesa al menos el 80 por ciento de los chilenos y, en el mundo, muy posiblemente el mismo o más alto porcentaje de habitantes. Se le reprocha, asimismo, que una parlamentaria izquierdista, como ella, ande tan preocupada de un tema más bien irrelevante con todo lo que habría que legislar en favor, efectivamente, del pueblo que representa. Una nación tan angustiada, como sabemos, por los rezagos económicos sociales, la injusta distribución del ingreso y el abuso cotidiano de los poderosos.

Otros, como se sabe, se irritan con su iniciativa después de todo lo que hicieron las iglesias cristianas por acudir en beneficio de los perseguidos de la Dictadura, acogerlos en la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, y convocar a todos los creyentes del mundo a solidarizarse con nuestra lucha contra la opresión. No es que no tenga razón nuestra querida Camila cuando efectivamente somos un estado laico. Solo que su actitud parece desconsiderada, poco oportuna y con falta de delicadeza.

Otros sospechan que cuando las izquierdas se quedan sin causas revolucionarias, empiezan a marcar diferencia política con asuntos de poca envergadura. Sobre todo, cuando se pertenece a un partido que forma parte de una coalición oficialista que después de 27 años está encantada o rendida a la herencia neoliberal de la Dictadura.

En todo caso, habría que recomendarle a los parlamentarios que “comulgan” con esta iniciativa que también debiera eliminarse de nuestro Himno Nacional esa fatua y religiosa idea de que nuestro país sería una “copia feliz del Edén”, en alusión al paraíso que las iglesias nos prometen para después de la muerte.

Ciertamente que el tema no es nada de relevante, estimados auditores, y estamos seguros de que si efectivamente Dios existe, a éste para nada le hace perder el sueño esta iniciativa parlamentaria del país más austral y perdido dentro del globo terráqueo, uno de los más pequeños e insignificantes dentro del firmamento. Porque ciertamente Dios tendría mucho más de qué preocuparse por administrar inteligentemente el colosal macro y microcosmos que los ateos le niegan autoría. Y que a los agnósticos no les va ni les viene.

Y pensar que cuando éramos niños se nos invitaba a cantar “A Dios llevamos en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar” sin que nadie, entonces, se irritara por ello y nos recordara que éramos un estado laico.

(18 de octubre, 2016)

Epílogo

Municipales: La derrota transversal de la clase política

Pocos ciudadanos concurren a la llamada “Fiesta de la Democracia”.

Apenas un tercio de los convocados participó en estas últimas elecciones municipales, pese a los desesperados llamados de toda la clase política, de algunos medios de comunicación, de la propia Iglesia Católica y de otros referentes animándonos a concurrir a las urnas. Aunque la abstención fue legalizada y legitimada por quienes suprimieron el voto obligatorio, sin embargo esta vez se nos hizo creer esta vez que era una irresponsabilidad.

Claro; las autoridades sospechaban con razón que el repudio generalizado a la corrupción y a la ineptitud de nuestros gobernantes pudiera expresarse en esta renuencia electoral, pero nada efectivamente pudieron hacer para evitarla. Con ella, es ahora la falta de legitimidad de todos los elegidos lo que desacreditará todavía más a nuestro sistema político pretendidamente democrático. Solo bastaría restarle el 70 por ciento a los votos de los que “ganaron” para darnos cuenta que muchos alcaldes y concejales fueron elegidos por un ínfimo apoyo real de sus comunas. En muchos casos por menos del 15 por ciento real de los ciudadanos, situación que puede afectar mucho sus pretensiones al momento de ejercer sus cargos.

Se nos dirá que la abstención es un fenómeno generalizado en todas las democracias del mundo, pero está claro que aquí las cifras fueron demasiado elevadas e indudablemente representan el malestar ciudadano, su indignación, más que a su desidia o desinterés en la política.

De esta forma es que ahora debemos hablar más de derrotados que de ganadores. A excepción de la enorme sorpresa que en Valparaíso causara la elección de Jorge Sharp, joven militante del Movimiento Autonomista de izquierda, que se impuso contra todos los pronósticos y dejó sentado que las mejores opciones políticas para el futuro radican en los sectores más vanguardistas y críticos del actual sistema. Por algo, al momento de su triunfo, lo primero que dijo Sharp fue que su victoria terminaba el duopolio político afianzado en La Moneda, el Parlamento y los municipios del país. Además de éste, destaca la gran cantidad de postulantes independientes que aventajaron a los representantes de los partidos, como si no militar fuera ahora la más acertada opción política, un verdadero signo de confianza popular.

Si viviéramos una democracia seria, a esta altura habría caído el Gobierno y candidaturas presidenciales como la de Ricardo Lagos Escobar ya tendrían que haber renunciado a sus pretensiones electorales, después de la contundente derrota de al menos tres emblemáticas candidatas bacheletistas, cuanto el estrepitoso fracaso electoral de Carolina Tohá, la edil de Santiago, apoyada por el Expresidente y por cuya reelección apostara todo el oficialismo y sus partidos.

Perdieron, también en estos comicios las figuras más comprometidas en los escándalos referidos al financiamiento irregular de candidatos y partidos. Patético resulta, en este sentido, el enorme daño hecho por los millonarios aportes de Soquimich y del yerno del Dictador, Julio Ponce Lerou, a la política, así como la derrota de varios caudillos regionales que permanecían aferrados a sus cargos municipales. Todo lo que habla de un

electorado plenamente consciente de la corrupción también entronizada en los gobiernos comunales.

No deja de ser expresivo que a los pocos minutos de conocidos los escrutinios, políticos y operadores empezaran a desahuciar de inmediato la posibilidad de restablecer el voto obligatorio, previendo, qué duda cabe, que los resultados pudieran serles más adversos todavía si los desencantados y furiosos tuvieran que concurrir a las urnas.

La ventaja ostensible de la derecha en los resultados es de especial responsabilidad del oficialismo y la “Nueva Mayoría”. No es que los candidatos opositores lograran aumentar su caudal electoral, sino simplemente de que la abstención fundamentalmente le restó sufragios al oficialismo. Es cosa de comparar sus votaciones, todavía más discretas que las del pasado, para comprobar que quienes se quedaron en sus casas en su amplia mayoría representan una sensibilidad de izquierda, partidaria de los cambios, pero decepcionada de la forma en que las promesas del actual gobierno se han hecho agua.

Aunque Ricardo Lagos haya dicho anoche que él interpreta la derrota por la velocidad de las transformaciones, lo cierto es que desdeña con ello las enormes manifestaciones sociales que reclaman el término de las AFP, una nueva Constitución, una profunda y efectiva Reforma Educacional. Además de tantas otras demandas que no han ido de la mano de la derecha, ciertamente, sino de los sindicatos, de los estudiantes y de múltiples organizaciones populares. Es posible que el descalabro electoral de la Nueva Mayoría no hubiese sido tan lapidario si el Expresidente no estuviese manifestando tanta obsesión por volver a La Monedada. Cuanto se sabe que su administración fue la más refractaria a los cambios entre todos los gobiernos concertacionistas, así como estuvo plagada de episodios que atentaron gravemente contra la probidad. Como el Caso MOP Gate.

Bochornoso resulta que los dos partidos que son hijos del pinochetismo, como la Udi y Renovación Nacional, se ubiquen como las colectividades más votadas. Mientras que la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD van quedándose en la retaguardia electoral con el Partido Radical y el propio Partido Comunista, agrupación que en esta elección aparece pagando el costo de una alianza político electoral que embadurna su trayectoria vanguardista. Quizás si la misma derecha debiera evitar que el otro expresidente candidato, Sebastián Piñera, se identificara tanto con sus partidos y movimientos. Cuando se comprueba el claro repudio ciudadano a los corruptos, así como la opción del electorado por los rostros nuevos de la política.

Jocosas nos parecen las explicaciones entregadas después de esta jornada por la Jefa de Estado al referirse a la abstención, además de aludir al “malestar ciudadano por la falta de probidad, renovación de liderazgos y pobreza de ideas”. En una intervención que nuevamente busca imputarles a los demás lo que han sido los principales dislates de su administración, aferrándose a un equipo de colaboradores que, además de sus “malas prácticas”, se ha mostrado inepto e insolvente políticamente. Cuando ha sido su propia figura, por lo demás, la que más se ha desmoronado en confianza y adhesión. La que más ha contribuido a frustrar el advenimiento real de la democracia y de la justicia social.

Finalmente, parece saludable la evidencia de que existen partidos y movimientos de izquierda que no logran capturar el apoyo ciudadano, lo cual es atribuible a sus discursos vacuos, faltos de propuesta, como a las desmedidas ambiciones personales de sus archi consabidos caudillos. Todo lo cual le señala a la Izquierda una refundación profunda, genuinamente democrática y generosa. En la que se reconozcan nuevos y sólidos liderazgos políticos y éticos.

